

EMPRESARIOS, TECNÓCRATAS Y MILITARES.

La trama corporativa
de la última dictadura

Coordinado por

Alfredo Raúl Pucciarelli

Siglo
veintiuno
editoras
Argentina

La política contra la economía: los elencos militares frente al plan económico de Martínez de Hoz durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1981)*

*por Paula Canelo***

"No se entiende el terrorismo de Estado y sus consecuencias a partir de las explicaciones llanas que se remiten a procesos económicos o sociales y que niegan toda autonomía a la *construcción propiamente política* del programa dictatorial, que partía, en todo caso, de una visión desquiciada de los conflictos en la sociedad argentina y en el mundo."

HUGO VEZZETTI, 2002:161

"Lo económico, social y político están íntimamente entrelazados y recíprocamente vinculados, de manera que forman un todo indivisible que se

llama Política con mayúscula." GENERAL

ALBANO HARGUINDEGUY, *mayo de 1978*

Introducción

A diferencia del nacionalismo aristocrático uriburista que buscó restablecer las jerarquías sociales perturbadas por la "chusma radical", del intervencionismo militarista de la Revolución de 1943 que se propuso recomponer la paz social contra la "agitación comunista", del virulento antiperonismo restaurador de los "gorilas" de la Libertadora, y del autoritarismo burocrático modernizante de la Revolución Argentina, los militares que llevaron adelante el autodenomina-

* Este trabajo forma parte de una investigación en curso realizada gracias a una beca del CONICET bajo la dirección del doctor Alfredo Pucciarelli, y presenta resultados parciales de la tesis de maestría en Ciencia Política, Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad de General San Martín (IDAES/UNSAM). Deseo agradecer muy especialmente los comentarios de Alfredo Pucciarelli, Ricardo Martínez Mazzola, Martín Schorr, Ana Castellani y Mariana Heredia.

** Socióloga, becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), docente de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

do Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) encontraban las causas principales de la larga crisis argentina en la forma particular en que se habían establecido las relaciones entre la sociedad y el Estado populista desde mediados de la década de 1940. Más concretamente, en el modo particular de constitución de sujetos y actores sociopolíticos ligados a ese modelo, expresado en una creciente activación social y política que desafiaba el "normal" funcionamiento del capitalismo argentino y que denotaba, entre otras cosas, la ausencia de una clase dirigente "proba", tras el agotamiento del Proyecto Nacional de la ilustrada Generación del ochenta. En esto, como veremos, coincidían con un núcleo de civiles liberales, quienes supieron advertir con prístina claridad la oportunidad histórica única que se les presentaba para llevar adelante el proyecto refundacional más devastador de la historia argentina.

El principio de legitimidad invocado por las Fuerzas Armadas en cada una de las asonadas militares de la historia, que les permitió erigirse recurrentemente como la única fuerza arbitral legítima y última *ratio* ante la fragmentación de la sociedad civil —lugar de los enfrentamientos, el "egoísmo" y los "intereses individualistas"—, ha sido el de encarnar la unidad nacional. De esta forma, los militares comparten la inspiración *unanimista* presente en la mayoría de las corrientes políticas argentinas: una marcada tendencia a equiparar la propia doctrina con la identidad nacional y una acentuada intolerancia hacia el conflicto, que lo asocia con la división, el faccionalismo y los intereses particularistas.¹ Sin embargo, en el caso militar, este unanimismo se ve profundizado por los rigores de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, que acentúa los sentimientos de superioridad de los oficiales y la pretensión de identificación institucional con la nación, con la consecuente incapacidad de asumir el carácter conflictivo de una sociedad plural.

¹ Martuccelli y Svampa (1997) sostienen que, si bien la expresión más acabada de unanimitad dentro de las vertientes políticas argentinas es el peronismo, esta noción recorre gran parte del espectro político, incluyendo, entre otros, los postulados del proyecto liberal-conservador y las doctrinas militares. En este sentido, cabe preguntarnos si las propiedades del unanimismo que señalan estos autores resultan dimensiones intrínsecas de cualquier proyecto político, y no una característica exclusiva de las corrientes políticas argentinas. Para algunos elementos sobre este tema, véanse las posiciones de Sigaly y Verón (1988) y la crítica de Halperín Donghi (1996).

Sin embargo, y muy lejos de responder a esta pretensión *suprapolítica*, los elencos militares estuvieron atravesados, a lo largo de su historia, por numerosos conflictos internos nutridos de las diversas vertientes políticas que atravesaron a las instituciones militares desde su origen y que respondían, fundamentalmente, a la intrincada trama de relaciones cívico-militares que habían impulsado los sucesivos golpes de Estado (Rouquié, 1981). Pero en el caso particular del Proceso, la presencia de estas divisiones internas se daba en forma poco usual, de acuerdo con algunos rasgos propios que presentó la experiencia iniciada en 1976: en primer lugar, por su unificación en torno a la Doctrina de Seguridad Nacional² que definía una nueva amenaza civilizatoria, la llamada "guerra revolucionaria", llevada adelante por un enemigo total: la "subversión"; en segundo lugar —característica también derivada de la influencia de esta doctrina—, por el involucramiento conjunto de las tres Fuerzas en la conducción del gobierno militar, que superpondría a los conflictos *intrafuerzas* los enfrentamientos *interfuerzas* y los potenciaría, para devolver un cuadro de elevada fragmentación interna;³ en tercer lugar, el diseño institucio-

² A partir de la modernización, profesionalización y relativa homogeneización ideológica de la corporación militar producidas desde mediados de la década de 1950, las Fuerzas Armadas latinoamericanas redefinieron su misión estratégica en el marco de la influencia de una nueva doctrina —la Doctrina de Seguridad Nacional— y del adiestramiento "antisubversivo", ambos bajo la hegemonía de los Estados Unidos a nivel continental. La posibilidad de la guerra atómica, uno de los ejes programáticos de la llamada Doctrina de Defensa Nacional que habían caracterizado el período de la Guerra Fría, quedó desplazada frente al viraje estratégico de los Estados Unidos, que comenzó a elaborar una doctrina militar basada en el supuesto desarrollo de una guerra mundial de nuevas modalidades, no convencional, que requería de adopción de nuevos métodos de instrucción militar. Este criterio llevó a diseñar y exportar políticas de seguridad que incluían la intervención militar oculta mediante el uso de mercenarios, la intervención directa, el apoyo logístico, el financiamiento, y la asignación y formación de especialistas militares, además de la coordinación a nivel continental (Vázquez, 1985). De esta forma, de la Doctrina de Defensa Nacional se pasó a lo que serían los primeros esbozos de la "guerra contrarrevolucionaria", donde la lucha contra el enemigo interno "subversivo" —fundamentalmente ideológico— se transformó en la nueva misión militar, inspirada en las experiencias del Ejército francés en las guerras de Argelia e Indochina (López, 1986).

³ En el caso del Proceso de Reorganización Nacional es necesario relativizar la importancia que revisten los esquemas tradicionales de análisis de las corrientes ideoló-

nal y del proceso de toma de decisiones que involucraba en partes iguales a las tres Fuerzas, otorgándole a cada una un poder de veto nada despreciable en virtud de una acentuada compartimentación del poder; por último, y no menos importante, por la novedad, potencialmente explosiva, de la naturaleza de la alianza que llevaron adelante militares y civiles liberales, en la que los segundos se empeñarán en la conquista del Estado para refundarlo, asociados a los primeros, parte fundamental del aparato estatal.

En este contexto de fragmentación interna, de nula tolerancia al conflicto y de completo involucramiento institucional, la forma en la cual se expresaron las disputas internas durante el Proceso de Reorganización Nacional fueron altamente destructivas para el sistema en marcha, y conspiraron, entre otras cosas, contra la estabilidad del régimen militar, contra el logro de los objetivos perseguidos y, postreramente, contra la integridad institucional misma de las Fuerzas Armadas. Si bien durante una primera etapa los militares se mantuvieron sólidamente encolumnados tras los imperativos de la "lucha antisubversiva", su principal recurso de legitimidad y cohesión interna⁴ una vez agotada la tarea, y dada la incapacidad de establecer bases mínimas de acuerdo alrededor de los objetivos propositivos del régimen, las disidencias encontraron su canal de salida principal en las críticas a la política económica de Martínez de Hoz. Paradójicamente, lo que sería una de las principales "herencias exitosas" del Proceso fue, a corto plazo, la excusa principal de las fuerzas centrífugas que minaron ostensiblemente las bases de la ingeniería refundacional del régimen.

El presente trabajo apunta a desentrañar las resistencias que presentaron las Fuerzas Armadas frente al plan económico de Martínez

gicas internas en las Fuerzas Armadas. Los modelos que suponen bandos ideológicos relativamente estables a partir de los cuales se ordenarían los pronunciamientos político-institucionales militares —tales como *liberales versus nacionalistas*, *colorados versus azules*, etcétera— y sus enfrentamientos internos, se revelan como poco consistentes para dar cuenta de lo acontecido durante el período. En este sentido también se pronuncian, entre otros, los trabajos de Quiroga (1990) y Novaro y Palermo (2003).

⁴ Para distintas ópticas acerca de la importancia que adquirió la "guerra contra la subversión" como recurso de cohesión interna y de legitimación externa del golpe en una primera etapa, véanse Canelo (2001), Cheresky (1985), O'Donnell (1997), Quiroga (1990) y Sigal y Santi (1985).

de Hoz durante el período 1976-1981, en particular aquellas que se gestaron en las más altas posiciones de las cúpulas militares y que, por lo tanto, jugaron un rol central en el complejo juego de alianzas y oposiciones que atravesó los altos mandos del Proceso. Como veremos en las páginas que siguen, los frentes de oposición interna a la política económica se cristalizaron, en primer lugar, en las posiciones adoptadas por la Armada y en la figura del almirante Massera, entonces comandante en jefe y miembro de la Junta Militar; en segundo lugar, en los sectores que llamaremos "estatistas" de las Fuerzas Armadas, que durante el Proceso se expresaron tanto en la fracción "dura" del Ejército, alineada tras la figura del general de brigada Ramón Genaro Díaz Bessone, fugaz ministro de Planeamiento del régimen, como en los *burócratas* al frente del complejo militar-industrial y de las empresas estatales prestadoras de servicios; por último, en el representante principal de la fracción "politicista" del Ejército, el general de división Roberto Viola, primero comandante del Estado Mayor General, luego comandante en jefe del Ejército y miembro de la Junta Militar y, finalmente, el segundo de los presidentes del Proceso.

Una coincidencia imperfecta: civiles y militares en los albores del golpe de 1976

Todos los golpes militares de la historia argentina han sido golpes cívico-militares. La lectura que supone que las Fuerzas Armadas argentinas operan como el "brazo armado" ejecutor de las políticas que dictan los intereses civiles de turno —origen de la difundida imagen del "perro de la oligarquía"—, olvida que la intrincada trama de relaciones sociales que involucra a las Fuerzas Armadas con el resto de las élites sociales y políticas se combina en forma ambigua con el aislamiento profesional y la consolidación de un férreo núcleo de intereses y valores institucionales propios.⁵ Así, la gestación de las inter-

⁵ Potash (1994) y Rouquié (1981) coinciden en señalar que en la definición de las actitudes político-ideológicas militares intervinieron múltiples elementos, entre los que se combinaron variables "exógenas", como la pertenencia y origen sociofamiliar, los lazos contraídos por matrimonio y las amistades civiles, y "endógenas", tales como

venciones militares sería producto de una reacción militar conforme a normas e intereses específicos que coinciden, en determinadas coyunturas, con los de otros grupos institucionales o políticos, posibilitando la gestación de alianzas.

La alianza cívico-militar que promueve el golpe de Estado de 1976 está conformada por los únicos actores que reclamaban para sí cierta condición de "inocencia" en relación con el caos que venían a conjurar proclamando una radical condena del pasado —en términos de O'Donnell, los únicos actores "incontaminados"—: una nueva generación en las Fuerzas Armadas, diferente de aquella que había conducido la Revolución Argentina, y ciertos grupos de la *derecha liberal tradicional*, cuyos objetivos confluyeron, al menos inicialmente, con los de una nueva corriente del liberalismo económico: la *derecha liberal tecnocrática* (O'Donnell, 1997).⁶

Entre estos grupos militares y civiles se consolida una coincidencia fundamental —de la que surgirá, entre otras cosas, la definición del plan económico de Martínez de Hoz—: un diagnóstico común acerca de la naturaleza de la crisis argentina y de los instrumentos fundamentales que debían ser aplicados para exorcizar el caos y restablecer el orden. La condición de posibilidad de esta coincidencia fue, sin dudas, el visceral *antipopulismo* que todos ellos compartían, y la percepción de una *amenaza* en cuyo alto grado de peligrosidad también coincidían.⁷

la formación profesional, la pertenencia institucional, y los diferentes lazos de amistad y jerarquía establecidos por la trayectoria personal de cada oficial, de acuerdo con los diversos destinos, ascensos y nombramientos. Así, cada oficial sería sujeto de distintos sentimientos de lealtad: familia de origen, parientes políticos, amistades civiles, camaradas cercanos, jefes directos, leyes y reglamentos militares, etcétera.

⁶ Representantes de ambos grupos integrarán el equipo económico de Martínez de Hoz, y a lo largo de la gestión se revelarán algunos elementos de tensión no desdeñables entre ambas concepciones, tensión que, finalmente, se resolverá a favor de la derecha tecnocrática. Para un detalle sobre esta fragmentación en el interior del equipo, véase el artículo de Mariana Heredia en este volumen.

⁷ En este sentido, vale confirmar la siguiente hipótesis de O'Donnell: "[...] el bajo nivel de amenaza en el caso argentino de 1966 permitió un alto grado de explicitación de las diferencias entre las corrientes paternalistas, nacionalista y liberal. Los casos de mayor amenaza previa tienden a provocar una mayor cohesión en las Fuerzas Armadas, al menos mientras pueda hacerse un argumento verosímil de que aquella no

Por un lado, para los militares cohesionados tras los postulados de la Doctrina de Seguridad Nacional —que, como ya mencionamos, había sabido limar las asperezas entre las distintas fracciones militares alineando a las Fuerzas Armadas tras los imperativos de la "guerra contrarrevolucionaria"— el peronismo había dejado de ser, como habían sostenido antaño los oligárquicos azules, una barrera de contención contra la "subversión": ahora, eran su propia potencialidad movilizadora y sus características organizativas las que lo convertían en la puerta de entrada de la "infiltración ideológica subversiva", tal y como habían sostenido los integrantes de la fracción colorada.⁸

Peronismo y "subversión" eran asociados en una construcción dual del oponente: por un lado, la figura de la "subversión" —si bien era comprendida en términos muy amplios, fundamentalmente de naturaleza moral— intentaba dar cuenta de un enemigo ideológico, "nihilista", "apatrida", contra el cual la corporación militar libraba una "guerra total" (Canelo, 2002); por otro, y asociado a la "subversión", se encontraba un enemigo "corrupto", "demagogo" y "oportunistista", que había "cohabitado" con el enemigo "subversivo", fundamentalmente durante el último gobierno peronista (1973-1976), y era el principal beneficiario del entramado estatal "ineficiente" que de-

ha sido extirpada. [...] Por añadidura, la mayor gravedad de la crisis económica también implicada [...] por un más alto grado de amenaza, entraña que es más estrecho el desfiladero de ortodoxia a través del cual el BA (*Estado Burocrático Autoritario*) debe intentar la normalización de la economía. Esto a su vez implica que, cualquiera que fuere su peso en el interior de las Fuerzas Armadas, entonces los liberales —militares y civiles— determinan más decisivamente que en los casos de menor amenaza el rumbo de las políticas económicas y sociales del BA" (O'Donnell, 1982: 94).

⁸ El diagnóstico militar del momento resulta más compatible con las tesis de la fracción militar colorada —sucesora de los "gorilas" de la Revolución Libertadora— que concebía al peronismo como una "puerta de entrada" del comunismo, y no ya como un freno al mismo, tal como habría postulado el bando azul. Vale mencionar en este sentido que varios de los militares del Proceso habían militado en el bando colorado durante los acontecimientos de septiembre de 1962, y habían sobrevivido a las purgas con que los azules victoriosos intentaron "depurar" a las Fuerzas Armadas. La activa presencia del ex almirante Isaac Rojas y de numerosos protagonistas de la Libertadora durante todo el período bajo estudio, en carácter de "tutela paternal" del Proceso, señala en la misma dirección.

bía ser reestructurado.⁹ De esta forma, resultaba imperativo desactivar las estructuras estatales populistas y las prácticas políticas "venales" y "corruptas" que las habían caracterizado, al tiempo que se aniquilaba militarmente a la "subversión".

Por otro lado, y tras sucesivos y fracasados intentos de gestión económica populista, desarrollista o keynesiana que habían sumido a la economía argentina en una profunda crisis, el nudo del problema estaba claro para los civiles liberales: a pesar de sus diferencias, todos esos intentos habían intentado colocar al sector industrial como eje dinámico del proceso de acumulación, lo que, en el caso del populismo, se había visto agravado por un aumento intolerable de las expectativas y demandas de los sectores populares, y por la creciente gravitación de las organizaciones sindicales como actores políticos.¹⁰ De esta forma, el principal objetivo de los liberales —en versión tradicional o tecnocrática— era el desarme de las bases de sustentación económica del populismo, reestructurando economía y sociedad para acercarlas al ideal de la "eficiencia" neoclásica.

⁹ En palabras de Videla: "La demagogia, agitada con fines puramente electorales a través de slogans, rótulos y frases hechas, no hizo más que enfrentarnos en antinomias estériles y confundirnos profundamente, a punto tal, que hoy es difícil distinguir dónde está el bien y dónde está el mal. Esa demagogia, además, por ser complaciente, dio origen a la corrupción, concebida ésta en la más amplia acepción de la palabra, que llegó a generalizarse en todos los estamentos del Estado. Esa corrupción —justamente por ser generalizada— motivó el trastocamiento de los valores tradicionales, es decir, subversión. Porque subversión, no es ni más ni menos que eso: subversión de los valores esenciales del ser nacional" (*Clarín*, 25/5/1976).

¹⁰ Según Heredia (2000), ya hacia mediados de 1975, en un contexto de profunda crisis económica y de inflación galopante, las críticas de la prensa liberal tradicional al gobierno de Isabel Perón se habrían centrado en la denuncia de los desvíos estructurales característicos del Estado populista —inflación, déficit fiscal, ineficiencia de las burocracias públicas, etcétera— "surgidos de treinta años de políticas colectivistas", y en la "exacerbación de las necesidades" agitada por las organizaciones sindicales, lo cual amenazaba la supervivencia del capitalismo. En este marco, las denuncias sobre el "canibalismo económico", la "delincuencia económica", el "nefasto mercado negro y sus malditos especuladores" denotaban que la preocupación central de los liberales era la posibilidad de derrumbe del peronismo en el poder, que arrastraría sin dudas a las instituciones políticas y económicas "forjadas por los padres de la Patria", más que las actividades de las organizaciones armadas (agregamos, tema dilecto de las advertencias militares).

Una vez confirmadas estas casi impecables coincidencias de diagnóstico, la titánica tarea que se imponían civiles y militares requería de una férrea unidad de acción en dos frentes: el *militar*—que aniquilara el vasto campo de conflicto social y político que había caracterizado a la Argentina durante las décadas anteriores— y el *económico*—que desestructurara las bases socio-económicas del modelo de industrialización sustitutiva y recompusiera canales estables de funcionamiento capitalista—, por lo que resultaban imperativos tanto la unidad en las tareas militares como el alineamiento detrás de las propuestas del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.

En una primera etapa, la "lucha antisubversiva" otorgó un recurso inigualable de cohesión institucional, y también de legitimación ante la sociedad (Canelo, 2001). Existía en el seno de las Fuerzas Armadas un consenso unánime alrededor de la definición del enemigo "subversivo" y de los métodos a emplear en las tareas militares de "lucha contra la subversión", lo que constituyó un factor imprescindible de unidad institucional; asimismo, el golpe militar se había legitimado ante la sociedad a partir del papel desempeñado por las Fuerzas Armadas en la "lucha contra la subversión", había vuelto "natural" la presencia militar en el poder.¹¹

¹¹ Sin embargo, este consenso inicial comenzó a resquebrajarse cuando empezaron a concluir las operaciones y cuando los militares se vieron en la necesidad de proclamar la victoria final en la "guerra antisubversiva". Este resquebrajamiento se nutre de dos vertientes: en primer lugar, de la necesidad de recrear los principios de legitimación del régimen, lo que resultaba a todas vistas problemático para un régimen fragmentado (Canelo, 2001); y en segundo lugar, de las discusiones internas acerca de cómo cerrar el capítulo más cruento del Proceso, que dividían a las Fuerzas Armadas fundamentalmente entre quienes propiciaban la publicación de las listas de desaparecidos y quienes sostenían que no debían rendirse cuentas dado que la legitimidad de lo actuado era indiscutible (Acuña y Smulovitz, 1995). La sublevación de Luciano Benjamín Menéndez en septiembre de 1979 —que continúa, por cierto, una ya acendrada costumbre familiar—, comandante del III Cuerpo de Ejército, a causa de la liberación de Jacobo Timerman, lo cual provocó su arresto y su reemplazo por José Antonio Vaquero, se inscribe dentro de estos conflictos. También en este deseo de clausurar el tema puede leerse la invitación oficial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que iniciará sus labores en el país el 6 de septiembre de 1979 y tendrá resultados contrarios a los buscados, abriendo un frente de peligro para el régimen que no se cerrará nunca.

Por el contrario, ya desde temprano, la política económica supo despertar las resistencias de los más diversos sectores,¹² y atentar contra los requerimientos de consolidación del régimen militar; pero no sólo desde el exterior sino también desde el interior de los cuadros de gobierno. La coincidencia entre civiles y militares revelaría muy pronto su fragilidad: debido a que, más allá de los puntos de acuerdo antes señalados, las contradicciones entre los objetivos perseguidos por el equipo económico y los de los elencos militares serían varias. Entre ellas, y en primer lugar, la incompatibilidad entre la meta de una economía abierta e integrada al mercado mundial y el crecimiento de una industria que las concepciones estratégicas tradicionales de las Fuerzas Armadas concebían como fundamental para el desarrollo bélico nacional; en segundo lugar, la tensión entre la puesta en escena de medidas de política económica que favorecerían a las capas más concentradas y transnacionalizadas de la economía —en particular, al capital financiero, cuyo carácter especulativo y extranjerizante irrita los valores productivistas y nacionalistas de las Fuerzas Armadas—, en desmedro de los intereses inmediatos de las clases medias urbanas, de donde provenía gran parte de los oficiales; en tercer lugar, los males crecientes que provocará la intención de reducir significativa-

¹² Las quejas provinieron desde empresarios industriales que veían afectada su actividad por el encarecimiento del endeudamiento externo, el achicamiento del mercado interno y la competencia de productos importados a partir de la apertura de la economía; pasando por productores rurales que se veían perjudicados por el bajo tipo de cambio real o por productores de economías regionales afectados por los efectos de la reforma financiera y la apertura (Schvarzer, 1984); posteriormente, también desde sectores asalariados perjudicados por la drástica reducción de su salario real y que, en un marco de clausura de los canales de expresión política, desarrollaron un vasto repertorio de acciones de protesta laboral (Falcón, 1996; Schneider, 2000). Finalmente, a mediados de 1978, e inaugurando una estrategia de progresiva ocupación del espacio público, distintos dirigentes políticos publicarán dos documentos muy críticos sobre la política económica. Para estos últimos, al igual que para gran parte de los sindicatos, la política económica constituyó el principal "tema de oposición" al Proceso, dado que sus lazos de colaboración con la dictadura les bloqueaban la posibilidad de manifestarse contra la masacre represiva (así como también para vastos sectores sociales que apoyaban, por acción u omisión, la "lucha contra la subversión"). De esta forma, aun antes que las violaciones a los derechos humanos, la política económica fue el tema principal que articuló los primeros conflictos y oposiciones externas que debió procesar el régimen.

mente el aparato estatal entre quienes no sólo forman parte fundamental de éste sino que además conciben para el Estado un rol mucho más activo como promotor económico (O'Donnell, 1997). En relación con este último punto, también era fuente de tensiones la incompatibilidad entre la tendencia de las Fuerzas Armadas hacia la planificación estatal y la propuesta liberal de entregar a la espontaneidad de las fuerzas del mercado el destino nacional (Schvarzer, 1984). Estos recelos se verán claramente expresados en una serie de reaseguros institucionales a los que será sometido el ministro de Economía, quien deberá aceptar desde el inicio de su gestión una evaluación permanente de parte de las Fuerzas Armadas, y dar cuenta de sus actos no sólo a la Junta Militar sino también a las asambleas periódicas que reunían a los cuadros militares superiores. Su autonomía decisiva y normativa estará limitada tanto por la Secretaría de la Presidencia —en manos de la fracción "politicista" liderada por el general Viola— como por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) —en la que estarán representadas tripartitamente las Fuerzas—, que ejercerán una vigilancia permanente sobre sus actos y los de sus colaboradores, tutela que será reforzada por el nombramiento de tres "oficiales de enlace"¹³ ante el Ministerio de Economía, uno por cada Fuerza, que en la práctica tendrán poder de veto sobre las decisiones ministeriales (Castiglione, 1992). Así, el mismo diseño institucional que promovió la radicalización de los conflictos *interfuerzas* les permitió a diversas fracciones militares oponer al equipo económico una serie de obstáculos que dificultaron su gestión, y el frente militar se transformó en uno de los principales limitantes internos de la política económica.

El otro limitante fue la composición del equipo económico,¹⁴ que no sería en absoluto homogénea: como mencionamos anteriormen-

¹³ Hacia 1978, estos "oficiales de enlace" eran el comodoro Domingo Torea Paz, el capitán de navío Hugo Montagnani y el teniente coronel Mársico Arana.

¹⁴ El equipo económico inicial estaba conformado por José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía; Juan Alemann, secretario de Hacienda de la nación; Guillermo Klein, secretario de Programación y Coordinación Económica; Raymundo Podestá, secretario de Desarrollo Industrial; Mario Cadenas Madariaga, secretario de Agricultura y Ganadería de la nación; Fernando Puca Prota, secretario de Recursos Naturales y Ambiente Humano; Santiago M. Estrada, secretario de Seguridad Social; Guillermo Zubarán, secretario de Energía; Federico Camba, secretario de Transporte

te, entre los reclutados se encontrarían desde hombres de la *derecha liberal tradicional* hasta miembros de una nueva corriente del liberalismo económico, la *derecha liberal tecnocrática*. O'Donnell (1997) concibe a la primera de estas vertientes como integrada por voceros de las viejas clases dominantes agrarias diversificadas en actividades industriales, comerciales y financieras: aunque se encontraba fuertemente debilitada en lo político desde los años treinta, conservaba aún un importante peso ideológico y un gran prestigio social, además de la propiedad de importantes medios de comunicación —el diario *La Nación*, entre otros— desde los cuales defendía el retorno al liberalismo económico vigente en la década del treinta a través de un discurso oligárquico tradicional.¹⁵ Por el contrario, los integrantes de la derecha liberal tecnocrática postulaban la adaptación local de las propuestas a la Hayek o Erhardt, y, en el marco de las transformaciones internacionales de la década del setenta, y, sobre todo, del aumento de la liqui-

y Obras Públicas; Guillermo Bravo, secretario de Comercio; Alberto Fraguío, secretario de Comercio Exterior, Alejandro Estrada, interventor en la Junta Nacional de Granos; Alberto Grimoldi, subsecretario de Comercio Exterior; y Luis García Martínez, jefe de Asesores del Ministerio de Economía; entre otros funcionarios. Al frente del Banco Central se encontraban Adolfo Diz, presidente; Christian Zimerman y Alejandro Reynal, vicepresidentes; Francisco Soldati y Enrique Folcini, directores; y Ricardo Arriazu, jefe de Asesores. Varios de ellos habían ocupado altos cargos durante la Revolución Argentina o el interinato de Guido —Martínez de Hoz, Klein, Alemann, Camba, Puca Frota, S. Estrada, A. Estrada, Diz, etcétera—; al menos tres de ellos —García Martínez, Cadenas Madariaga y Zubarán— provenían del Club Azcuénaga, círculo de intelectuales, políticos y economistas liberales promovido por Jaime Perriau —ex ministro de Justicia de Lanusse, civil de extraordinaria gravitación en el régimen, miembro de la Sociedad de Estudios y Acción Ciudadana (SEA)—, y el general (RE) Hugo Miatello, mientras que otros habían militado en los orígenes de la democracia cristiana o en grupos católicos (Martínez de Hoz, Podestá, S. Estrada). Martínez de Hoz y Perriau se habían conocido casi treinta años antes del golpe y sus inquietudes políticas se habían iniciado tempranamente, ya durante la década de 1940, en torno a un ateneo de estudios —"Ateneo de la Juventud Democrática Argentina"— y una revista —*Demos*—, en los cuales colaboraron numerosos miembros de la élite civil liberal conservadora que integró los gabinetes de sucesivos regímenes autoritarios (Turólo, 1996).

¹⁵ Para Rouquié (1981), ésta sería la derecha ilustrada de los "patricios progresistas" poseedores de la "gallina de los huevos de oro", cuya incuestionada legitimidad social, en un marco de agotamiento de su proyecto nacional, estaría en la base misma de la prolongada crisis hegemónica argentina. El principal exponente de esta corriente dentro del equipo económico sería Juan Alemann.

dez en los mercados financieros, abrazaban las propuestas teóricas de Milton Friedman, volcando el acento hacia la adopción del "enfoque monetario de la balanza de pagos"¹⁶ (O'Donnell, 1997).

En medio de esta tensión entre ambos grupos, Martínez de Hoz sabrá recrear varias de las contradictorias propiedades del liberalismo vernáculo para combinar por un lado, heterodoxia en la gestión y ortodoxia en la retórica; y por otro, para matizar postulados del liberalismo más tradicional con otros de moda en los círculos académicos de los Estados Unidos; o bien emplear al sector público como base de la acumulación financiera, mezclar estrategias ortodoxas de shock con políticas extremadamente gradualistas, etcétera (Novaro y Palermo, 2003).

Los rasgos iniciales del plan económico¹⁷ demostraron cabalmente que el ministro fundaría su estrategia en un alto grado de pragmatismo: luego de una primera etapa cortoplacista de disminución del déficit del sector público, de drástica reducción de los salarios reales y modificación de los precios relativos, se aplicó un ajuste heterodoxo que combinaba pleno empleo y una paulatina recuperación de los salarios con aumento del gasto público. Esta profesión de heterodoxia provocará una inmediata reacción de los seguidores del liberalismo tradicional que, tanto desde dentro como desde fuera del equipo económico,¹⁸ comenzaron a señalar la imposibilidad de frenar la

¹⁶ La influencia de los tecnócratas se expandió en círculos privados, tales como institutos de investigación, lobbies y empresas, y fue la puerta de entrada en la Argentina de los postulados de la Escuela de Chicago que ya habían hecho sus primeras experiencias con la dictadura chilena. Sus representantes en el equipo económico son Guillermo Klein, Alejandro Estrada, Alberto Grimoldi y Ricardo Arriazu, entre otros.

¹⁷ Para un detalle de los lincaamientos principales del plan económico de Martínez de Hoz, véanse los ya clásicos trabajos de Azpiazu, Basualdo y Khavisse (1986), Canitrot (1980 y 1981) y Schvarzer (1981 y 1984).

¹⁸ Los liberales tradicionales "externos" al equipo económico presionaban por la adopción de una política económica "verdaderamente liberal". En este sentido, la figura pública más importante fue la de Alvaro Alsogaray, quien acusaba a Martínez de Hoz de excesivamente "gradualista" o "largoplacista", cuando no de "híbrido" o "desarrollista". A este tono de críticas se sumaron, entre otros, Alberto Servente, presidente de la Bolsa de Comercio, y los miembros del Consejo Empresario Argentino —paradójicamente, otrora presidido por el mismo Martínez de Hoz—, cuyo presidente era Ricardo García, y entre cuyos integrantes podemos encontrar a José Estensoro, Ricardo Grüneisen, Armando Braun, Celedonio Pereda, Francisco Soldati, Rafael Ferrer, Agustín Roca y Federico Zorraquín.

inflación sin un ajuste ortodoxo que combinara recesión con recorte del gasto público. Pero fue recién a mediados del año 1978, luego de la implementación de la Reforma Financiera en 1977, que las tensiones —ahora entabladas alrededor del manejo del tipo de cambio, entre quienes intentaban mantenerlo fijo para alentar las exportaciones agropecuarias y aquellos que buscaban seguir utilizándolo para regular los flujos financieros— estallaron para resolverse, de acuerdo con los requerimientos políticos coyunturales del ministro, en favor de los jóvenes tecnócratas.¹⁹ A mediados de 1978, el plan de Martínez de Hoz hará un giro audaz hacia la profundización de la apertura comercial y el instrumental correspondiente al "enfoque monetario de la balanza de pagos",²⁰ para dar origen, en diciembre, a una nueva etapa de "profundización y ajuste" a partir de la apertura irrestricta del mercado de capitales y la puesta en marcha de la "tabula" cam-

¹⁹ En agosto de 1978, este giro será evidente por el ascenso de Alejandro Estrada quien, promovido por Guillermo Klein, mano derecha de Martínez de Hoz, había tomado pleno control de la Secretaría de Comercio y Negociaciones Económicas Internacionales en diciembre de 1977, luego de la fusión de la Secretaría de Comercio con la de Comercio Exterior, a partir de las renuncias de Bravo y Fraguío; al mismo tiempo, crecerá la influencia de Ricardo Arriazu, jefe de asesores del Banco Central, quien introducirá los postulados centrales de la Escuela de Chicago (Novaro y Palermo, 2003). La figura de Alejandro Estrada es descripta así por Turólo: "Partidario, inicialmente, del desarrollismo, Estrada se había orientado hacia la concepción liberal pocos años antes de incorporarse en el equipo económico en 1976 [...] el suyo no fue un liberalismo meramente teórico [...] estaba convencido de que la única solución para los problemas del país era la liberalización de la economía [...] la convicción intelectual de Estrada y del equipo que éste formó dentro del propio equipo económico (un grupo pequeño, pero homogéneo y extraordinariamente convencido de sus ideas) no participaba del gradualismo, al que sí adhirió Martínez de Hoz" (Turólo, 1996:225). Este "equipo dentro del equipo" estuvo integrado por Juan Dumas, secretario de Negociaciones Internacionales; Héctor Legarre, subsecretario general; Martín Braun Lasala, subsecretario de Precios y Abastecimientos; Hugo Miguens, titular de Lealtad Comercial; y Alberto Grimoldi, subsecretario de Comercio Exterior y luego secretario de Industria.

²⁰ Según Canitrot (1981), esta opción por el enfoque monetario de la balanza de pagos puede haberse fundado en imperativos políticos, fundamentalmente en la negativa de los elencos militares a controlar la inflación por vía recesiva, dado el alto costo social que hubiera implicado un elevado desempleo, tal como había ocurrido en el caso chileno. Al respecto, véase el discurso de Alejandro Estrada del día 14/2/1979 en *La Nación*, en el que el funcionario ejerce una fuerte defensa de la nueva etapa del plan económico por haber logrado evitar los "costos políticos" de la recesión y el desempleo.

biaria. De esta forma, varios de los integrantes del elenco económico, pertenecientes al ala liberal tradicional, comenzarán a retroceder y a alejarse progresivamente de sus cargos: luego de los primeros desgranamientos en 1977 —con las renuncias del secretario de Comercio, Bravo; el de Comercio Exterior, Fraguío (sucedido por Estrada); y el de Energía, Zubarán—, en agosto de 1978 serán los funcionarios agraristas quienes comenzarán a abandonar el barco: el primero fue Carlos Lanusse, subsecretario de Economía Agraria, a quien siguió en diciembre el subsecretario de Ganadería, Alberto Mihura. El 21 de marzo de 1979 renunciará el secretario de Agricultura, Cadenas Madariaga, y hacia julio de 1979 Juan Alemann comenzará a denotar su distanciamiento del "enfoque monetario". Todos estos reacomodamientos implicaron avances de las posiciones tecnocráticas por sobre las tradicionales (Novaro y Palermo, 2003; Schvarzer, 1984).

Martínez de Hoz, entonces, emprendió su tortuosa gestión por un angosto sendero, flanqueado por un lado por los obstáculos que surgieron de los elencos militares y por otro, por la fragmentación interna en el mismo equipo económico. Su rol será el de un verdadero enlace y articulador entre estos grupos, y en ese sentido sus recursos más preciados serán su propia capacidad para manejar la *hibridez* de los instrumentos de su gestión, los vaivenes y ambigüedades de su discurso público y, sobre todo, el hallazgo de sus más acérrimos defensores en un grupo sumamente encumbrado de funcionarios militares, quienes se desarrollaron, durante todo el período, como sus principales soportes públicos: fundamentalmente, el teniente general Jorge Rafael Videla, presidente de la nación, comandante en jefe del Ejército e integrante de la Junta Militar, y el general Albano Harguindeguy, perdurable ministro del Interior del régimen.²¹

²¹ Videla y Harguindeguy fueron los principales soportes públicos del ministro —luego se les sumaría Galtieri—, pero no eran los únicos. Junto a ellos podemos encontrar a importantes funcionarios —tales como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, general de brigada (RE) Ibérico Saint Jean—, vastos sectores del Ejército, la casi totalidad de la Fuerza Aérea y numerosos civiles y militares retirados, sin olvidar los amplios y valiosos contactos internacionales con los que contaba. El caso de la Fuerza Aérea resulta particularmente ilustrativo de la advertencia que realizamos al inicio del trabajo, en cuanto a las limitaciones que ofrecen los esquemas tradicionales de análisis de las corrientes ideológicas internas para dar cuenta de los alineamientos políti-

Esta suerte de "núcleo estable" del Proceso —posicionado, por otra parte, como una suerte de "triángulo estratégico" conformado por la Presidencia, el Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior— estuvo dotado de una extraordinaria capacidad, no sólo de resistencia a las críticas de los más diversos actores sino también de permanencia y estabilidad en el tiempo;²² frente a él, y desde los despachos contiguos del poder, varios fueron los frentes de oposición militar que se atrincheraron. Las siguientes páginas intentan dar cuenta de los motivos que inspiraron la conformación de estos frentes, de su gravitación dentro del esquema de poder y de la forma en la cual conspiraron contra el éxito de los objetivos del Proceso.

eos durante el Proceso. Tradicionalmente ultracatólica y ultranacionalista, cuyo principal exponente intelectual durante la década del sesenta había sido el posteriormente asesinado Jordán Bruno Genta, durante el régimen la Fuerza Aérea hará reserva de su nacionalismo para apoyar a los defensores del plan económico, y jugará un rol público menor que el de las otras fuerzas —a pesar de estar igualmente involucrada institucionalmente en el esquema de poder y en la lucha antisubversiva— para construir una imagen más orientada a los avances técnicos y profesionales. Dentro del esquema de poder tripartito, y continuando con una tradición histórica, la Fuerza Aérea jugará como *moderadora* entre el Ejército y la Armada, y su rol principal será el de *desempatar*—en general, a favor del Ejército— cuando las fricciones entre las otras dos fuerzas se exacerbén.

²² Si bien son numerosos los trabajos que se interrogan acerca de los motivos que inspiran la perdurabilidad del ministro de Economía en su cargo, para lo que despliegan numerosas hipótesis explicativas —véanse, entre otros, Schvarzer (1984) y Canitrot (1980)—, no existe un nivel de reflexión similar en lo que respecta a la igualmente sorprendente permanencia de la dupla Videla-Harguindeguy al frente del régimen militar, en el ya descripto contexto de fragmentación y conflicto internos. Entendemos que la elaboración de una posible hipótesis al respecto debería tener en cuenta al menos tres aspectos: en primer lugar, la importancia que reviste en la lógica militar el respeto a la autoridad dada por la cadena de mandos; en segundo lugar, que los principios de estabilidad e inmutabilidad fueron centrales en la legitimación del régimen desde el inicio, cuestión que apuntaba a diferenciarlo de todos los anteriores, además de ser intrínsecos al "ser militar", por lo que cualquier posible cambio en las esferas más altas del poder era percibido por los militares como extremadamente contraproducente y como un costo demasiado elevado; por último, y lo más importante, que tanto Videla como Harguindeguy jugaron como verdaderos mediadores en los conflictos dentro del Ejército, sobre todo en las tensiones *intrafuerzas* que enfrentaron a los *señores de la guerra* con los "violistas". En este último sentido, y al igual que Martínez de Hoz, será su propia *ambigüedad* la que les permitirá conciliar las fuertes presiones que recibían de los más variados frentes y conservar sus cargos durante el tiempo inicialmente estipulado.

Massera y las expectativas institucionales de la Armada argentina

Luego de décadas de adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas argentinas dentro de los postulados de la Doctrina de la Seguridad Nacional, el Proceso de Reorganización Nacional marca, sin dudas, su desenvolvimiento pleno en sus tres principios básicos: en una concepción específica de la guerra y del enemigo militar, en una determinada concepción de la nación y en una particular relación entre las Fuerzas Armadas y el sistema político, denominada "pauta intervencionista" (López, 1986). Esta última pauta, según la Doctrina, supone el involucramiento total de las Fuerzas Armadas en la gestión de gobierno, para desplazar a los poderes republicanos, bloquear los canales de representación de intereses y proceder al reordenamiento "desde arriba" de una sociedad que se percibe como desquiciada.

Ya durante la Revolución Argentina (1966-1973) la influencia de la Doctrina fue percibiéndose en la forma progresiva y creciente en la cual se fueron involucrando las Fuerzas Armadas en la estructura y las responsabilidades del poder,²³ en el consiguiente mayor compromiso de la institución militar en la toma de decisiones, y en el propósito de permanecer de manera prolongada en el poder, desplazando los imperativos meramente "correctivos" de experiencias autoritarias anteriores para internarse en objetivos de naturaleza refundacional. Pero es recién con el Proceso que se establece la pauta intervencionista típica de la Doctrina que compromete a las Fuerzas Armadas *qua instituciones* en la gestión de gobierno, procediendo a una verdadera ocupación y una extensa militarización del aparato estatal, a partir de un novedoso y complejo modelo institucional.

El primer rasgo de este modelo fue el *reparto tripartito del poder*, a excepción de los cargos municipales —que quedaron, en su mayoría, en manos de civiles afines— las intervenciones a los medios de comu-

²³ Así, el involucramiento aumenta a lo largo de las tres etapas de dicho régimen: mientras que Onganía intentó gobernar con la Junta y las Fuerzas Armadas al margen, centralizando fuertemente las decisiones en el Poder Ejecutivo, Levingston debió aceptar una estrecha tutela de la Junta Militar y la seudoparlamentarización de su gobierno con una creciente participación de las Fuerzas Armadas, mientras que finalmente, Lanusse, como presidente, ofició en rigor como presidente de la Junta (López, 1986).

nicación, los sindicatos, las obras sociales, las organizaciones empresarias y los directorios de empresas públicas, fueron repartidas "equitativamente" entre miembros de las tres Fuerzas; la mitad de las gobernaciones quedó en manos del Ejército y la otra mitad se repartió en partes iguales entre la Armada y la Fuerza Aérea; mientras que la organización y el ejercicio del poder represivo fueron compartimentados también según este criterio tripartito, de acuerdo con una cuadrícula y zonificación exhaustiva del territorio nacional. En cuanto al Poder Ejecutivo, si bien las carteras del gabinete —a excepción de Educación y Economía, que se asignaron a civiles— fueron repartidas según un criterio de dos para cada Fuerza, la presidencia quedó, de acuerdo con las necesidades de la "situación de excepción", reservada inicialmente para el Ejército.

El segundo rasgo del modelo fue "la preponderancia de la Junta Militar por sobre el presidente", según los *Documentos Básicos del Proceso*, la Junta Militar, "órgano supremo de la nación", definía las funciones y funcionamiento de los tres niveles superiores de gobierno, designaba a un oficial superior retirado cuya elección contara con la unanimidad de los tres integrantes de la Junta, y a los miembros de la CAL; controlaba estrechamente su actuación, se reservaba el derecho de destituirlos, y absorbía varias funciones que según la Constitución Nacional les correspondían al Ejecutivo y al Legislativo (el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, las funciones militares y de guerra y la declaración del estado de sitio, más la designación de los miembros de la Corte Suprema y de otros altos funcionarios). Si bien el presidente podía nombrar a los ministros, gobernadores y jueces ordinarios, en este ámbito debía aceptar la tutela de la Junta (Castiglione, 1992). Un rasgo verdaderamente novedoso en relación con otros regímenes autoritarios lo constituyó el hecho de que los comandantes no sólo serían los encargados de determinar los ascensos y nombramientos en las Fuerzas Armadas sino que, además, el presidente de la nación no podía ser, al mismo tiempo, miembro de la Junta (Novaro y Palermo, 2003).

Los propósitos de este diseño institucional particular eran varios y en gran parte se nutrían de las experiencias de gobiernos militares anteriores, cuyos errores intentaban evitar los militares procesistas: se buscaba así obtener un masivo respaldo de las instituciones militares al régimen a partir de su común involucramiento y responsabilidad en el

destino de la experiencia, y un virtual *autoaíamiento* de las Fuerzas Armadas al mismo; posibilitar un control mutuo del poder entre las diferentes fuerzas a partir de un cierto principio de equilibrio institucional, en un intento de neutralizar los conflictos internos y las luchas intestinas; y por último, y sobre todo a partir de la experiencia de "excesiva" autonomía del general Onganía, se pretendía evitar a toda costa la "personalización" del poder, a partir no sólo del acotamiento del poder del presidente que ejercía la Junta Militar, sino también de un procedimiento rotativo de desempeño de los cargos de presidente, integrante de la Junta Militar y comandante en jefe (Acuña y Smulovitz, 1995).

Sin embargo, como veremos, las consecuencias de este diseño fueron notablemente diferentes de los propósitos iniciales: el copiamiento compartimentado del aparato estatal generó, en primer lugar, la conformación de verdaderos "cotos de caza" privados, punta de lanza del poder de los distintos grupos que, disputando el poder a otros, operaban según un criterio cuasi predatorio del sistema en su conjunto; en segundo lugar, creó una profunda fragmentación de los canales institucionales y de los procesos de toma de decisiones, les otorgó un carácter tortuoso, lento e ineficiente, y devolvió un cuadro de "paralelismo de poderes"; en tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, se cristalizó una estructura institucional en la cual los distintos grupos operaban según una lógica de veto y *empate* permanente.

En términos más amplios, esta lógica institucional novedosa posee un rasgo central: la capacidad de potenciar y fortalecer el surgimiento y desarrollo de los conflictos internos de las Fuerzas Armadas y trasladarlos a todo el aparato estatal. Así, los clásicos enfrentamientos *interfuerzas*²⁴ —entre la Armada y el Ejército principalmente— que

²⁴ Los enfrentamientos *interfuerzas* pueden ser analizados en base a dos dimensiones. La primera remite a cuestiones fundamentalmente institucionales, relacionadas con el celo con que cada una preservaría su dominio profesional: de allí, por ejemplo, el resentimiento del Ejército hacia el cuerpo de Infantería de Marina, y la inquietud de la Fuerza Aérea hacia el brazo aéreo de la Marina, etcétera (Potash, 1994). La segunda está relacionada con los posicionamientos políticos relativamente estables que habrían caracterizado a las distintas fuerzas a lo largo de la historia: mientras que el Ejército pareció estar atravesado por tensiones sucesivas entre distintos grupos —*radicales/antirradicales* desde 1916, *conservadores o liberales* (seguidores de Justo), *nacionalistas o corporativistas* (lealess a Uriburu) desde 1930, etcétera— y haber observado una fuerte influencia profesional del Ejército prusiano, la Marina demostró una fuerte fi-

habían atravesado a las instituciones militares durante décadas, encontraron en esta estructura la posibilidad de expresarse en la cúpula misma del poder militar: más concretamente, entre dos de los tres miembros de la Junta Militar, al mismo tiempo comandantes en jefe de sus respectivas fuerzas, Videla y Massera.

A diferencia del Ejército, la Marina no había desempeñado un papel muy relevante desde el punto de vista político durante varias décadas, se había mantenido aislada de la sociedad militar hasta 1955, cuando su papel en el derrocamiento del régimen peronista la remontó a un primer plano. En aquella oportunidad, la confluencia del virulento antiperonismo liberal de los marinos, expresado en la figura del almirante Isaac Rojas, con el más rancio liberalismo del Ejército, representado por la ilustrada personalidad de Aramburu, habían logrado el derrocamiento del "tirano", y emprendieron así un proyecto autoritario de retorno a las condiciones del preperonismo, que, sin embargo, fracasaría ante la obstinación de la resistencia popular y el descomunal despliegue político del líder en el exilio. Será así que, posteriormente, y en ocasión de su triunfal retorno a la escena política argentina en 1973, Perón se cuidará de neutralizar el tradicional antiperonismo de la Armada argentina, y para ello, en tanto presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, seleccionará a un oficial en ascenso, llamado Emilio Massera, cuyas ambiciones políticas y erráticas orientaciones ideológicas lo volvían un interlocutor muy conveniente para los requerimientos del naciente gobierno constitucional, lo cual lo proyectó velozmente hacia la comandancia de la fuerza.²⁵

liación británica dada su imitación del modelo profesional de la *Royal Navy*, lo que la acercaría a la élite local liberal agropecuaria, mientras que la Fuerza Aérea —creada tardíamente, en octubre de 1944— fue, en términos generales, de tendencia católica y nacionalista (Potash, 1994; Rouquié, 1981). Los enfrentamientos *intrafuerzas*, por otro lado, están relacionados con la distinta coloración ideológica que separa a las distintas armas dentro de la misma fuerza: sin dudas, el caso que mejor ilustra esta cuestión es la rivalidad entre la caballería y la infantería dentro del Ejército, que había estallado en 1962 con los cruentos enfrentamientos entre azules y colorados.

²⁵ Ya en etapas muy tempranas de su carrera militar, Massera había cultivado una estrecha relación con políticos y sindicalistas, lo que fue facilitado por sus destinos profesionales: en 1955, como teniente de navío, había sido ayudante secretario del almirante Olivieri, ministro de Marina de Perón; en 1958, fue jefe del Departamento "B" del Servicio de Informaciones Naval, que tenía a su cargo los temas políticos y de inte-

Así es que, a partir de 1976, la Armada intentará recuperar el rol protagonice perdido luego del fracaso de la Revolución Libertadora, bajo la conducción de un almirante muy particular, portador asimismo de un ambicioso proyecto político, de carácter estrictamente personal.²⁶ Las ambiciones y expectativas institucionales de la Marina coincidirían providencialmente con las del propio Massera,²⁷ identificando un adversario común a quien disputarle la gloria perdida: el Ejército. En este contexto, la política económica de Martínez de Hoz jugó como el principal eje articulador del proyecto de poder de Massera y la Armada y, por los mismos motivos, se volvió uno de los principales frentes de inestabilidad del régimen, ya que el conflicto involucraba nada menos que a dos de los tres miembros de la Junta Militar.

En este contexto, la estrategia pública²⁸ de oposición de Massera estará estructurada en tres etapas fundamentales: la primera, de crí-

ligencia interior; durante el gobierno de Lanusse fue destinado por el almirante Gna-vi —de vocación desarrollista—, a la sazón comandante en jefe de la Armada, al Ministerio del Interior, desde donde colaboró con el entonces ministro y dirigente radical, Arturo Mor Roig, en la salida política. Posteriormente, estos antecedentes serían apreciados por Perón, y una vez arribado Campora al poder en 1973, Lastiri le ofrecería a Massera la comandancia de la Armada, quien asumiría el cargo el 7 de diciembre de 1973, para reemplazar al almirante Álvarez, menos útil para los proyectos del gobierno peronista (Turólo, 1996).

²⁶ Ha sido ya extensamente señalado que Massera tenía aspiraciones presidenciales, y que esto lo llevó a entablar acercamientos con políticos peronistas y sindicalistas afines y con líderes políticos internacionales; en esta línea también se interpreta el siniestro armado de un equipo de montoneros secuestrados en el campo clandestino de detención organizado en la Escuela de Mecánica de la Armada. La demostración más cabal de estas ambiciones fue que, una vez retirado de su cargo de comandante en jefe y miembro de la Junta Militar, Massera fundó una agrupación política además de una revista política propia, tribunas desde las cuales intentaría hacerse un lugar central en la escena política argentina postransición (Turólo, 1996; Uriarte, 1992; Vázquez, 1985).

²⁷ Los principales apoyos de Massera dentro de los altos mandos de la Armada eran el vicealmirante Eduardo Fracassi, secretario del Estado Mayor General Naval, y el almirante Armando Lambruschini, jefe del Estado Mayor General Naval y luego sucesor de Massera en la Junta, y al frente de la fuerza; al mismo tiempo, su liderazgo sobre los cuadros intermedios de la fuerza era notablemente sólido (*Somos*, n° 352, 17/6/1983).

²⁸ Las modalidades de presión de la Armada sobre el Ejército combinarán dos estrategias: una pública, estructurada sobre las contradicciones del diseño institucional y sus principios, y una clandestina, sustentada en violentos arreglos de cuentas mediante el asesinato o la desaparición de personalidades clave en cada caso (el embajador

tica velada a la conducción económica bajo figuras metafóricas y ambiguas; la segunda, de mayor identificación de su objeto de confrontación, acicateada por los imperativos políticos gestados alrededor de la figura del "cuarto hombre"; y la tercera, ya en situación de retiro, por su posicionamiento como un verdadero *outsider desestabilizador* ²⁴⁰ *del régimen*, de estilo virulento y radical. Este último momento coincidirá con el inicio de su divorcio de la Armada que, bajo la flamante conducción de Armando Lambruschini, deberá comenzar a tomar posición ante los embates que su antaño conductor le propinaba al régimen, pasando de una ambigua postura inicial a una clara opción por la continuidad del Proceso y el *autoatamiento* institucional.

Las veleidades de liderazgo de Massera lo habían llevado, ya desde los inicios de su aparición en público, a conformar un estilo discursivo altamente complejo y plagado de recursos metafóricos. Massera se proponía ejercer un verdadero efecto de seducción sobre la opinión pública, y para ello intentó distinguirse de otros funcionarios, de prédica habitualmente opaca, a través de un esfuerzo retórico descomunal dirigido a reservarse el rol de "guía espiritual" de los argentinos. Y será precisamente esta complejidad discursiva la que le permitirá filtrar en sus alocuciones públicas, ya desde 1977, veladas críticas a la conducción económica, que comenzaron bajo una forma semioculta: la del "dios-dinero".

"Durante los últimos treinta años se ha venido desarrollando una verdadera guerra mundial, una guerra que tiene, como campo de batalla predilecto, el espíritu del hombre. [...] Y Occidente, intoxicado de indiferencia, se fue replegando sobre sí mientras que del antiguo esplendor de su espíritu sólo un sistema económico parecía sobrevivir, como pobre testimonio último, de una civilización que se refugiaba en sus cavernas de cristal y acero, al amparo de las

en Venezuela Héctor Hidalgo Sola, la diplomática Helena Holmberg, el sindicalista Osear Smith, los curas palotinos de la parroquia de San Patricio, por citar sólo algunos). El uso de los procedimientos utilizados en las tareas "antisubversivas" para zanjar conflictos internos fue ejercido por los más variados sectores de poder, pero la particular afición personal de Massera por el asesinato y la tortura siempre ha sido destacada (Uñarte, 1992), y lo vuelve uno de los personajes más siniestros del régimen.

computadoras, como si realmente no tuviera otra cosa que ofrecer. [...] Y como Occidente está yaciendo dentro de nosotros, levamos a sacar a la luz del día, porque queremos un país de personas, no de masas. Queremos un país de imaginativos, no de autómatas. [...] Queremos un país en donde la economía no sea un fin, ni el dinero un ídolo, porque queremos un país en el que sólo Dios sea más importante que el hombre" (*Clarín*, 15/5/1977).

El estilo tenderá a perfeccionarse hacia una mayor identificación de su objeto de crítica. En ocasión de la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, Massera afirmará:

"Hemos de tener en cuenta que si todo el mundo se debate en la violencia, es porque el materialismo —dialéctico o no— está copando la libertad, y nos está sumergiendo en un universo de cosas sensoriales, en donde el espíritu tiene, cada día, un lugar más precario y lamentable. [...] Los ideales dominantes de nuestro tiempo se limitan a exigir el cumplimiento de planes destinados a enriquecer al Estado, a costa de la esclavitud miserable de sus habitantes o a convertir a las personas en masas amorfas de consumidores compulsivos. [...] Desgraciadamente en los ideales dominantes de nuestro tiempo, suele haber un tremendo desprecio por la vida humana, y los místicos de la redención por las balas, o los fríos apóstoles de la penetración tecnocrática, conducen, por igual, a la masificación del individuo, entronizando un dios-destrucción o un dios-dinero, que no podrán nunca satisfacer la necesidad de trascendencia [...] de la persona humana. Es así que unos y otros están trabajando, ineludiblemente, a favor de la muerte [...]" (*Clarín*, 7/7/1977).

La crítica al materialismo, que atenta contra la "libertad" de los hombres permite su desdoblamiento, en su versión "dialéctica o no". Aquí surge una sorprendente identidad entre los "místicos de la redención por las balas" que adoran a un "dios-destrucción" y los "fríos apóstoles de la penetración tecnocrática" que entronizan al "dios-dinero". Este enemigo "frío" y "tecnocrático", "mercantilista", que convierte a las personas en "consumidores compulsivos" *penetra* desde el exterior y *trabaja*, al igual que "los místicos de la redención por las balas", por

la "muerte". El adversario de Massera se nos presenta así con relativa claridad: una tecnocracia extranjera que le entrega al mercado la vida humana y la convierte en una "máquina de consumo compulsivo". Tanto el enemigo "subversivo" como el "tecnócrata", en su común desprecio por la individualidad humana, masifican a los argentinos y atenían en igual medida contra los objetivos "liberadores" del Proceso.

Durante esta etapa inicial, los embates de Massera se articularon en torno a un juego doble: un casi inexistente cuestionamiento directo a los "costos" y "sacrificios" que acarrea el plan económico para la sociedad argentina, y un complicado andamiaje retórico que fortalecía su pretendido rol de liderazgo frente a los avances del "dios-dinero" dentro del alma de los hombres y los de la *tecnocracia* dentro del esquema de poder.

Sin embargo, imperativos políticos más concretos acelerarán la identificación del adversario, y se abrirá así una segunda etapa hacia octubre de 1977, en ocasión de la necesidad de resolver la mentada cuestión del "cuarto hombre".²⁹ Es en este punto donde descansaba la preeminencia del Ejército dentro de la estructura de gobierno, por lo que la Armada comenzaría a presionar públicamente³⁰ con miras a acelerar el reemplazo de Videla. El pionero fue, una vez más, el almirante Massera, quien al tiempo que sentaba la posición de su fuer-

²⁹ Como vimos, la estructura del poder militar establecida en los *Documentos Básicos* del Proceso suponía que el presidente de la nación no debía ser integrante de la Junta Militar ni estar prestando servicio activo, y que su elección debía provenir de una decisión unánime de la Junta. La figura del general Videla, que reservaba para sí no sólo la titularidad del Ejecutivo en situación de actividad sino que sumaba a ese cargo la comandancia del Ejército e integraba la Junta Militar, vulneraba todos esos principios. Si bien inicialmente esta particularidad fue atribuida a la "situación de excepción" vivida en el momento del golpe, muy pronto la "normalización" de la crisis abrió para los grupos contrarios a Videla, en especial para la Armada, la posibilidad de avanzar en la obtención de espacios de poder.

³⁰ El tema del "cuarto hombre" atraviesa la mayor parte de las declaraciones públicas entre octubre de 1977 y los primeros meses de 1978. La Armada radicaliza su posición en el mes de diciembre, cuando sostiene: "Sólo resta entonces adoptar una decisión sobre la oportunidad en que se dará por terminada la duplicidad de funciones que debió asumir el señor Comandante en Jefe del Ejército. La Armada cree —como lo ha manifestado el señor brigadier Agosti— que para ello no es necesario esperar a 1979. Más aún, considera que están dadas las condiciones para resolver el tema a muy corto plazo" (*La Nación*, 21/12/1977).

za en la cuestión, modificaba su estilo metafórico sumándole el cuestionamiento directo, aunque aún moderado, de la política económica. En octubre de 1977 sostuvo:

"Ciertos aspectos de la conducción económica deben ser rectificadas y/o dinamizadas, para alcanzar el pleno logro económico-social del Proceso de Reorganización Nacional [...] Los Documentos para el Proceso de Reorganización Nacional, firmados el 24 de marzo de 1976 y complementados por posteriores resoluciones de la Junta Militar [...] avenían cualquier posibilidad de confusión. La estructura de poder en este Proceso se vertebra en la Junta Militar [...] y en el Poder Ejecutivo Nacional desempeñado por un oficial superior de las Fuerzas Armadas en situación de retiro, responsable del gobierno y dependiente de aquélla. La situación que hoy se vive tiene carácter transitorio y antes de fin del año en curso, la Junta Militar resolverá cuánto durará esta situación excepcional" (*La Nación*, 12/10/1977).

Este cambio de estrategia inaugura otro: el del núcleo Videla-Harguindeguy, principales soportes de la política económica, que se verán obligados a ratificar inmediatamente el apoyo incondicional de la Junta al ministro y sus medidas; esas respuestas fueron dadas en la mayoría de los casos por el ministro del Interior, quien se erigiría como una verdadera contrafigura pública a las declamaciones de Massera. Así respondía Harguindeguy:

"[...] el Proceso de Reorganización Nacional rechazó prejuicios doctrinarios, influencias ideológicas y la falsedad de la demagogia para aplicar una política económica realista, seria, eficiente, asentada sobre bases éticas y puesta al servicio de los intereses nacionales, una política económica que conduce un equipo de hombres que merecen el respeto y la consideración de todos, pero una política económica que, repito, y no me he de cansar de repetirlo, no es de un equipo sino que es la política económica del Proceso de Reorganización Nacional, y por ende la política económica que para esta circunstancia histórica han adoptado y es la política de las Fuerzas Armadas y tiene, en consecuencia, todo y el total apoyo de éstas (*sicf*)" (*La Nación*, 14/10/1977).

Preparando su retiro de la comandancia y transfiriendo sus funciones al entonces jefe del Estado Mayor General de la Armada, Armando Lambruschini, Massera pedirá:

"Argentinos: vengo a hablarles en voz baja a cada uno, casi vengo a callar para que me oigan. En medio del ruido de las máquinas y el tableteo de las cotizaciones, quiero que palabras tan poco frecuentes hoy como honor, coraje, dignidad, aceleren otra vez el pulso de un pueblo que no admite más quedar dormido. No soy otra cosa que un hombre de armas, pero sé que si la conquista y el dinero bastaran para obtener la gloria, la civilización occidental estaría más influenciada por los fenicios que por los griegos" (*La Nación*, 4/3/1978).

Verdaderamente, Massera va a callar —a retirarse— para que lo oigan —para poder hablar— y dedicar así todas sus energías a la lucha por el poder político, sin las ataduras del cargo. En abril de 1978, ante dirigentes empresarios, establecerá los términos en los que se planteará su trayectoria posterior: la de una lucha cruenta entre la política —"nobilísimo arte de entenderse y creer (*sic*)", según su propia definición—, encarnada en su persona, y la economía, encarnada en Martínez de Hoz.

"No voy a hacer una disertación específicamente económica. En primer lugar, porque no es mi especialidad, y en segundo lugar porque creo que, así como soportamos un inflación monetaria, también padecemos, en este tema, una inflación verbal [...] una de (cuyas) consecuencias más notorias [...] es la naturalidad con que se confunden los roles de la política y los roles de la economía. [...] Si fuera cierto que la política está subordinada a la economía —como sostienen los miopes de buena y de mala fe—, bastaría corregir las desviaciones económicas para que se solucionaran los conflictos políticos, y todos sabemos que no es así. En cambio, basta que la política [...] exhiba sentido del mando [...] basta que sea capaz de despertar el entusiasmo de la gente, para que la economía mejore, aumente la producción, y se estimulen las inversiones creadoras y no meramente especulativas. [...] sólo así, advertiremos que la economía se subordina a la política y la política a la moral" (*La Nación*, 28/4/1978).

Ese mismo día, en una reunión en el Edificio Cóndor a la que asistieron los veintidós oficiales más antiguos de las tres fuerzas, se designó a Videla presidente de la nación hasta 1981, y quedó saldado el tema del "cuarto hombre" y se acordó dar por terminado el "período de excepcionalidad" el 1° de agosto de 1978, día en que Videla debía pasar a retiro, habiendo cesado previamente como comandante en jefe. Asimismo, se dispuso el relevo en pleno de la Junta Militar, según el cual Massera debía abandonar su cargo en septiembre y Agosti en enero, y el nombramiento de los tres nuevos comandantes. El 12 de mayo Martínez de Hoz "anunciará ajustes instrumentales en el programa económico, sin cambio de rumbo", según tituló *La Nación*; sin embargo, ya se anticipaba el cambio que finalmente se haría en diciembre: la presencia pública de Alejandro Estrada aumentaba considerablemente, y se filtraban rumores acerca de la posibilidad de una política monetaria más dura y crecientes malestares dentro del equipo económico. Massera responderá así a estas cuestiones:

"No cabe duda de que nos encontramos todos preocupados por la situación económica del país [...] Entre el aporte financiero y la resultante comercializadora de un proceso industrial, hay una zona palpitante que es el trabajo [...] que tiene una dignidad sustantiva, puesto que coloca al hombre en su verdadera dimensión de protagonista entero del proceso productor [...] Mientras algunos teóricos siguen analizando prolijidades sobre antinomias como capitalismo y populismo, el país reclama soluciones estructurales, soluciones que deben estar alejadas de ese esquema indeciso que nos ha sujetado durante tantas décadas. Es necesario entender que ahora la batalla se dará en otro campo. Mucho más que una opción entre escuelas económicas o estilos de gobierno, enfrentamos una disyuntiva moral. [...] Los utopistas de izquierda y los utopistas de derecha proponen solamente soluciones totalitarias que los argentinos ya no están dispuestos a tolerar. Durante demasiado tiempo se nos ha pedido paciencia y sacrificios para alcanzar un mundo feliz, que parece estar cada vez más lejos" (*La Nación*, 17/6/1978).

El 8 de julio, con la designación de Viola como nuevo comandante del Ejército, el panorama comenzaba a normalizarse, ya que su

nombramiento no sólo respetaba la estructura jerárquica de la fuerza (dado que Viola era el general más antiguo en actividad luego de Videla y que su figura se percibía, por el momento, como continuación de la "línea videlista" dentro del Ejército). Aun en este contexto —teniendo en cuenta que Viola sería nombrado varios meses antes de asumir—, se abrirá un nuevo objetivo para el gobierno: lograr, a pesar del cambio de hombres, la confianza en la opinión pública sobre la inmutabilidad de los principios esenciales del Proceso y de la política económica de Martínez de Hoz. Esta tarea será, una vez más, del ministro Harguindeguy, bajo la fórmula "nueva etapa del mismo proceso".³¹ Preparándose para los recambios del 1° de agosto, Harguindeguy sostendrá:

"El 1° de agosto no pasa nada. A lo sumo es el día en que un nuevo Comandante en Jefe del Ejército se hace cargo de la responsabilidad de conducir una de las tres Fuerzas Armadas del país. Ese día significa, en definitiva, que un presidente [...] que compartía tres responsabilidades simultáneas [...] va a estar solamente en una función, que es la de presidente. [...] El 1° de agosto es [...] un nuevo período dentro del mismo proceso" (*La Nación*, 30/7/1978).

En medio del triunfalismo generalizado, producto del éxito argentino en el Mundial de Fútbol, comenzaba a esbozarse en Massera un estilo propositivo a favor de la protección del salario, el trabajo y,

³¹A pesar de los esfuerzos de Harguindeguy, los primeros días de agosto de 1978 fueron agitados: el 1°, mientras Videla pasaba a retiro, asumía como presidente de la nación y Viola lo reemplazaba en su cargo de comandante en jefe del Ejército, salía a la venta el primer número de la revista *Convicción* que, bajo la dirección de Hugo Ezequiel Lezama y la subdirección de Mariano Montemayor, se volvería una verdadera tribuna desde la cual el almirante Massera proyectaría su carrera política; el 2, una bomba explotaba en la casa del virtual sucesor de Massera, Armando Lambruschini, y provocaba la muerte de su hija; el 4, la empresa General Motors abandonaba el país; y el 11, Patricia Derian continuaba abriendo un frente de gran preocupación para el gobierno, al declarar que en la Argentina se vivía una crítica situación en cuanto a la violación de derechos humanos. Unos días más tarde, se publicaron documentos críticos provenientes de diversos dirigentes políticos y comenzaron los conflictos entre sectores agropecuarios y financieros, seguidos por renunciaciones de funcionarios de Economía vinculados al agro.

consecuentemente, de la producción nacional en contra de la "especulación", ausente en proclamas anteriores, donde la crítica se agotaba en sí misma. A sólo un mes de su futuro retiro, Massera comenzará a afinar su propuesta política y económica, en sus palabras, "a definir con mayor precisión mi pensamiento respecto de áreas concretas de la tarea cotidiana de todos." Para Massera, la Argentina debe decidir si "aceptará permanecer en su antiguo papel de abastecedora de materias primas, o [si] nos arriesgamos a dar el salto imprescindible para pesar —con perfil propio— en el desarrollo de la futura historia universal". Su confusa propuesta consistía en emular el sendero seguido por los países desarrollados, en búsqueda de una alianza entre "clase obrera, clase empresaria y Estado" para "avanzar sobre el conocimiento y sus instrumentaciones técnicas e industriales" y "abrirse a mercados amplios" (*La Nación*, 8/8/1978), al tiempo que sostenía coincidir con un amplio espectro de las Fuerzas Armadas en la necesidad de "crear un aparato productivo basado fundamentalmente en la iniciativa privada" y "privatizar empresas estatales [...] con las excepciones lógicas, que permitan confirmar la regla, como por ejemplo lo relativo a la defensa y algunas industrias básicas" (*La Nación*, 29/8/1978). Finalmente, el 16 de septiembre habrá llegado la hora para Massera, quien en su mensaje de despedida reclamará enérgicamente:

"En los documentos fundacionales del gobierno de las Fuerzas Armadas figuran como objetivos prioritarios el saneamiento de la economía al menor costo social, el establecimiento de una economía vigorosa, recalco, el establecimiento de una economía vigorosa, mediante el estímulo a la productividad, el aliento a la inversión, la rápida reactivación del aparato productivo, la racionalización del Estado y la drástica desaceleración de la inflación. Sería mezquino no reconocer que algunos logros se han alcanzado, pero no ignoro que tanto los empresarios, los que viven de jornales y sueldos, como los sectores de menores recursos, están pasando particulares dificultades, y eso me preocupa, como me preocupa que no se haya detenido, todavía, el ritmo inflacionario, y que no se haya obtenido la velocidad que la nación requiere para alcanzar las metas propuestas" (*La Nación*, 17/9/1978).

Y ahora sí, ya retirado, relevado de las responsabilidades institucionales, Massera tiene la licencia para declarar, desde el exterior del país, el fracaso rotundo de la gestión de Martínez de Hoz. Aquí se abrirá una nueva etapa en su estrategia: la de dirigir toda su artillería en forma virulenta y directa contra el "superministro" de Videla. De aquí en más, su presencia crítica a la conducción económica será permanente en los medios de comunicación nacionales e internacionales y el ahora ex comandante se convertirá en un verdadero elemento desestabilizador:

"[...] es larga la lista de los fracasos económicamente: ha fracasado el populismo permisivo, ha fracasado el monetarismo rígido, y han fracasado innumerables experiencias que con *el* rótulo benévolo del pragmatismo gradualista intentaron fórmulas mixtas" (*Clarín*, 11/10/1978).

Hacia fines de octubre de 1978, sin embargo, la fortaleza de Martínez de Hoz parecía incuestionada: los únicos ministros sobrevivientes de la profunda crisis ministerial del día 30 fueron los de Interior, Trabajo y Economía; mientras que los renunciados Montes (Relaciones Exteriores y Culto), Laidlaw (Planeamiento, ministerio que pasaría a convertirse en una secretaría), Bardí (Bienestar Social), Gómez (Justicia) y Klix (Defensa) cederán el camino a una recomposición del gabinete con base en oficiales retirados y civiles —Pastor en Relaciones Exteriores y Culto, Fraga en Bienestar Social, Llerena Amadeo en Cultura, de la Riva en Defensa y Rodríguez Varela en Justicia— mientras que el posterior reemplazo de Liendo por Reston en la cartera de Trabajo sólo logrará profundizar el ascendente de Martínez de Hoz en este ámbito. En términos generales, y como señaló *La Nación* en su tradicional *Semana Política* (5/11/1978), se asistía a una "situación configurada por la decisión de dar tiempo y el mayor espacio posible de maniobra a la conducción económica."

Ante la evidente profundización del poder de Economía, Massera denunciará la "ceguera" de los "sectores del gobierno" que insisten en "mantener la política económica que puede llegar a producir tensiones sociales" (*La Nación*, 10/11/1978). Asimismo, y continuando con la línea iniciada en su discurso de despedida de la comandancia

se declarará francamente "traicionado" por el gobierno, único responsable de su alejamiento de los compromisos contraídos "bajo honor" el 24 de marzo de 1976. La ecuación era simple:

"¿Cómo es posible que la maledicencia me impute apartarme del proceso, por incitar al cumplimiento de estos postulados, si éstos son los postulados del proceso? [...] ¿Quién está apartándose del proceso? ¿Yo o los que formando parte del gobierno, instrumentan una política económica reñida con los postulados de la reorganización nacional?" (*La Nación*, 17/11/1978).

Pero Martínez de Hoz no se arredraría: el 21 de diciembre de 1978, en medio del recrudecimiento del conflicto por el Beagle, anunció por radio y televisión una etapa de "profundización y ajuste" del plan económico cuyos puntos fundamentales serían su carácter antinflacionario, la apertura irrestricta del mercado de capitales y la puesta en marcha de la "tablita" cambiaría, medidas que provocarán, en los primeros meses de 1979, un pico en la entrada de capitales y el inicio del proceso de endeudamiento en un marco aún recesivo y de alta inestabilidad.

Si el primer mes de 1979 marcó un paréntesis en el conflicto del Beagle y la finalización del recambio en la Junta Militar —con el reemplazo de Agosti por Graffigna al frente de la Fuerza Aérea—, en febrero se asistió a una nueva crisis institucional motivada por la política económica: en este caso, por las protestas de los gobernadores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza ante los aportes impuestos por la nación a las provincias, y por el recrudecimiento de las críticas de toda índole hacia la conducción económica, ante la evidencia de que los índices inflacionarios no disminuían y de que la tan anunciada reactivación económica no llegaba. Las cifras no eran particularmente alentadoras: en el primer trimestre del año, el "costo de vida" se había incrementado = 30,6% y la comparación entre el mes de marzo de 1979 y marzo de 1978 arrojaba un alza de 167,3% (*La Nación*, 10/4/1979). En este contexto, el ministro contraargumentaba que si la "crítica es generalizada" es porque "hemos repartido bien el sacrificio" (*La Nación*, 19/4/1979), y su jefe de asesores, Luis García Martínez, lo secundaba sosteniendo que las causas de la inflación

eran "políticas" (*La Nación*, 25/4/1979); mientras que la Junta Militar anunciaba que, aún "no del todo conforme con lo hecho", "se perseverará en el camino elegido" (*Clarín*, 1/6/1979). La inmutabilidad de los funcionarios ante las críticas, el progresivo avance del "super-ministro" Martínez de Hoz sobre las restantes áreas de gobierno y sobre los temas de la agenda del régimen —en particular, el de la urgente necesidad de iniciar las tan anunciadas rondas del "diálogo político"³²—, y las arremetidas de la "patria especuladora", eran bien percibidos por Massera:

"La política económica, que no debe ser otra cosa que un instrumento de la política nacional, ha pasado a ser la política nacional en sí misma y está modelando a la sociedad argentina dentro de cánones que no figuran en los documentos fundacionales del Proceso" (*La Nación*, 1/6/1979).

"Hoy, contemplamos con cierta angustia en el corazón cómo se desdibuja la Argentina industrial, mientras crece una Argentina financiera; cómo los creadores son desplazados por extraños mercaderes [...] En vez de producir comerciamos. Pero no comerciamos lo que producimos —lo que sería legítimo y útil— sino que comerciamos una metáfora, un símbolo, una convención" (*La Nación*, 9/10/1979).

³² Una vez concluida la primera etapa de "reordenamiento" y "normalización económica" que se extenderá entre el golpe y fines del año 1976, los funcionarios militares comenzarán a anunciar tempranamente, hacia abril de 1977, la apertura de la etapa del "diálogo" y a definir los posibles interlocutores del régimen, al tiempo que se reforzaba la idea, ya presente en los documentos iniciales, de que el objetivo final del Proceso era consolidar una democracia "republicana, representativa y federal". Desde entonces, y con particular intensidad hacia 1978 —momento en que, por otra parte, se comenzaba a anunciar el fin de la "lucha contra la subversión"—, Videla comenzará a sostener que la atención del régimen debía trasladarse desde lo específicamente militar a la "reconstrucción nacional", lo cual inicia una etapa signada por una creciente preocupación en la recreación de las bases de legitimación del Proceso y por la definición de una propuesta política. Sin embargo, y dado que éste era un punto de grave desacuerdo entre las distintas fracciones militares, ya hacia 1979 se hacía evidente la enorme dificultad que tenía el régimen para presentar ante la opinión pública las tan prometidas *Bases Políticas*.

Tanta exacerbación sólo podía estar buscando una respuesta, y ésta no tardaría en llegar. Mientras Lambruschini y la Armada guardaban un cauto silencio,³³ la reacción del Ejército llegó de mano de un nuevo interlocutor de Massera: el general Galtieri,³⁴ quien junto a Harguindeguy sostuvo la postura pública del régimen ante la actitud de Massera. Ésta fue la de considerar al ex comandante un "problema" que debía ser "enfocado por el señor comandante en jefe de la Armada", dado que Massera se hallaba regido "como el resto del personal militar por leyes y reglamentos militares" (*La Nación*, 13/6/1979). Así, Galtieri, quien sería nombrado sucesor de Viola en diciembre, se fue sumando a la estrategia que desarrollaría el núcleo de apoyo público a la continuidad de la política económica ante Massera.

Hacia fines de diciembre de 1979 el régimen logrará presentar las tan esperadas *Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional*, que fijaban el inicio del "diálogo político" entre funcionarios del Poder Ejecutivo y sectores civiles, y las pautas a las que debía adaptarse el futuro accionar de los partidos políticos. De inmediato, la estrategia de Massera fue la del sabotaje: a las sostenidas críticas contra la política económica se sumarán ahora las diri-

³³ El almirante Lambruschini, sucesor de Massera y a pesar de su cercanía con él, desarrollará un estilo alejado del de su antecesor, manteniéndose desde el inicio mismo de su gestión alineado tras el *autoatamiento* institucional. Muy esporádicamente expresará una cierta preocupación por algunos síntomas de la situación económica, tales como "el deterioro de ciertas actividades productivas, el elevado índice de inflación, los* bajos ingresos que perciben determinados sectores de la ciudadanía y algunos privilegios que se mantienen en beneficio de otros sectores de la misma" (entrevista en *La Nación*, 11/3/1979), pero esto no apartará a la Armada de su compromiso gubernamental. También Graffigna —sucesor de Agosti— mantendrá a la Fuerza Aérea en una línea similar. Al respecto, entendemos que un aliciente de inocultable importancia para los mismos serán los importantes planes de reequipamiento y modernización de la infraestructura de las Fuerzas que se darán durante el período.

³⁴ Hacia junio de 1979 Galtieri se desempeñaba como sucesor de Suárez Masón al frente del Cuerpo de Ejército I y comenzaba a desarrollar, al igual que Massera, un título público muy particular y diferenciado del acartonamiento de sus colegas del Ejército, lo que lo llevará a ser objeto inmediato de la atención de los medios de comunicación y a perfilarse, posteriormente, como el "verdadero poder" detrás de Viola.

gidas al diálogo político propuesto por el régimen. Según Massera, no se estaría avanzando "genuinamente" hacia "una futura solución democrática", ya que "el absurdo temor a la crítica" del gobierno, hace que el "poco diálogo" se dé sólo con "quien dé garantía de complacencia",³⁵ mientras que desde las páginas de *Convicción* continuaba alertando: "cierran empresas y abren bancos. Mientras numerosas empresas continúan con dificultades de diversa índole [...] en el ambiente bancario el proceso de apertura de nuevas entidades financieras revela el óptimo estado por el que atraviesa el sistema financiero" (8/12/1979). En realidad, el ex comandante estaba preparando el terreno para la aparición de su propio movimiento político: el Movimiento Nacional para el Cambio.³⁶

El de 1980 será el año en el cual se desatarán violentamente todas las tensiones generadas por el plan económico. Éstas se anunciarán ya en enero y febrero, cuando comiencen suspensiones masivas de personal en importantes empresas textiles —Alpargatas, La Bernalesa, Textil Chassa, Textil Oeste, etcétera—, pero estallarán en marzo, cuando, paralelamente a la convocatoria para el inicio del "diálogo político" lanzada desde el Ministerio del Interior, el día 28 quiebren Promosur y el Banco de Intercambio Regional (BIR), financiera y banco de depósitos primeros en el ranking, para iniciar una

³⁵ Por cierto, ése era el espíritu del *Documento* que, entre otras cosas, sostenía: "El diálogo se orientará a lograr una participación responsable, amplia y continua, para que *partiendo de la coincidencia en las ideas básicas* se afiancen las condiciones cívicas y el acceso creciente de la ciudadanía a la actividad partidaria y a la dirección política [...] La acción que se inicia con el diálogo como instrumento apto de consulta e información, para posibilitar así el *logro de las coincidencias básicas necesarias* para la solución política futura del país y una *adecuada comprensión* de la actividad a emprender por parte de toda la ciudadanía" (*Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional*, 19/12/1979. Las cursivas son nuestras).

³⁶ La "mesa coordinadora provisional" del Movimiento Nacional para el Cambio, que fue lanzado el 21 de agosto de 1981, estuvo conformada, entre otros, por el capitán de fragata (RE) Juan Carlos Acosta —ex subsecretario de Prospectiva del Ministerio de Planeamiento y secretario ejecutivo de la Fundación Argentina Año 2000, cercano al general Díaz Bessone—, por ex dirigentes provenientes del justicialismo, del socialismo, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), y de la antiguamente aramburista Unión del Pueblo Argentino (UDEPA), además de ex representantes de distintas entidades empresarias, como Confederaciones Rurales Argentinas (*La Nación*, 21/8/1981).

corrida bancaria y sucesivos quiebres de bancos y financieras -Banco Oddone, Internacional y grupo Grecco—, en un contexto de exacerbación de los conflictos laborales en abril, y de la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), extremadamente desfavorable para el régimen.

El estallido de la crisis habilitó, naturalmente, una profundización de las críticas, lo que le permitió a Massera llegar al punto más alto de su estrategia para sostener que "esta política económica no es la de las Fuerzas Armadas" (*La Nación*, 23/5/1980) y que el "proceso político argentino conducido por las Fuerzas Armadas está muerto y no se encuentra quién le extienda el certificado de defunción" (*La Nación*, 11/6/1980). Massera intenta así, mediante un documento público de gran repercusión publicado en los principales diarios, quebrar el apoyo de las Fuerzas Armadas al plan económico, y llama a los comandantes a replantearse lo actuado, a "retornar a los objetivos originarios" y a separarse de la "conducción económica":

"Por eso juzgo a la conducción económica, no por sus errores o por no haber alcanzado los objetivos propuestos. La juzgo, porque es la herramienta del materialismo penetrando en lo más íntimo de nuestro tejido social. La juzgo, porque es el instrumento utilizado para transformarnos en una colonia. La juzgo, porque pretende destruir nuestros valores. Y esto, no puede ser auspiciado por las Fuerzas Armadas" (*Documento del 15/6/1980*).

Hasta aquí, y aún en el punto más alto de su ofensiva, el juego estratégico de Massera se revelaba como esencialmente reactivo: en ningún momento logró articular una propuesta económica alternativa viable superadora de la de Martínez de Hoz, que excediera las meras apelaciones a un cierto "distribucionismo" o un tímido "industrialismo". Esto era bien percibido, por ejemplo, por Juan Alemann, Secretario de Hacienda, quien respondía a este virulento enjuiciamiento del marino y sostenía que "el almirante Massera hace una manifestación esencialmente política, donde propone una serie de buenos propósitos, sin decir cómo se han de lograr. Como buen político, piensa en los fines y no en los medios, que es realmente lo concreto e importante" (*La Nación*, 18/6/1980). Pero no sólo deberán responder los

directamente enjuiciados, sino también los principales interpelados. El 20 de junio, Galtieri adoptará la línea de Alemann para responder que el documento de Massera debe ser entendido como "uno más de los varios o tantos documentos políticos y declaraciones aparecidas en las últimas semanas", y que aquél debía negarse "terminantemente como comandante en jefe del Ejército a entrar al juego político de ese upo (*sic*)", comprometiendo a la Fuerza en "la gestión del gobierno nacional en lo hecho, en lo que está haciendo y en lo que le falta por hacer" (*La Nación*, 20/6/1980). Asimismo, Lambruschini sostendrá que la Armada "respeto el derecho de opinión" y acepta "las críticas" y que "éstas deben ser evaluadas según las fuentes que las producen", pero que no "nos harán alterar los objetivos fijados el 24 de marzo de 1976" (*La Nación*, 20/6/1980). Finalmente, Harguindeguy acusará a "los detractores" que "están en el juego de molestar al gobierno que ejercen las Fuerzas Armadas" de "conducir al país al fracaso", lo que "muestra, por lo menos, falta de memoria y carencia de responsabilidad" (*La Nación*, 25/6/1980).

La intentona había fracasado. En el caso de la Armada en particular, Lambruschini se mantendría en una postura intermedia, de preocupación por "todos aquellos objetivos económicos [...] que no se hayan alcanzado en su plenitud", entre ellos "el estímulo a la productividad, la reactivación del aparato productivo, el control y la disminución del déficit presupuestario, una política agropecuaria realista [...] lograr una progresiva disminución de la inflación", etcétera (*La Nación*, 27/6/1980), pero de defensa acérrima de la "unidad monolítica de las Fuerzas Armadas", contra "aquellos que especularan con divergencias básicas entre ellas" (*La Nación*, 8/7/1980). En esto, será secundado ampliamente por Graffigna: la elección de ambos había sido, sin dudas, la de la preservación institucional.

Los últimos meses de 1980 estuvieron signados por la profundización de la crisis económica, por fuertes *lobbies* sobre los elencos gubernamentales desde sectores rurales e industriales en pos de una rectificación urgente de la política económica y, sobre todo, por fuertes disputas dentro de la Junta alrededor de la sucesión de Videla en la presidencia. En este último sentido, la apuesta por la continuidad institucional se reveló en la designación de Viola, cuyo temprano anuncio a la opinión pública —ya en octubre de 1980, cuando debía asu-

mir en marzo de 1981— posibilitó la generación de un tenso pando de rumores y versiones cruzadas. A este clima se sumó, una vez más. Massera, quien luego de una acérrima defensa de los dirigentes políticos —sus nuevos colegas— sugirió a Viola para en el futuro "Kelcrar el proceso de legitimación de la actividad de las organizaciones sindicales", "disminuir el gasto del Estado, redistribuir equitativamente los ingresos, modificar las medidas que condenan a nuestra industria y a nuestro campo a una ruinosa competencia con el exterior", y terminar con el proceso de "pauperización del salario" (*Clarín*, 22/11/1980). Así, Massera se reposicionaba anticipadamente en el nuevo escenario, previendo sin dudas el giro que la situación iba a sufrir: por cierto, el futuro gobierno de Viola ensayaría un experimento correctivo de la línea principal que había seguido el Proceso hasta entonces, sobre todo desde el punto de vista político.

Sí la quiebra del BIR había desencadenado el fin del plan de Martínez de Hoz, el golpe de gracia se lo asestaría la devaluación de 10% del 2 de febrero de 1981, que establecía una nueva escala de ajustes hasta agosto. A pesar de las frenéticas declaraciones de Videla y Martínez de Hoz acerca de la inamovible continuidad de su línea³⁷ —en un clima enrarecido, además, por el recrudecimiento del conflicto por el Beagle y la ininterrumpida sucesión de quiebras de numerosos bancos, compañías financieras y empresas—, la modificación, en el mes de febrero, de la pauta de ajuste cambiario inicialmente dispuesta por la "tablita" operó como un verdadero *shock* en las expectativas de los actores, que emprendieron automáticamente una desesperada corrida hacia el dólar y generaron la caída vertiginosa de las reservas del Banco Central. La primera e inmediata medida del nuevo ministro de Economía de Viola, Lorenzo Sigaut, sería la de devaluar nuevamente la moneda en 30,14% el 2 de abril, fijar la paridad peso-dólar y eliminar definitivamente la "tablita" cambiaría.

37 En palabras del ministro: "La renovación de las autoridades está siendo utilizada en estos momentos por quienes se resisten a admitir la irreversibilidad de los cambios básicos que el Proceso lleva realizado. [...] La población debe saber que el hecho de que se haya debido adelantar en el tiempo la aplicación de un ajuste instrumental, en materia cambiaria, con el propósito de disipar la incertidumbre tejida alrededor del cambio de autoridades, no altera la continuidad del Proceso ni de sus grandes políticas" (*La Nación*, 12/2/1981).

Era el final. Pero este final anticipaba otro: el del propio Massera. Intentando conservar su rol opositor, éste se mantuvo incólume en su postura al asumir Viola: ahora, su blanco sería la estrategia política de su antaño colega de la Junta Militar. Pero los tiempos sí habían cambiado.³⁸ Con el posterior ascenso de Anaya, el ascendente de Massera habría terminado;³⁹ su presencia continuará agitando las aguas por varios años,⁴⁰ pero esta vez como protagonista del fracaso del régimen y acusado de crímenes aberrantes, no ya como artífice del "nobilísimo arte".

³⁸ En mayo de 1981 se revelaría en Roma una lista de integrantes de la logia masónica Propaganda Due (P-2), encabezada por Licio Gelly, en la cual se encontraban, entre otros, los nombres de Massera y Suárez Masón. El 9 de julio de 1981 el gobierno prohibiría el n° 3 del periódico *Cambio para una democracia social*, propiedad de Massera —en cuya tapa se veía una fotografía de la casa de gobierno con la leyenda "Esto no funciona"—, por "alterar el orden y la seguridad públicos" y "evidenciar una persistente y reiterada actitud que socava tendenciosamente el principio de autoridad y la confianza pública en los actos de gobierno" (*La Nación*, 9/7/1981); el 14 de julio, Lambruschini sancionaría por primera vez a Massera con un arresto de diez días a pedido de Galtieri (*Clarín*, 14/7/1981); el 15 de octubre, Liendo, ministro del Interior de Viola, bloquearía el reconocimiento jurídico del "Partido para la Democracia Social", cuyo apoderado era el vicealmirante (RE) Rene Fracassi; por sólo citar algunos indicios de que la tolerancia de la Junta Militar ante los arrebatos del almirante había terminado.

³⁹ Según *Somos*, "el *masserismo* fue perdiendo peso en la Armada tras el alejamiento del ex comandante Armando Lambruschini [...] El transcurso del tiempo y la actividad política del ex comandante fueron desdibujando en los cuadros intermedios el prestigio de caudillo que había alcanzado la figura de Massera y su imagen comenzó a deslizarse por un notorio plano inclinado aún entre aquéllos marinos que le reconocen haber sido el comandante que más próximo estuvo de ser presidente de la nación, que enfrentó con decisión muchas de las propuestas políticas del Ejército, y criticó al ex ministro Alfredo Martínez de Hoz cuando éste brillaba con todo su esplendor" (*Somos*, n° 352, 17/6/1983).

⁴⁰ Entre enero y febrero de 1982 Massera hará una serie de declaraciones acerca de la publicación de las listas de detenidos desaparecidos durante su mandato, en la que acusó a Videla y Viola de haberse negado a hacerlo a pesar de su insistencia, lo que le valdría un nuevo arresto y un enfrentamiento posterior con Suárez Masón; luego del fracaso de la Guerra de Malvinas, sostendrá que "las guerras no las pierden los soldados, sino quienes tienen el honor de conducirlos" (*Clarín*, 22/6/1982) en un ataque frontal a la Junta Militar; y posteriormente protagonizará una serie de violentos altercados públicos con Juan Alemann, por sólo citar algunos ejemplos de su imperdable actividad posterior.

Como vimos, la posibilidad de surgimiento de la figura de Massera estuvo dada por imperativos políticos: primero, por la necesidad de Perón de contar con un interlocutor confiable en la Marina, tradicionalmente antiperonista, y luego, por la coincidencia entre su político personal y los planes de la Armada. La particular forma de distribución institucional del régimen le permitió a Massera acceder a cuotas nada despreciables de poder que le permitieron obstaculizar reiteradamente, y por diversos medios, la primacía del Ejército, fundamentalmente a través de una crítica virulenta de la política económica. Pero esta coincidencia entre Massera y la Armada tuvo corta vida, ya que en su lucha por espacios de poder, Massera hizo una progresiva abstracción de sus responsabilidades institucionales para sabotear ferozmente la cohesión interfuerzas, y contribuir al fracaso del proyecto institucional del que había sido parte fundamental. A pesar de que su alejamiento de la Comandancia le otorgaba márgenes mayores de acción, al prescindir de la Armada y sus recursos institucionales —sobre todo, luego del alejamiento de Lambruschini— su influencia dentro de ésta se fue perdiendo, y su actividad política fue desgastando no sólo su ascendente personal sino, sobre todo, la tolerancia del régimen. Massera articuló su proyecto sobre un terreno inestable: por un lado, siendo comandante, sabotó insistentemente el mismo proyecto institucional del que era parte fundamental; por otro, en su papel político, aún era visto como responsable del Proceso y se transformó en blanco del repudio de sus colegas de antaño. Su posición siempre ambigua terminó destruyéndolo: fue demasiado político para ser militar y demasiado militar para ser político;⁴¹ hasta que, finalmente, sus siniestros crímenes terminaron por sepultarlo.

Con Anaya, la Armada ya no estimó fructífero restarle apoyo al Ejército, prefirió apoyar a Galtieri a cambio de un bien muy preciado dentro de la agenda de la fuerza: la reconquista de las Islas Malvinas. En esta tarea se embarcó para sucumbir finalmente en la peor de las mareas.

⁴¹ Esta ambigüedad fue claramente percibida por Harguindeguy, quien en septiembre de 1981 sostenía que Massera "está con un pie adentro y otro afuera del Propio" (*La Nación*, 16/9/1981).

Los señores de la guerra y los burócratas

Como vimos, la coincidencia que acercó, en los albores del golpe de 1976, los objetivos de civiles y militares, estuvo basada en un particular diagnóstico acerca de la crisis argentina. En ese diagnóstico resultaba central la caracterización de un Estado "sobredimensionado" e "ineficiente" cuyo creciente intervencionismo y sus "desviaciones" estructurales eran las causas principales de la larga crisis argentina. De allí que la "urgente reestructuración" estatal fuera uno de los imperativos de primer orden del régimen, con miras al objetivo de desactivar no sólo las "prácticas burocráticas ineficientes" que proliferaban en su interior sino también las prácticas políticas "demagógicas" y "corruptas" que lo habían caracterizado, objetivo inseparable del aniquilamiento de la "subversión".

En su extenso discurso inaugural del 2 de abril de 1976, el ministro de Economía Martínez de Hoz pareció dejar bien en claro cuál era el tratamiento al que debía ser sometido el Estado:

"La inflación en la República Argentina es provocada esencialmente por los gastos improductivos del Estado [...] Debe pues [...] encararse la realización conjunta y gradual en los plazos fijados de un trípode de medidas: reducción del gasto fiscal, aumento de los ingresos o recursos presupuestarios, incremento sustancial de la inversión productiva del país. [...] La reducción del gasto fiscal debe realizarse a través del redimensionamiento de la actividad estatal atacando simultáneamente cuatro áreas: a) la racionalización de la administración central, b) la eliminación del déficit de las empresas estatales, c) la reducción gradual y eliminación del aporte federal para cubrir los déficits en los presupuestos provinciales, d) el encuadramiento de las obras públicas en los límites máximos posibles permitidos por una financiación genuina y no inflacionaria. [...] Es posible encarar la racionalización de la administración central eliminando servicios superfluos y reorganizando los necesarios para lograr mayor eficiencia con el menor costo [...] [En cuanto al déficit de las empresas estatales] la consideración de este tema implica tener en cuenta un doble enfoque: a) Una adecuada concepción y delimitación de la función del Estado en la economía moderna y

b) el costo financiero que la actividad empresarial estatal eroga. Lo antedicho no significa, sin embargo, que el Estado deba intervenir en la economía en forma tal que pretenda reglamentar minuciosamente la actividad de la empresa privada quitando toda oportunidad de libertad de decisión en cuanto a la producción y a las mejores formas de hacerlo, o pretendiendo anular el mecanismo del mercado como principio básico, orientador de la actividad económica y sustituirlo por complicadas reglamentaciones oficiales. Para una mayor clarificación del tema pueden agruparse en tres categorías las empresas estatales: a) Aquellas que por diversas razones no se puede o no conviene que sean realizadas por empresas privadas (por ejemplo ferrocarriles); b) Aquellas que actúan en áreas donde existen capitales disponibles de carácter privado (diversas explotaciones industriales); c) Aquellas que han sido intervenidas o tomadas por el Estado para conservar fuentes de trabajo por falencia de las empresas privadas respectivas" (*Clarín*, 2/4/1976).

Dichas afirmaciones debieron de provocar, sin lugar a dudas, las más variadas reacciones: desde una marcada algarabía dentro de los sectores liberales, que veían en estas aseveraciones la demostración de que su hora había llegado, y que finalmente se iniciaría un vasto proceso de reformas que liquidaría para siempre el "estatismo patológico que había llevado a la Argentina al "caos y la destrucción", hasta un profundo malestar dentro de vastos sectores de las Fuerzas Armadas que concebían para el Estado —del cual eran parte fundamental— un rol activo y central como promotor económico —fundamentalmente de una industria bélica que se percibía como estratégica para la defensa nacional⁴²— y como agente privilegiado de la planificación

⁴² Ya desde las primeras décadas del siglo XX, en el seno de las Fuerzas Armadas comienza a surgir una verdadera convicción industrialista, inseparable de una creciente reflexión estratégica acerca de los inconvenientes de abastecimiento de los materiales de guerra internacionales y de la necesidad de la autoafirmación corporativa. En los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, la inestable coyuntura internacional contribuirá al fortalecimiento de estos principios, y se establecerán las bases de una amplia estructura de empresas públicas en los sectores químico, siderúrgico, petrolífero y militar, bajo dirección militar, estrechando los lazos entre los medios empresarios y el ámbito castrense. Finalmente, en 1941, con la creación de la Dirección Gene-

y el desarrollo nacionales.⁴³ Estos dos sectores se posicionaron, durante el Proceso, en las comandancias de los Cuerpos de Ejército y en las grandes empresas estatales, industriales y de servicios, territorios desde los cuales no sólo se encargaron de bloquear el ambiguo "anties-tatismo" del elenco económico sino también de profundizar el intervencionismo estatal que proclamaban combatir los funcionarios del ala económica.

ral de Fabricaciones Militares (ley 12709) bajo la dirección de Manuel Savio —quien emprende la conformación de un plantel de catorce fábricas propias, participación en ocho sociedades mixtas y nueve sociedades anónimas con mayoría estatal, entre las cuales se destaca Altos Hornos Zapla-Palpalá (1945), planta fundacional de la industria siderúrgica argentina—, el complejo militar-industrial adquiere forma definitiva para expandirse fuertemente durante el gobierno peronista y convertir a la actividad económica en una de las principales tareas de las Fuerzas Armadas. A partir de allí, la asunción de funciones extrainstitucionales permite la consolidación y expansión de una élite de funcionarios y burócratas militares en la administración y dirección de las principales empresas del Estado (Castiglione, 1992; Rouquié, 1981). La década de 1960 marcó, en este sentido, un giro ideológico importante: las Fuerzas Armadas irán profundizando una convicción que excederá el objetivo básico de lo que podemos llamar una "industrialización defensiva" para orientarse hacia el objetivo más ambicioso del desarrollo y la modernización —en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional—; en este marco el Estado, agente primordial de la transformación, se volverá objeto de creciente ocupación y de reorganización.

⁴³ Desarrollo, seguridad y planeamiento, conceptos indisolublemente unidos en el ideario de la Revolución Argentina, fueron los tres ejes a partir de los cuales se intentó rediseñar el Estado durante el gobierno de Onganía. A nivel organizativo, su buscó la constitución de una estructura piramidal que imbricara tres sistemas: el planeamiento, la consulta y la decisión. A nivel institucional, el *Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para la Seguridad Nacional* se dividió en tres planos: en el del planeamiento y la acción, se creó el Consejo Nacional de Defensa (CONADE); en el de la integración de la seguridad con el desarrollo, se creó el Consejo Nacional de Seguridad (CONASE); y en el planeamiento tecnológico se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONACVT). Bajo la dirección del presidente Onganía, el CONADE fue designado como la agencia clave encargada de llevar a cabo las tareas de planificación, y en colaboración con la Secretaría del CONASE tendría la tarea de elaborar las políticas y estrategias que tomarían cuerpo en el plan de desarrollo a largo plazo (Rouquié, 1981). Esta preponderancia de la planificación respondía en gran parte a la influencia que alcanzaron las teorías difundidas por los expertos de las organizaciones internacionales, según las cuales la correcta planificación de la acción de gobierno constituía una de las claves del éxito de una gestión; y a la experiencia pionera (1966) del gobierno brasileño en establecer un Ministerio de Planeamiento, que era considerado el pilar de su "milagro económico".

Dado que dentro de la estructura inicial de tareas del régimen militar la "lucha antisubversiva" fue definida como la más alta prioridad, en una primera etapa, el poder y la influencia de los comandantes de los distintos Cuerpos de Ejército⁴⁴ fueron primordiales. Al frente de estas comandancias, y ya durante las postrimerías del tercer gobierno peronista, se asiste a la cristalización de una verdadera élite de *señores de la guerra*, quienes se encontrarán a la cabeza de las operaciones militares "antisubversivas": Carlos Guillermo Suárez Masón como comandante del Cuerpo de Ejército I, Ramón Genaro Díaz Bessone como comandante del Cuerpo de Ejército II, Luciano Benjamín Menéndez como comandante del Cuerpo de Ejército III, Santiago Omar Riveros como comandante de Institutos Militares y Osvaldo Azpitarte como comandante del Cuerpo de Ejército V. Predominantemente de las armas de artillería y caballería, pertenecientes a la promoción 74 del Colegio Militar, varios de estos generales "duros" habían participado en la revuelta antiperonista de 1951, en la Revolución Libertadora y en el bando colorado en los enfrentamientos de 1962 y 1963.

Si bien durante el Proceso estos generales aparecen ligados a tareas estrictamente represivas, varios de ellos habían detentado en el pasado cargos estratégicos en el complejo militar-industrial y en el Comando de Institutos Militares, que subordina a todos los organismos militares de formación y perfeccionamiento.⁴⁵ Al mismo tiempo, su

⁴⁴ Durante el Proceso, a partir de la clásica delimitación del territorio nacional en distintos cuerpos del Ejército, se establecieron las zonas que sentaron las distintas jurisdicciones en las tareas "antisubversivas" (véase Mittelbach y Mittelbach, 2000).

⁴⁵ Santiago Omar Riveros, graduado como oficial ingeniero militar, se había desempeñado como director de la Escuela Superior Técnica durante la comandancia de Carcagno, y durante las comandancias de Anaya y Laplane había sido director de Producción y luego vicepresidente de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Osvaldo Azpitarte había militado en el nacionalismo durante la comandancia de Lanusse incorporándose al núcleo de oficiales convocado alrededor de la revista desarrollista *Estrategia* dirigida por el general Guglielmelli, y durante la comandancia de Anaya había sido director de la Escuela Superior de Guerra y 2º comandante de Institutos Militares durante la gestión Laplane. Suárez Masón se había desempeñado como director de la Escuela de Caballería en 1972, como 2º comandante de Institutos Militares durante la gestión de Anaya y como jefe de Inteligencia del Estado Mayor (su carrera culminará como presidente de YPF). Menéndez había cumplido servicios en el Colegio Militar

acendrado anticomunismo y antiperonismo —durante el tercer gobierno peronista habían sido los más acérrimos impulsores del involucramiento del Ejército en la "lucha antisubversiva"— los llevaba a rechazar de plano cualquier posibilidad de acercamiento a las organizaciones civiles, por lo que mayoritariamente se alineaban tras una concepción corporativista y antipoliticista, contraria al acercamiento del régimen con las organizaciones políticas y sindicales. Si bien no presentaban una concepción ideológica unificada y coherente —variaban entre el nacionalismo, el integrismo católico y el desarrollismo—, estos "duros" lograron conjugar eficazmente dos resistencias: una, contra el liberalismo "antiestatista" y "extranjerizante" de la política económica, y otra, contra la fracción "politicista" del Ejército.⁴⁶ Por otra parte, durante la gestión de Martínez de Hoz el espectro de empresas de propiedad estatal era vasto.⁴⁷ Se encontraban bajo la dirección o administración de un conjunto de *burócratas* militares y civiles de trayectoria, tales como los generales Diego Uricarriet y Os-ear Gallino⁴⁸ —al frente de la Dirección General de Fabricaciones Mi-

litar de la nación y en la Escuela Superior de Guerra. Finalmente, Díaz Bessone había actuado durante el gobierno de Onganía en la Secretaría de Seguridad, dedicada a la planificación estatal, y durante el gobierno de Lanusse había sido designado en la Secretaría de Estado de Planeamiento y Acción de Gobierno.

⁴⁶ Esta élite consolidada alrededor de las operaciones represivas y las comandancias de los Cuerpos de Ejército se prolonga en algunos generales que se desempeñaron durante el mismo período como segundos comandantes, tales como Fernando Santiago, Acdel Vilas y Carlos Dalla Tea.

⁴⁷ La dificultad de acceder a un listado completo de las empresas controladas total o parcialmente por el Estado durante el período ha sido ya señalada por Schvarzer (1981). En el presente trabajo nos hemos basado en la información disponible en el área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina. Según esta fuente, dentro de las mayores empresas estatales industriales se encontraban AFNE, CAP, Casa de Moneda, CAVIC, la Escuela de Aviación Militar, Fabricaciones Militares, Forja Argentina, IME, Industrias Llave, La Esperanza, Lisandro de la Torre, SIAM, SIAM-SIAT, SOMISA, Swift de La Plata, TANDANOR, YPF, etcétera; mientras que la cúpula de empresas estatales prestadoras de servicios públicos estaba conformada, entre otras, por Gas del Estado, SEGBA, Agua y Energía Eléctrica, ENTel, Aerolíneas Argentinas, ELMA, Ferrocarriles Argentinos, ENCOTEL, Administración General de Puentes, HIDRONOR y Obras Sanitarias de la Nación.

⁴⁸ El general ingeniero Diego Uricarriet, presidente de Fabricaciones Militares, fue sin dudas el representante más cabal de la fracción industrialista dentro del Ejér-

litares-, el general de división (RE) Horacio Rivera y el general de (RE) Ángel Gordo⁵⁰ —presidente y vicepresidente de SOMISA (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina), respectivamente-, el ingeniero Raúl Ondarts⁵¹, Carlos María Benaglia y Eduardo Valentín Oxenford⁵² —presidente, vicepresidente y director de YPF (Yacimien-

cito. Su figura resulta particularmente notable no sólo por su trayectoria en el desempeño de cargos públicos —desde 1973 hasta mayo de 1975 se había desempeñado sucesivamente como director, vicepresidente y presidente de Fabricaciones Militares, para permanecer en este último cargo hasta marzo de 1981, y había sido presidente del directorio de HIPASAM, Petroquímica Bahía Blanca, ATANOR y titular de la Academia de Ingeniería de la provincia de Buenos Aires— sino también porque su figura sería catapultada por Viola para ejercer el cargo de ministro de Obras Públicas a partir de 1981, al tiempo que Gallino —de la línea violista— sería designado gobernador de la provincia de Buenos Aires por la misma administración.

⁴⁹ Hacia principios de los años setenta, la Dirección General de Fabricaciones Mi-l uno de los principales complejos industriales y financieros de América La-, H 90% de su producción se destinaba al consumo civil, tanto para el mercado in-*t* como internacional. Poseía personalidad jurídica propia y autonomía financiera, que le permitía a las Fuerzas Armadas controlar un grupo importante de sociedades mixtas entre las más importantes del país —SOMISA (90%), ATANOR, DURANOR, HIPASAM (76%), Petroquímica General Mosconi (50%), Petroquímica Bahía Blanca, Carboquímica Argentina, Petroquímica Río Tercero (11%), etcétera—, e influir en los planes de desarrollo implementados a nivel nacional (Castiglione, 1992; Fraga, 1988). Alrededor del crecimiento de sus actividades, el arma de ingenieros había ido aumentando su presencia dentro de la estructura de mandos y multiplicando su influencia.

⁵⁰ Rivera había sido director de Fabricaciones Militares durante la comandancia de Carcagno —entre mayo y diciembre de 1973— y comandante de Institutos Militares durante la comandancia de Anaya —entre diciembre de 1974 y mayo de 1975—; mientras que Gordo se desempeñaba hacia 1976 como presidente de la Comisión del Anta de Ingenieros "San Ignacio de Loyola".

⁵¹ Ondarts se había desempeñado como subsecretario de Hacienda en el gabinete de Krieger Vasena durante la Revolución Argentina y había sido candidato a vicepresidente por la Nueva Fuerza liderada por Álvaro Alsogaray en las elecciones presidenciales de 1973. Tras su fallecimiento en un accidente aéreo en noviembre de 1979, fue sucedido al frente de YPF por Suárez Masón.

⁵² La trayectoria del ingeniero Eduardo Oxenford merece una mención aparte: do como ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires, posgraduado en el título de Tecnología de Massachussets (MIT) y el Advanced Management Program de la Universidad de Harvard, fue socio fundador y presidente para el Instituto para el Desarrollo de Empresarios en la Argentina (IDEA) en 1962. Ingresó en Alpagatas en 1999 para alcanzar la presidencia en 1981, además de ser presidente de SA Fábrica Uru-

tos Petrolíferos Fiscales) respectivamente—, el ingeniero Pascual Palazzo —interventor en la CAP (Corporación Argentina de Productores de Carne)—, el brigadier Orlando Jesús Capellini⁵³ —director de la Escuela de Aviación Militar—, el general de brigada (RE) Tomás Caballero y Hugo Carassai —sucesivos presidentes de Ferrocarriles Argentinos—, los ingenieros Mario Piñeiro y Carlos Sureda —presidente y vicepresidente de HEDRONOR respectivamente—, el contralmirante (RE) Félix Imposti —presidente de SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires)—, los ingenieros Pedro Vicien y Julio Lancafroni —administrador general y subadministrador de Agua y Energía Eléctrica—, el ingeniero Gabriel Meoli —presidente de Gas del Estado—, Juan Carlos Pellegrini —vicepresidente de Aerolíneas Argentinas—, o el general de brigada (RE) Eduardo Osear Conrado⁸⁴ —administrador general de ENTel— y su sucesor, el coronel (RE) Luis Alberto Amallo, entre otros. Todos estos funcionarios, civiles y militares, habían desarrollado una estable trayectoria profesional dentro del complejo militar-industrial y al frente de las poderosas empresas de servicios del Estado, y si bien no ejercerán una presencia pública destacada durante el Proceso, defenderán celosamente sus territorios dentro del aparato estatal, ante los avances de los funcionarios del equipo económico.

La convergencia entre los *señores de la guerra* y los *burócratas* en una oposición común a la política económica se fundaba en que todos ellos se hallaban fuertemente vinculados, por su trayectoria, con las expresiones institucionales que se habían fortalecido enormemente

guaya de Alpagatas, vicepresidente del Banco Francés del Río de La Plata, vicepresidente 1° del Consejo Empresario Argentino y vocal de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Hasta febrero de 1979 fue vicepresidente de YPF, cargo que abandonó cuando fue designado interventor en la Unión Industrial Argentina: en marzo de 1981 sería nombrado ministro de Industria y Minería por el gobierno de Viola, cargo que ocupó hasta el mes de agosto.

⁵³ El brigadier Capellini, líder del núcleo nacionalista-dentista de la Fuerza Aérea, había sido el principal promotor y ejecutor de la sublevación del 18 de diciembre de 1975 que había depuesto al entonces comandante Fautario e impulsó el ascenso de Agosti a la jefatura de la fuerza y la conformación de la cúpula militar que llevaría adelante el golpe de 1976.

⁸⁴ Oficial ingeniero militar, compañero de promoción de Alfredo Saint Jean, Corrado se había desempeñado desde diciembre de 1975 como director de la Escuela de comunicaciones bajo la jurisdicción de Institutos Militares y a partir de 1979 sería designado secretario de Comunicaciones.

durante períodos en los cuales la intervención estatal en las actividades económicas era primordial, en virtud de la fuerte impronta alcanzada por las concepciones industrialistas y desarrollistas en el interior de las Fuerzas Armadas. Las metas "antiestatistas" perseguidas por el equipo económico vulneraban la presencia del Estado empresario e interventor que ambos grupos consideraban como primordial para el desarrollo nacional. Sin embargo, había un aspecto nada menor que los distinguía: su posición política dentro de la interna del Ejército. Mientras que los *señores de la guerra* se enfrentaban contra la fracción "politicista" del Ejército, encarnada fundamentalmente por los integrantes de la línea violista, los *burócratas* se encontraban cercanos a estas últimas posturas, lo que los llevaría a ejercer cargos políticos de relevancia durante las presidencias de Viola y Bignone (tales los casos de Uricarriet y Gallino, ministro de Obras Públicas y gobernador de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Viola respectivamente y Cambior, posterior ministro de Defensa de Bignone).

Los señores de la guerra y el Ministerio de Planeamiento

Ya en el mes de agosto de 1976, y desde su editorial en *Carta Política*, Mariano Grondona percibía con claridad que en las legiones es distaba de reinar la calma:

"En el plano político-militar, la aparición pública del teniente general Lanusse en abierta polémica con un general en operaciones parece indicar —y sea cual fuere el valor de las razones que esgrimió el ex presidente: varias de ellas son, sin duda, atendibles— que se cree que la lucha antisubversiva ha avanzado lo suficiente como para permitir públicas diferencias castrenses. ¿Es que sólo Santucho mantenía viva, entonces, la llama de la unidad?" (*Carta Política*, n° 34, 8/1976).

Pero la disputa entablada entre el ex presidente de la nación y ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Alejandro Agustín Lanusse principal responsable del Operativo Independencia, Acdel Vi-

las, ahora 2° comandante del V Cuerpo de Ejército —alrededor de un supuesto caso de "infiltración marxista" en la Universidad Nacional del Sur que habría sido apañado por el ex ministro de Educación del primero, Gustavo Malek—, sólo era la punta del iceberg de un conflicto que tenía como principales protagonistas a las fracciones "dura" y "politicista" del Ejército.⁵⁵ Si bien no presentaban diferencias en su postura frente a la masacre represiva, defendida férreamente por ambos, el enfrentamiento entre estos grupos se basaba en el resquemor que provocaban entre los "duros" los avances de Viola y algunos funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia —en particular, Ricardo Yofre y el general José Villarreal— en la elaboración de un plan político propio que contemplaba una no muy lejana —en la perspectiva de los "duros"— apertura política del régimen.⁵⁶ Sin embargo, por encima de estas escaramuzas, hacia fines de 1976 la agenda del régimen perseguía dos objetivos claros y excluyentes: la profundización de la "lucha antsubversiva" y la consolidación del plan económico. De allí que el espacio de los minoritarios violistas y sus intenciones aperturistas se viera reducido por la cristalización de una coyuntura! —aunque sólida— convergencia: la de las necesidades de aislamiento que imponía la política económica con las prioridades de la masacre conducida por los comandantes de Cuerpo.⁵⁷ En este punto el régi-

⁵⁵ La diferenciación entre estas fracciones databa, fundamentalmente, del tercer gobierno peronista. Durante la comandancia de Anaya, y ante los avances de las organizaciones armadas sobre blancos militares, los generales "duros" comenzaron a presionar a los entonces generales a cargo del Estado Mayor General, Videla y Viola, con miras a un creciente involucramiento del Ejército en la "lucha antsubversiva", distanciándose así del "profesionalismo prescindente" que pretendía impulsar la dupla de infantería (Fraga, 1988).

⁵⁶ El *Plan de acción política de la propuesta de unión nacional*, documento reservado de la Secretaría General, vio la luz en 1977. Entre otras cosas, proponía la realización de un referéndum, la promulgación de la Ley de Partidos Políticos en un plazo que no excediera marzo de 1980, seguida por el levantamiento inmediato de la suspensión de las actividades políticas, la realización de una Convención Constituyente para abril- julio de 1982 y la posterior elección de un presidente, resultante de un acuerdo cívico-militar, que permitiera la continuidad del Proceso (*Plan de acción política de la propuesta de unión nacional*, Secretaría General de la Presidencia, 1977).

⁵⁷ La convergencia entre Martínez de Hoz y los "duros" tiene una arista nada menor: para los segundos, el ministro era la garantía fundamental del acceso a los créditos inter-

men se involucraría en una infecunda y conflictiva experiencia: la creación del Ministerio de Planeamiento.

Ya a comienzos de septiembre de 1976, el diario *La Nación* inauguraba los resquemores de gran parte de la opinión pública anties-tatista de la época, advirtiendo acerca de los riesgos del "planeamiento como técnica o modalidad de acción política", dada la "tendencia burocratizante de sus formas de trabajo y por representar una vía idónea para quienes creen oportuna la intensificación del papel del Estado en el ordenamiento económico y social integral de la sociedad". El atribulado editorialista recomendaba evitar a toda costa tanto "los complejos y excesivamente recargados de dependencias personal, aptos casi siempre para presentar esquemas y volúmenes de inmensas dimensiones físicas pero de modesta sustancia intelectual", como "los equívocos de un intervencionismo que so I de planificación puede terminar en una vuelta más de tuerca a la tendencia dirigista que tanto mal ha hecho al país", anticipando "las complicaciones derivadas de las interferencias entre los des organismos existentes en el seno del gobierno" (*La Nación*, 1/1976). Estas preocupaciones eran compartidas por figuras tradicionales del liberalismo como Álvaro Alsogaray, quien sostenía, es-o, que la creación del nuevo ministerio era "un contrasentido total porque el gobierno, al querer implantar el sistema de libre empresa privada a través del Ministerio de Economía, estaría siguiendo I nimbo determinado y al orientarse hacia la economía planificada el Ministerio de Planeamiento estaría siguiendo un rumbo totalmente opuesto" (*La Opinión*, 2/11/1976; cit. en Sidicaro, 1996: 17) Versiones más atenuadas de estos temores indicaban que el planeamiento podía constituir una herramienta eficaz para "ganar conciencia en la labor cotidiana" y permitir "fijar un rumbo", pero que debía evitarse planificar "sobre el desarrollo económico o la cultura", í el único gran "planificador económico y cultural que conoció

nacionales que permitieron, durante su gestión, la modernización de los equipos bélicos. Según Novare y Palermo, el ministro, "lejos de presentar batalla en lo que lo que atañe en gasto militar y en insumos estratégicos, se dispuso a aprovechar la disponibilidad de recursos externos para satisfacer las demandas castrenses, y no se opondría a que ocurriese lo mismo con el gasto de las empresas públicas y las obras de infraestructura donde los militares tendrían el campo libre" (Novaro y Palermo, 2003: 227).

el mundo moderno fue José Stalin, un comunista convencido [...] salvo que se quiera cambiar libertad por buenas estadísticas" (*Somos*, 8/10/1976).⁵⁸

Resultaba evidente que la creación del ministerio entraba en colisión con varios objetivos declarados como básicos por el régimen, que habían sido ampliamente festejados por la opinión pública liberal. En primer lugar, desde el punto de vista *administrativo*, conspiraba contra el objetivo supremo de racionalización de la administración pública⁵⁹ anunciado desde el Ministerio de Economía; en segundo lugar, en términos *institucionales*, la existencia de un organismo estatal que centralizara y coordinara las actividades de los restantes ministerios le otorgaba a esta nueva dependencia el carácter de un "superministerio" que restaba autonomía y peso a los otros organismos a la vez que se contraponía con el otro verdadero "superministerio", el de

⁵⁸ Las quejas liberales no eran infundadas, ya que el concepto mismo de planeamiento remitía directamente a las distintas —y a su entender, nefastas— versiones del desarrollismo vernáculo. Tal vez la primera experiencia consistente haya sido la de la Comisión Nacional de Administración del Fondo de Apoyo al Desarrollo Económico y la del Consejo Federal de Inversiones del gobierno de Frondizi (1959), que redactaron las prioridades del sector público y propusieron metas de desarrollo para el sector privado, lo cual dio origen al CONADE durante el gobierno de Illia, desde el cual el ingeniero Roque Carranza elaboró un Plan Quinquenal (1963-1969) que propuso metas concretas para el desarrollo económico y reorganizó los servicios estadísticos nacionales. Posteriormente, durante la Revolución Argentina, el diseño tripartito del CONADE, CONASE y CONACVT del gobierno de Onganía constituyó la segunda experiencia concreta de planificación estatal hacia el desarrollo y la seguridad, para luego, durante el gobierno de Levingston, y con el CONADE bajo la dirección de Enrique Guglielmelli, con solidarse un Sistema Nacional de Planeamiento que elaboró el "Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971-1975"; finalmente, durante el gobierno de Lanusse, la Secretaría de Estado de Planeamiento y Acción de Gobierno, bajo la dirección del brigadier Ezequiel Martínez absorbería las funciones del CONADE, CONASE y CONACYT.

⁵⁹ El nuevo ministerio estaría conformado por dos secretarías —Planeamiento, a cargo del coronel Juan Carlos Duret, y Proyecto Nacional, a cargo del mismo Díaz Bessone— y nueve subsecretarías, al frente de las cuales se encontraban varios ingenieros*, economistas y oficiales retirados. La dotación total de personal fue apreciada inicialmente por el mismo ministro en 600 personas (*La Nación*, 24/11/1976); tiempo después Laidlaw, su sucesor, habló de unos 890 empleados, que luego se habrían reducido a 600, para transformarse en 500 durante su gestión (*La Nación*, 27/4/1978). Oszlak (1984) estima estos números en un total inicial de 1 200 empleados, redimensionados a unos 450 en 1982.

Economía; finalmente, en términos *ideológicos*, la idea de planificación estatal, que asignaba al Estado la capacidad de fijar metas económicas y políticas que debían ser seguidas por los diferentes actores sociales, entraba en contradicción con los postulados fundantes del liberalismo. Para completar este cuadro, entre las nuevas atribuciones del ministro de Planeamiento, y en ausencia de la figura de un vicepresidente, se encontraba la de reemplazar al presidente de la Melón en su ausencia en el país, poder que le había correspondido anteriormente al ministro del Interior, Albano Harguindeguy, uno de los pilares fundamentales de la defensa pública del plan económico; además, las posiciones políticas del nuevo ministro Díaz Bessone eran contrarias a los planes de la Secretaría General de la Presidencia de instrumentar una no muy lejana salida política controlada.

Sin embargo, y a pesar de estas contradicciones, que auguraban ingentes conflictos, el 29 de septiembre de 1976 se creaba el Ministerio de Planeamiento mediante la ley 21 431, hecho en el cual se cristalizaban varios elementos. En primer lugar, y fundamentalmente, la necesidad de entregar a los *señores de la guerra* un espacio de poder de relevancia en un período en el cual las tareas represivas eran un objetivo de primer orden para el régimen, y —de modo coyuntural— plenamente funcionales a las necesidades del plan económico; en segundo lugar, la urgencia de dotar al régimen de un criterio de legitimación que reemplazara los estrictamente militares, lo que sería perseguido a través de la tarea fundamental que se le otorgaba al nuevo ministerio: la redacción de un *Proyecto Nacional*; en tercer lugar eficaz resistencia que comenzaban a ejercer algunos sectores los elencos militares al proclamado antiestatismo del ministro de Economía, y, paralelamente, el inicio de la modalidad en la cual el ministro de Economía zanjaría recurrentemente estas resistencias, untando medidas proclives al aumento del gasto y la inversión públicas.⁶⁰

60 Ya en 1976 los funcionarios del ala económica identificaban un panorama de vagas pero amplias resistencias ante sus avances contra el aparato estatal. Luego de que Aleman, profundizando la línea del discurso del 2 de abril, insistiera en la necesidad de una "enérgica reducción en el número de empleados públicos" y de la "privatización total de muchas empresas que se encuentran en manos del Estado por causas circunstanciales y en la privatización parcial de las restantes empresas estatales" (*La Na-*

El nuevo ministerio fue presentado como una suerte de "coordinador ministerial", cuyo titular, el general de brigada Ramón Genaro Díaz Bessone,⁶¹ designado el 20 de octubre, funcionaría como asesor directo del Presidente y cubriría además su cargo en caso de ausencia del país, pero sobre todo, se sostenía, esta creación respondía a la necesidad de elaborar un *Proyecto Nacional* que estableciera las políticas fundamentales del régimen para el mediano y largo plazo (Sidicaro, 1996); así, a diferencia de las carteras restantes, de carácter "técnico", las tareas del nuevo ministerio eran de carácter estrictamente "creativo" o "político":

"Un proyecto nacional es un proyecto político en la más amplia y noble acepción de la palabra; requiere la organización de todas las instituciones políticas, jurídicas, sociales, económicas, educacionales, porque el ordenamiento institucional debe responder al nuevo proyecto nacional, es decir, al nuevo proyecto político" (*La Opinión*, 31/12/1976).

El modelo de Díaz Bessone se inspiraba con creces en varios componentes del imaginario corporativista de Onganía: en particular, en la necesaria sucesión por etapas entre el planeamiento, la consulta y la decisión. Así, la etapa de planeamiento consistía en el diseño de un plan general (*Proyecto Nacional*) a cargo de "los intérpretes del in-

ción, 11/8/1976), hacia fines de 1976 Martínez de Hoz admitió que la "reducción de los gastos del Estado" no era tarea fácil, ya que "la racionalización del aparato estatal (demanda), además de cierta dosis de paciencia, una gran dosis de persistencia y acertar con las medidas que, poco a poco, vayan produciendo un consenso y convencimiento general de su necesidad" (*La Nación*, 24/12/1976).

⁶¹ La designación de Díaz Bessone no era casual. General de brigada del arma de artillería y comandante del Cuerpo de Ejército II, había actuado durante el gobierno de Onganía en la Secretaría de Seguridad, dedicada a la planificación estatal, y durante el gobierno de Lanusse había sido designado en la Secretaría de Estado de Planeamiento y Acción de Gobierno, bajo la dirección del brigadier Ezequiel Martínez, que absorbería las funciones del CONADE, CONASE y CONACYT; asimismo, era uno de los fundadores de la Fundación Argentina Año 2000 y los Centros de Estudios Prospectivos (Quiroga, 1990), integrados por un equipo multidisciplinario de civiles y oficiales retirados, que había editado ya en 1973 el *Proyecto Nacional Argentina Año 2000*. Varios de los miembros de la Fundación acompañarán a Díaz Bessone en la nueva cartera.

terés nacional" con sede en el nuevo ministerio —órgano novedoso que reunía las funciones de planeamiento con las consultivas, antaño ejercidas por el triángulo CONASE/CONADE/CONACYT—; una vez aprobado el plan por la Junta Militar,⁶² se habilitaba el inicio del primer ciclo de "intercambio de opiniones con los argentinos, con sus instituciones, con los organismos del Estado y naturalmente con las propias Fuerzas Armadas [...] con excepción de los que han sido juzgados por corruptos y subversivos [que] no comparten los valores del ' ser nacional" (*La Nación*, 12/8/1977), a fin de "ampliar y perfeccionar el documento de trabajo original". Esta etapa de consulta se realizaría—"a través del contacto personal [y] escrito", con el objetivo de recabar la opinión de "los profesionales, los técnicos, los científicos, los sectores de la producción" (*La Opinión*, 31/12/1976) mediante un "sistema de encuestas" aplicado "a todas las personas de relevancia que, previamente escogidas, acepten responder" (*La Nación*, 4/5/1977).⁶³ Finalmente, la decisión quedaba en manos de los órganos existentes a tal efecto: la Junta Militar en primer lugar y luego el presidente (a diferencia del onganiano, donde el presidente asumía toda la decisión).

⁶² La defensa del *Proyecto Nacional* como el "proyecto político de las Fuerzas Armadas" estuvo a cargo de las más altas autoridades. Ya en julio de 1977, Massera sostenía en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas: "también los equivocados arrepentidos tienen un lugar en la Argentina que soñamos, y también para ellos estamos fundando otra vez la Patria, cuya expresión es el Proyecto Nacional, que transparenta la vocación humanística inmanente en nuestra sociedad" (*La Nación*, 8/7/1977); y era respaldado por Agosti, quien afirmaba: "el objetivo de fondo es superar los factores causales de los problemas argentinos, restablecer la confianza en el país y su futuro y dar vida a un Proyecto Nacional entendido como destino para la nación" (*La Nación*, 11/8/1977).

⁶³ La consulta se inició con la formación de cuatro comisiones: la del área Educativa, denominada "sector universitario", con participación de rectores de las universidades nacionales y privadas, etcétera; la del área Economía, tres correspondientes al "sector agropecuario", "sector industrial" y "sector comercial", de las que participaron, respectivamente, numerosos dirigentes de las corporaciones agrarias —CONINAGRO, SRA, CRA, FAA, AACREA, etcétera—, industriales —Empresarios del Interior, Movimiento de Unidad Industrial, Movimiento Industrial Argentino, etcétera—, y de servicios —Bolsa de cereales, Bolsa de Comercio, Cámara Argentina de Comercio, banca nacional y cooperativa, etcétera (*La Nación*, 26/8/1977 y 6/9/1977).

Los objetivos del Ministerio de Planeamiento se explicitaban en las primeras páginas del *Proyecto Nacional*:

"De acuerdo con las disposiciones de la Ley n° 21.431 de creación del Ministerio de Planeamiento y su Decreto Orgánico n° 2594/76 (Anexo IV), competen a dicho Ministerio las misiones de elaborar y actualizar el Proyecto Nacional, con el sentido de proposición de una empresa y un destino para la nación, acorde con su perfil humano y su entidad histórica [...] El presente documento también llena otras necesidades operativas para la formulación del Proyecto Nacional".

- 1.1. Someter los lineamientos generales de su encuadre conceptual, los objetivos y los cursos de acción propuestos para su logro, a la consideración de la Junta Militar.
- 1.2. Permitir definir la "Etapa Fundacional" en su verdadero alcance, y posibilitar las correcciones necesarias en materia de organización del Poder Político, ejercido por las Fuerzas Armadas, a fin de asegurar la conveniente estabilidad, cohesión, y continuidad, más allá de lo personal. [...] El objetivo real es la articulación de un nuevo sistema político apto para realizar y hacer irreversibles los logros de la intervención militar.
- 1.3. Servir de base para la consulta y la recepción de aportes de la comunidad a través de sus figuras y entidades más representativas y calificadas [...]
- 1.4. Predisponer las condiciones para el consenso y la adhesión activa al Proyecto."

(*Proyecto Nacional*, Ministerio de Planeamiento, 25/5/1977: 3)

En el texto se buscaba fundamentar el proyecto político del régimen militar a partir de principios de naturaleza ético-filosófica y de elementos teóricos frecuentemente utilizados en las ciencias sociales contemporáneas (Sidicaro, 1996), y a partir de la definición de un diagnóstico de situación, ciertamente contundente. Según los funcionarios de Planeamiento, la clave de la declinación argentina se encontraba en la ausencia de una gran política nacional, cuya única expresión se había eclipsado junto a la Generación del 80, y disuelto en la "demagogia populista" y la "sucesión progresiva de la tendencia co-

lectiva que llevó al país a la precipitación vertical de 1973-1976". El diagnóstico del período 1880-1976, comprendido como una verdadera "unidad histórica", sostenía:

- 2.4.2. En el orden político queda patentizado que la esencia de la República fue paulatinamente desvirtuada, por hacer de los criterios electoralistas la finalidad exclusiva del concepto de democracia.
- 2.4.3. En el orden social queda evidenciado que el desplazamiento de las élites del pensamiento y su reemplazo en el poder por una sociedad de masas, constituye el factor acelerador de la descomposición total de la vida republicana, comenzando por la destrucción de la familia a la agresión a la ética y estética que le fueron propias a cada sector de la sociedad.
- 2.4.4. En el orden cultural queda demostrada la influencia creciente del materialismo ateo que, mediante la exaltación del libre albedrío, ha posibilitado la destrucción de los valores esenciales del ser argentino, creándole al comunismo las circunstancias propicias para su prédica disolvente, en todo el espectro de la cultura argentina.
- 2.4.5. En el orden económico, queda evidenciada la forma en que prejuicios doctrinarios, influencias ideológicas e intereses de grupos, impidieron la aplicación de una política económica realista, eficiente y pragmática, asentada sobre bases éticas, al verdadero servicio de los intereses nacionales" (*Proyecto Nacional*, op. cu.: 89).

Según el documento, la coyuntura en la que se encontraba el régimen militar era producto del agotamiento del "Proyecto del 80", a partir del cual la nación argentina se había quedado "sin política y sin proyecto"; de allí la urgente necesidad de "lograr la adhesión y el consentimiento mayoritario de la población", los que podrían ser recontrados a través de la tarea de "diseñar y proveer al país de una política en el sentido alto del término", tarea de una "nueva Generación del 80". La "Nueva República" que proponía fundar el *Proyecto Nacional* suponía, a nivel económico, "la modernización del país" a partir de una fuerte y activa presencia estatal, que apuntara básicamente a:

"a) preservar el poder de decisión nacional frente a la acción de los países desarrollados y las empresas transnacionales [...]; d) fijar criterios y pautas de promoción sectorial y regional. [...]; f) Establecer y mantener una política de distribución del ingreso y de precios relativos, de acuerdo con las pautas que fije el Proyecto y los Planes Nacionales y sin que ello signifique frenar la inversión y el crecimiento; g) Delinear y ejecutar un plan de inversiones públicas acorde con los criterios de orientación y eficiencia, fijados conforme a los principios establecidos; h) Adecuar el accionar del capital extranjero y de las empresas transnacionales a los reales intereses y prioridades de la economía argentina" (*ibid.*: 310).

"Ejercer a través del Estado, en cuanto gerente del bien común, el principio de subsidiariedad; una actividad de supervisión, promoción y ordenamiento; de coordinación y arbitraje de los grupos intermedios y de sectores, mediante: 1) La orientación de la actividad económica: —Fijando reglas de juego claras y estables. —Promoviendo la difusión de la propiedad privada [...] Esto excluye las concentraciones monopólicas sean privadas o estatales. —Desarrollando la infraestructura necesaria [...]. —Asegurando el normal funcionamiento de los mecanismos de mercado [...]" (*ibid.*: 339).

"Ordenar, redimensionar y capacitar a la administración pública para consolidarla como instrumento eficaz de conducción, programación, promoción y control al servicio del bien común general" (*ibid.*: 331).

En cuanto a los objetivos políticos del régimen, el *Proyecto Nacional* promovía "lograr la vigencia del principio representativo como fundamento de la legitimidad de los gobernantes, mediante la implantación de un régimen que asegure la idoneidad [...] [lograr] la participación de la ciudadanía a través de la creación y funcionamiento de órganos representativos con competencias preferentemente consultivas, de acuerdo a los requerimientos zonales o sectoriales" (*ibid.*: 330). Se suponía así una "primera etapa de gobierno militar sin la actuación de partidos políticos que tenderá en el tiempo —no estimado aún— hacia una progresiva intervención de la comunidad en la cosa pública a través de una escala primaria que puede estar consuetudinada por consejos o juntas vecinales para llegar, después de otra ins-

tancia una participación directa en la conducción del municipio y sucesivamente a otros niveles institucionales" (*La Nación*, 12/11/1977). La marca del onganiato se imprimía así, también, en la importancia otorgada a los "cuerpos intermedios", pilares del modelo corporativo de sociedad deseada, por lo que se sugería "encuadrar con clara y precisa legislación a la vida de las asociaciones o cuerpos intermedios para que no atenten contra la unidad nacional ni vuelquen su actividad a otros fines que los específicamente propios" (*Proyecto Nacional, op. cit.*: 333), y, sobre todo, en la naturaleza de los plazos temporales que se requerían para la ejecución de tan faraónica empresa: "el Proceso de Reorganización Nacional [...] prevé la iniciación, en 1986, de una etapa de transición, con la incorporación creciente de civiles, hasta llegar al año indicado, de 1991, en que se habrían alcanzado ya las condiciones para la Nueva República" (*La Nación*, 6/9/1977). La imposible lejanía de los plazos planificados por los redactores del documento era congruente con lo planteado hacia noviembre de 1977 por el ministro del Interior, quien recomendaba "dejar de escuchar los cantos de sirena" y olvidarse de "contendidas electorales inmediatas", para pensar en la realización de objetivos que requieren un "lapso muy largo" y que deben desarrollarse a partir de "planes de mediano plazo hasta 1987" (*La Nación*, 23/11/1977). Siguiendo la inspiración antipartidista del *Proyecto Nacional*, Harguindeguy afirmaba que "en el gobierno de las Fuerzas Armadas no hay aperturas políticas en el sentido electoralista", y que no habría "elecciones en el plano inmediato", ya que "la tarea es muy grande y no estamos para perder tiempo en pensar en partidismos ni sectorizaciones ni divisiones" (*La Nación*, 14/12/1977). Videla reforzaba estas apreciaciones sosteniendo que si bien no era prudente "ignorar que el inmovilismo en política tiene un alto precio" y que "el accionar político del gobierno debe desarrollarse abriendo crecientes posibilidades de activo consenso" por lo que "ponemos especial énfasis en señalar la voluntad de concertar criterios, voluntades y esfuerzos alrededor de un conjunto de ideas-fuerza que conformen un programa de gobierno de unión nacional" (*La Nación*, 19/10/1977), "la propuesta para la unión nacional no presupone un calendario electoral [porque] el Proceso de Reorganización Nacional no tiene plazos sino objetivos que cumplir" (*La Nación*, 21/12/1977).

Hasta aquí, los principios políticos —no así los económicos— del *Proyecto Nacional* resultaban coherentes y plenamente funcionales con el aislamiento social que requería el plan económico, y los objetivos de la masacre represiva que llevaban adelante los *señores de la guerra*.⁶⁴

Sin embargo, muy pronto la coyuntura internacional y los imperativos políticos internos del gobierno militar se modificarían para marcar, en diciembre de 1977, el fin de la experiencia de Planeamiento y el inicio de un proceso de decadencia de los "duros" dentro de la estructura de tareas del régimen. En primer lugar, se operará un viraje en la política de derechos humanos de los Estados Unidos, auspiciada por la flamante administración Carter⁶⁵ que implicaría no sólo el creciente temor del régimen ante una posible sanción internacional por la violación sistemática de los derechos humanos, sino también la conveniencia de clausurar el discurso legitimador que había sido empleado por las Fuerzas Armadas ante la sociedad civil, basado casi excluyentemente en el papel jugado en

⁶⁴ Para un análisis detallado de las contradicciones ideológicas entre el *Proyecto Nacional* y el proyecto Videla-Martínez de Hoz, véase Sidicaro (1996).

⁶⁵ Carter había asumido la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero de 1977; en agosto se había realizado la primera de las visitas a la Argentina de Patricia Derian, subsecretaría de Asuntos Humanitarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos; en septiembre Videla viajaba a Washington para reunirse con Carter y varios presidentes latinoamericanos, y realizar profusas declaraciones sobre democracia y derechos humanos, y desarrollar la tesis de la "guerra sucia". Así, en diciembre de 1977 se inició un proceso de progresivo desmantelamiento de los principales centros clandestinos de detención bajo la administración y responsabilidad de los "duros" (Seoane y Muleiro, 2001); aunque la masacre represiva no cesaría, sí comenzaría a vislumbrarse en la agenda del régimen que el tema de los derechos humanos y el temor hacia posibles sanciones internacionales cobraba importancia. Nada más cierto: a pesar de los ingentes esfuerzos por mejorar las relaciones con el flamante gobierno norteamericano, en julio de 1978 el banco Export-Import (EXIMBANK) declinó participar en el financiamiento de las obras de Yacyretá a causa de las violaciones a los derechos humanos, y en agosto del mismo año Patricia Derian sostuvo que en la Argentina continuaban registrándose violaciones a los derechos humanos. En el mes de octubre entró en vigencia la enmienda Humphrey-Kennedy, que prohibía el otorgamiento de créditos vinculados con proyectos de defensa, la venta de casi todo tipo de armamentos y la participación en programas de entrenamiento y capacitación militar a países donde se violaran los derechos humanos.

la "lucha antisubversiva".⁶⁶ En segundo lugar, en el plano interno, la ambiciosa propuesta de Díaz Bessone comenzó a girar en el vacío debido a por lo menos dos hechos fundamentales. Por un lado, su intención de que Planeamiento operara como un "primer ministerio" que marcara la función básica de todas las áreas del Estado, no pudo superar un dato que, hacia fines de 1977, resultaba evidente para CUALQUIER observador avezado: que el verdadero poder pasaba por Economía, único "superministerio" del régimen. Así, cuando el último día de diciembre de 1977, Díaz Bessone presentó su renuncia indeclinable a la Junta Militar al tiempo que solicitaba su pase a retiro del servicio activo, la prensa informaba que "la decisión del ministro de Planeamiento fue consecuencia de disímiles apreciaciones entre su cartera y la de Economía sobre el tratamiento de algunas cuestiones vinculadas directamente con el área que conduce el Dr. José Alfredo Martínez de Hoz [...] la consideración de algunos temas refe-

nciaje presidencial del 29 de marzo de 1978 marcó un punto de quiebre I de los objetivos del régimen. En este discurso, Videla plantea una di-I entre dos períodos: el primero corresponde a la "lucha contra la subver-III victoria militar sobre ésta —ambiguamente "aniquilada" dado que aún con-I capacidad"—, y al ordenamiento económico, campo en el cual se habrían) «vanees "muy significativos", aunque aún "incompletos"; el segundo período—precisamente por el mensaje del Presidente, es el de la "construcción", d* y la formulación de una "política para la unión nacional", basada en la I de "nuevas corrientes de opinión" por fuera de los partidos políticos tra-, • fln de avanzar en la "convergencia cívico-militar". En el horizonte, luego > período de transición, se vislumbra la promesa de una "democracia repu-, Ifpreientativa y federal" (*Clarín*, 30/3/1978). En julio, Agosti precisa, en los I Mil menos: "así como marzo de 1976 constituyó un punto de inflexión históri-IUnnlna con una etapa política y en el cual se asume con plenitud el combate |f) terrorismo subversivo, julio de 1978 constituye un nuevo punto de inflexión , terminado el combate armado, debemos enfatizar la construcción de los lito* de la nueva sociedad argentina. En alguna forma la primera etapa de es-»lignítico aventar el pasado, eliminando los principales riesgos de no tener i Hoy debemos enfatizar todo aquello que significa cambiar las estructuras ce-|4i nuestra sociedad, para permitir crear las bases de un país libre, con hombres LfUC podamos legar a nuestros hijos" (*Clarín*, 8/7/1978). De esta forma, los co-I parecían indicar que la "lucha antisubversiva" ya no constituía el principio ad fundamental del régimen, y que resultaba necesario y urgente promo-i criterios de adhesión (Canelo, 2001).

ridos a la futura estructura económica nacional, crearon [...] una fisura que se fue ampliando con el tiempo" (*La Nación*, 31/12/1977). *La Nación* señalaba además que, y como ya resultaba habitual dentro de las modalidades institucionales del régimen, la sanción de la "Ley de Planeamiento" había sido bloqueada por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía, quedando virtualmente "congelada" (*La Nación*, 3/1/1978),⁶⁷ Por otro lado, y a pesar de la defensa pública del documento que realizaron los altos mandos, el *Proyecto Nacional* había sido recibido con poco entusiasmo dentro del espectro militar, fundamentalmente dentro de las secretarías generales de las distintas fuerzas, que habían criticado duramente las propuestas de Planeamiento.⁶⁸

Así, y en un contexto de viraje estratégico de los Estados Unidos en relación con su política de derechos humanos, de profundización del plan económico y del poder de Economía, y de ausencia de apoyos institucionales sólidos dentro de las fuerzas, el destino de la am-

⁶⁷ Según *La Nación*: "la iniciativa habría llegado a la Presidencia con el visto bueno de los restantes ministerios, pero no con la firma del titular de la cartera de Economía, que en su oportunidad había planteado también discrepancias fundamentales. De acuerdo con las mismas fuentes, el Dr. José Alfredo Martínez de Hoz envió entonces al Presidente, por escrito, todas las objeciones que había expuesto anteriormente y señaló, además, su firme oposición a la sanción de la iniciativa. A ello se habría sumado también la opinión contraria del Poder Ejecutivo, por entenderse [...] que la Ley Nacional de Planeamiento, tal cual estaba proyectada, convertía prácticamente a la cartera de Planeamiento en una especie de 'superministerio', que invadía jurisdicciones y, además, porque en la práctica iba a dificultar el normal desenvolvimiento de las actividades en los distintos ámbitos del Estado, ya que abarcaba casi todos los aspectos de la administración, al margen de los de mayor trascendencia" (*La Nación*, 3/1/1978).

⁶⁸ Estas críticas se revelan en un documento reservado que emitieron conjuntamente las secretarías generales de los distintos comandos en jefe, donde se sostenía que "pareciera conveniente someter a la Junta Militar tres o cuatro modelos de país para su análisis y selección. Debiera incluir alternativas respecto a las estrategias en campos prioritarios, a los tiempos probables que demandará y a los costos sociales y políticos [...] No se identifica claramente el modelo económico y el esquema de crecimiento a adoptar [...] No tiene [articulación política], ya que considera la institucionalización exclusivamente en lo referido a las FF.AA. (JM-PEN). No tiene una sustentación política visualizable" ("Crítica al *Proyecto Nacional* de las Secretarías de los Comandos en Jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea", 1977).

biciosa experiencia del Ministerio de Planeamiento no podía ser otro que el olvido.⁶⁹ Su final inició el ocaso lento pero implacable del poder de los comandantes de cuerpo dentro de la estructura de tareas del régimen.⁷⁰ De aquí en más, la presencia pública de los "duros" fue persistente pero relativamente inofensiva para el equipo económico ya que, si bien serían retirados de la estructura de mandos recién hacia fines de 1979,⁷¹ su estrategia se limitó a la defensa pública de los

⁶⁹ El 24 de enero de 1978 asumirá como nuevo ministro de Planeamiento el general Julio Enrique Laidlaw, saliente secretario de Inteligencia del Estado, quien observará un perfil público prácticamente inexistente en relación con la intensa presencia de su antecesor, ocupando un lugar más modesto y, sobre todo, menos problemático. En noviembre, luego de la profunda crisis ministerial a la que Laidlaw no sobreviviría, se tomaría una resolución definitiva: convertir a Planeamiento en una secretaría dependiente de la Presidencia de la Nación. A su frente quedó, hasta fines del gobierno militar, el brigadier José Miret, y Planeamiento colaboró en la redacción de algunas leyes y varios estudios, pero nunca recuperaría la importancia ni el poder efectivo que había detentado entre 1976 y 1977.

⁷⁰ La caída de Díaz Bessone, sin embargo, no implicaría el silencio inmediato de los señores de la guerra: el proceso de descargo de los "duros" que iban siendo progresivamente desplazados fue iniciado por el general Acdel Vilas. El 3 de enero de 1978 Vilas sostuvo: "de continuar la política económica elaborada y ejecutada por el actual gabinete económico, contribuirá a acentuar en forma progresiva y permanente las condiciones para el restablecimiento del accionar subversivo", al tiempo que denostaba la "extrema facilidad para olvidar y perdonar el martirio y el heroísmo de aquellos civiles y militares que derramaron su sangre", en referencia al Operativo Independencia que había comandado (*La Nación*, 3/1/1978).

⁷¹ Hacia mediados de 1979 ya habían sido pasados a retiro Vilas (24/5/1977), Azpitarte (14/12/1977) y Díaz Bessone (16/3/1978), y entre octubre de 1979 y marzo de 1980, Menéndez y Maradona (4/10/1979), Santiago (27/11/1979) y Suárez Mason (que en diciembre de 1979 pasará a desempeñarse en el directorio de YPF, mientras que Riveros será destinado a la Junta Interamericana de Defensa el 1/2/1979, para ser pasado a retiro en marzo de 1980). El ascenso de Galtieri a la Comandancia del Ejército marcará el reemplazo de los "duros" al frente de las comandancias de cuerpo y en el Estado Mayor General, por generales violistas o partidarios de la ascendente línea de Galtieri; Antonio Vaquero y Alfredo Saint Jean como jefe y subjefe en el EMGE, JOSÉ MONTES en el Cuerpo I., Jáuregui en el Cuerpo II, Bussi en el Cuerpo III, Villarreal en el cuerpo V y Nicolaidis en Institutos Militares; sin embargo, varios de los "duros" continuaron en "servicio secreto activo" de la mano de Galtieri en la "Cruzada Anticomunista" en Centroamérica (Seoane y Muleiro, 2001). Por caso, hacia fines de 1980, Suarez Mason era el presidente del *IV Congreso de la Confederación Anticomunista Latinoamericana*. -

principios de la "lucha antisubversiva",⁷² acorde con los imperativos de las nuevas tareas que encaraban en su exportación a los países limítrofes y centroamericanos. El verdadero recambio de los *señores de la guerra* al frente de la defensa del Estado contra el equipo económico sería el de los *burócratas*.

Los burócratas y la defensa del aparato estatal

Fracasada la intentona del Ministerio de Planeamiento, los embates de los sectores estatistas de las Fuerzas Armadas se organizaron alrededor de la defensa del gasto y la inversión pública, y el rechazo hacia la privatización de las empresas estatales, en sucesivos y elocuentes enfrentamientos públicos con el secretario de Hacienda. Ya desde los inicios del régimen Juan Alemann se había constituido en el principal contendiente de estos sectores, definiéndose a sí mismo como quien debe "vigilar el gasto público procurando contenerlo y orientarlo en la medida adecuada", señalando que "nada se podía hacer cuando [...] las esferas superiores del gobierno [...] toleran in-

⁷² El papel público de los generales del ala "dura" se caracterizaría por la insistente agitación del fantasma "subversivo", declamaciones que contribuían, por cierto, a recrear y revitalizar su propia tarea militar, la que continuaba siendo presentada ante la sociedad como interminable e imprescindible. En mayo de 1978, Menéndez afirmaba: "terminada la lucha contra la subversión, el Ejército vigila las otras formas de lucha del marxismo; los estamos siguiendo sin darles respiro [...] los estamos encontrando como quiera que se disfrazan, cualquiera sea la actividad en que desarrollan su marxismo [...] No hay descanso para los hombres de armas argentinos" (*La Nación*, 28/5/1978). Cuando menos irónico, el diario *La Nación* editorializaba al mes siguiente: "hasta aquí no ha habido doctrina firme en cuanto a si el combate armado contra la subversión había terminado o no. No todas las exposiciones en punto a cuestión tan delicada han sido coincidentes, de tal manera que habrá que esperar otros pronunciamientos para saber con exactitud si se ha llegado a una definición conceptualmente aceptada por todos" (*La Nación*, 9/7/1978). Posteriores proclamas no debieron, por cierto, satisfacer los interrogantes de *La Nación*: por caso, Suárez Masón sostenía, más de un año después: "sería absurdo suponer que hemos ganado la guerra contra la subversión porque hemos eliminado su peligro armado [...] Montoneros está totalmente diezmado para la lucha armada pero busca por todos los medios copar al peronismo, y el Ejército Revolucionario del Pueblo pretende volver al enfrentamiento armado buscando apoyo en el exterior" (*La Nación*, 7/7/1979).

versiones en proyectos de prestigio o de baja prioridad, o permiten la incorporación de personal público innecesario por razones de amistad o de política" (*La Nación*, 11/8/1976).

El mes de febrero de 1978 se inauguraba con dos temas centrales: los vaivenes diplomáticos producto del conflicto por el Beagle y el Campeonato Mundial de Fútbol 1978, cuestión esta última que provocará un encendido debate entre el secretario de Hacienda y el titular del Ente Autárquico Mundial 78, general de brigada (RE) Antonio Merlo. Ante las acusaciones de Alemann acerca del efecto inflacionario que tendrían los gastos que implicaban las obras públicas del Mundial, un "muy costoso error" que el régimen "no debería haber cometido", Merlo indicaba que el campeonato era "esencialmente un acto político" cuyos imperativos no podían ser apreciados tras "la óptica de un sector como la economía o las finanzas", y que Alemann se colocaba "fuera de lugar" al criticar una "decisión tomada por su propia autoridad" —el Poder Ejecutivo—, por lo que el paso lógico hubiera sido el de "presentar su renuncia" para "criticar después" (*La Nación*, 9/2/1978). El día 15, Alemann respondió sosteniendo que "la deficiente utilización de los recursos públicos [...] constituye uno de los factores básicos de la insatisfactoria tasa histórica de desarrollo de la economía argentina" y que el Mundial de Fútbol era, sin dudas, "el caso más visible e indefendible de inversión pública no prioritaria" y una verdadera "ostentación de lujo"; y defendió sus posiciones como un "acto patriótico de servicio" (*La Nación*, 15/2/1978). Merlo clausuraría finalmente el debate afirmando que la realización del torneo era "una decisión absoluta de la Junta Militar que lo hace conscientemente, ortodoxamente y con total libertad" (*La Nación*, 16/2/1978). Finalmente, el 30 de junio Alemann aceptaba, relativamente doblegado, que la "fiesta del Mundial ha sido magnífica y no está definitivamente mal que se haya gastado toda esa plata, si existía una

⁷³ La realización del Mundial de Fútbol incluía planes de infraestructura de gran trascendencia, tales como un conjunto de obras para la telefónica estatal ENTel, la creación de una compañía de televisión estatal para transmitir los partidos —Argentina Televisora Color—, un plan de reparación de aeropuertos, un plan vial, la construcción de nuevos estadios deportivos y la remodelación de otros, etcétera. Schwarzer (1981) estima que esas obras representaron, en conjunto, erogaciones del orden de 500 millones de dólares durante el período 1976-1978.

verdadera decisión de gastarla. Pero en este caso, es necesario tener conciencia de que hemos elegido poner nuestro dinero en dar una gran fiesta. A no quejarse, entonces, de que faltan recursos para hacer otras cosas" (30/6/1978, cit. en Troncoso, 1985, vol. n: 135).

Esta temprana refriega será ampliamente representativa de la lógica implícita en los enfrentamientos posteriores: por un lado, la disputa se estableció alrededor de cuál debía ser el criterio orientador del gasto y la inversión estatales, si el *económico* o el *político*, caso este último en que la decisión resultaba inapelable, ya que correspondía a la Junta Militar;⁷⁴ por otro, las ambiciones iniciales del equipo económico se irían adaptando de modo progresivo a los obstáculos que les impusieron los sectores estatistas, apartándose paulatinamente de los enérgicos principios del discurso del 2 de abril.⁷⁵

A mediados de 1978, Alemann protagonizaría otro enfrentamiento, esta vez con el administrador general de ENTEL, general (RE) Eduardo Osear Corrado; pero esta vez el secretario de Hacienda moderó su discurso. Quien había afirmado en agosto de 1976 la necesidad de una "enérgica reducción en el número de empleados públicos" y sólo meses antes el efecto "eminente inflacionario" del gasto público, sostenía ahora que "el gasto público total y las empresas estatales no son ciertamente responsables de la recesión con inflación que vivimos", y aceptaba que "empresas estatales como Ferrocarriles, YPF o Gas del Estado no son privatizables, tanto por razones políticas como económicas", limitando sus ambiciones a la necesidad de una "privatización periférica, o sea de privatización de sectores auxiliares o de subempresas". Sin embargo, identificaba casos en los cuales "el avan-

⁷⁴ En su discurso del 29 de marzo de 1978, Videla dejaría en claro cuál era la concepción que la Junta tenía acerca de la necesidad de mantener una política de fuerte inversión pública: "la difícil tarea de reducir el déficit fiscal [...] se ha ido cumpliendo, cuidando de no afectar el nivel de la inversión pública, fuente importante del crecimiento futuro. Así como no estábamos dispuestos a continuar con el gasto incontrolado, era nuestro interés que el Estado no descuidara sus obligaciones fundamentales en materia de energía, comunicaciones, transporte y las grandes industrias" (*Clarín*, 30/3/1978). Para un detalle sobre el aumento de la inversión pública durante el período, que se había ubicado en 8,5% del PBI, véanse Canitrot (1980) y Schvarzer (1981).

⁷⁵ Esta distancia entre los objetivos iniciales del plan y sus resultados concretos ya ha sido señalada por Canitrot (1980), Novaro y Palermo (2003) y Schvarzer (1981), entre otros.

ce es decididamente insatisfactorio, como en el de ENTEL" y afirmaba que "en la mayoría de las grandes inversiones del sector público hay serias y muy costosas deficiencias", por lo que era necesario "desterrar para siempre las decisiones puramente políticas sobre inversión pública, tomadas frecuentemente entre gallos y medianoche" (*La Prensa*, 24/5/1978). Corrado contestó enérgica e inmediatamente que "el plan de obras en marcha, de conocimiento público y aprobado por el gobierno, se cumple sin participación económico-financiera del Estado Nacional y solamente con recursos genuinos de la empresa, a pesar de que en el presupuesto del año 1978 se le exige a ENTEL el reintegro al Estado de aproximadamente 70 millones de dólares [...] y además un aporte de 6% de los ingresos brutos [que] limitan la capacidad de inversión para el corriente ejercicio" (*La Prensa*, 25/5/1978). Un mes después de estas declaraciones, Corrado sucedería al frente de la Secretaría de Comunicaciones al general (RE) Alberto Nieto (*La Nación*, 28/6/1978); el episodio parece demostrar que los enfrentamientos con uno de los exponentes más altos del equipo económico podía proporcionar, en algunos casos, interesantes dividendos.

A pesar de que el entusiasmo que embargaba a *La Nación* la llevaba a sospechar que estas escaramuzas eran en verdad "jugadas exploratorias destinadas a palpar los márgenes más sensibles para una acción eventual en todo el terreno ocupado por las empresas públicas", punto que, se auguraba, sería el "gran tema de la gestión" de Martínez de Hoz durante el segundo semestre de 1978 (*La Nación*, 9/7/1978), Alsogaray aceptaba que, en términos concretos, "muy poco se ha hecho para dismantelar" la intervención del Estado, que "mantiene numerosos monopolios y oligopolios estatales, paraestatales y aún privados, que impiden el funcionamiento de un verdadero mercado" (*La Nación*, 13/7/1978); mientras que el presidente de la Bolsa de Comercio, Alberto Servente, manifestaba su preocupación por "la tardanza en lograr el reordenamiento de la actividad estatal, que se traduce en la necesidad de mantener sobreexcedido el nivel del gasto público" (*La Nación*, 12/8/1978).

Ante esta sucesión de reclamos y expectativas, Martínez de Hoz salió pronto a despejar el panorama, sosteniendo que la "función subsidiaria del Estado" supone que éste "debe cumplir los campos don-

de no hay inversión privada, tales como justicia, educación o infraestructura económica de grandes obras". En cuanto a lo realizado, y ofreciendo ya un panorama de lo que sería finalmente el reducido alcance privatizador de su gestión, destacó que "la reprivatización de empresas" antaño privadas que se encontraban por distintos motivos en manos del Estado "estaba dando sus frutos y tocando a su fin", pero que el Estado aún poseía "algunos hoteles administrados por concesión, bancos nacionales y provinciales, y estaciones de radio y TV", "cuya privatización se iba a resolver". Sin embargo, de las empresas que prestaban "los grandes servicios públicos no queda otra alternativa que sigan en manos del Estado", como "electricidad, ferrocarriles, cuya situación no es apetecible para la inversión privada", por lo que serían incluidas en un programa de "privatización de servicios periféricos". Sus afirmaciones serían inmediatamente convalidadas por el ingeniero Raúl Ondarts, presidente de YPF, quien sostuvo que "en el sector de la energía yo no veo posibilidades ni para el sector eléctrico, ni para el petróleo, ni para el carbón, de que el Estado deje de ser el actor principal del desarrollo, ni que estas funciones puedan pasar a manos privadas"; apoyó así la necesidad de "ir privatizando periféricamente los servicios", pero rechazando que las empresas del Estado fueran "el factor determinante de la inflación". Por su parte, el general (RE) Horacio Rivera, presidente de SOMISA, denunciaba, refiriéndose al énfasis privatizador, la presencia de un "chauvinismo latente que hay que tener en cuenta de manera que al liberalizar la socializada economía que tenemos no pasemos de un extremo a otro" (*La Nación*, 21/7/1978).

Entre octubre y diciembre de 1978 el avance de Martínez de Hoz se revelaría con claridad en dos puntos: en la crisis ministerial de octubre —que, entre otras cosas, supondría la transformación del ex Ministerio de Planeamiento en una secretaría— y en el anuncio, en el mes de diciembre, de una etapa de "profundización y ajuste" del plan económico, que incluía el objetivo primordial de reducción del déficit fiscal. En este marco, se buscaba ampliar la "racionalización administrativa", desde la mera reducción en el número de empleados públicos hasta una vasta "reorganización y simplificación de la estructura burocrática", una decisiva "privatización de empresas estatales" a partir de la elaboración de un proyecto de ley, y la reducción

de la inversión pública y su reemplazo por la inversión privada (*La Nación*, 21/12/1978).

Sin embargo, y a pesar de la profundización del poder del ministro, su vocación privatista no podía atribuirse más que modestos logros. La inquebrantable permanencia de los "sectores estatistas" dentro de posiciones encumbradas del gobierno seguía siendo denunciada, ya avanzado el año 1979, por Alsogaray y el general López Aufranc (ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Lanusse y en ese momento presidente de ACINDAR). Para el ex ministro de Economía, era precisamente la presencia de esos sectores "desarrollistas" dentro del gobierno la causante de la inflación: "la inflación en la Argentina no puede ser suprimida por las resistencias que existen dentro del propio gobierno [...] El nacionalismo económico mal entendido, el estatismo, el dirigismo y sobre todo el desarrollismo, que lleva a emprender obras faraónicas y empresas antieconómicas altamente protegidas siguen en pie; a impulso de esas tendencias hay un desborde de gastos e inversiones que obligan a emitir moneda y que, por ende, estimulan la inflación" (*La Nación*, 25/4/1979). López Aufranc, de acuerdo con el diagnóstico, iba aún más allá y denunciaba la resistencia a la privatización "de intereses mezquinos [que temen] la pérdida de una situación destacada de sus administradores o el verse obligados a manejarse con criterio comercial [oponiéndose] a la realización de proyectos privados en el área que pondrían en evidencia sus falencias y [que] buscan como protección lograr el monopolio en el sector en el que actúan". El presidente de ACINDAR, apuntando directamente hacia el equipo económico, los señalaba como aquéllos que "se dicen partidarios del liberalismo económico" pero que "son incapaces desde la función pública de avanzar en la dirección adecuada por temor a vulnerar las 'razones estratégicas'", y justifican la "permanencia de una determinada actividad económica en el ámbito oficial" porque el "capital privado no tiene interés en la misma". A su vez les reclamaba un avance privatizador decidido sin "conformarse con arreglos periféricos, en superficie, de estilo gatopardista que no cambiarán nada" (*La Nación*, 22/5/1979).

El resto de 1979 transcurriría bajo un imperativo de otro orden: la visita de la CIDH. La llegada de la Comisión les daría a los "duros" la posibilidad de rearticular su monótono discurso hacia un ataque

decidido contra los visitantes, al tiempo que provocaría una verdadera explosión de declaraciones del más variado tipo y origen. Finalmente, Harguindeguy expresaría la que será la posición oficial del régimen ante la Comisión, para vanagloria de los *señores de la guerra*: "la Argentina sólo se confiesa ante Dios" (*La Nación*, 22/9/1979). En septiembre, luego de la liberación del detenido Timerman, ex director del diario *La Opinión*, Menéndez protagonizó la primera rebelión militar durante el régimen contra el comandante en jefe del Ejército, Roberto Viola: la disputa permanente entre los "duros" y los "politicistas" se expresaba así a través de otros canales, y les costó a Menéndez y a su segundo, Maradona, el pase a retiro; inmediatamente, la "contraofensiva" de los Montoneros se concretaría en sucesivos atentados contra miembros del equipo económico y empresarios como Guillermo Klein, Juan Alemann o Francisco Soldatí.

Finalmente, el estallido de la crisis de 1980 desató una verdadera tempestad para el equipo económico. Ya en la recta final de su gestión, sus funcionarios resistieron una lluvia de críticas que comenzaron a arrear desde los más variados sectores, muchas de las cuales ponían un fuerte acento en la responsabilidad del "gigantismo del sector público y el paralelo retraimiento del sector privado" en la crisis, y señalaban el "no cumplimiento de las metas fijadas en el discurso de abril de 1976". Mientras Alemann continuaba vociferando que "las irracionalidades que se detectan en la esfera pública son abundantes y ciertamente costosas", y que por ello era menester "privatizar todo lo que es privatizable" (*La Prensa*, 3/7/1980), tanto Oxenford —interventor en la Unión Industrial Argentina— como Piran —presidente de la Sociedad Rural— intimidaban al gobierno a "desarmar el aparato estatal que en su estructura es el obstáculo más importante al cumplimiento de la filosofía del Proceso de Reorganización Nacional", y advertían que "no se insiste suficientemente en la necesidad de reducir el gasto público y la participación del Estado en la economía" (*La Nación*, 3/9/1980 y 5/9/1980). En un sentido contrario, el general Gallino —Fabricaciones Militares— señalaba que "cuando parecía que el camino de la recuperación y de la consolidación de esta industria madre de industrias estaba siendo recorrido, en lo que va del año, nos encontramos frente a una tendencia recesiva que se ha vuelto preocupante", dado que "las autoridades econó-

dieron prioridad al sector financiero y descuidaron la importancia que tiene la industria en el desarrollo del país" (*La Prensa*, 31/7/1980 y 25/10/1980); al tiempo que Rivera—presidente de SOMISA— reclamaba "adecuada protección para la industria siderúrgica" ante una "competencia externa más agresiva que nunca" (*La Nación*, 23/9/1980).

Ante este clima enrarecido, fue uno de los miembros de la Junta Militar quien salió a ganar tiempo. Graffigna anticipó que sería recién "en el próximo período presidencial que estaremos sin duda en condiciones de profundizar el repliegue del intervencionismo que generó nuestra decadencia" (*La Nación*, 30/9/1980). Lo lejos que estaba Graffigna de la realidad sería demostrado, entre otras cosas, por la estrecha asociación que entablaría meses después la flamante gestión de Viola con algunos funcionarios vinculados al complejo militar-industrial, y por lo útil que resultó el intervencionismo a la hora de estatizar los pasivos del sector privado.

Va en septiembre de 1977, Martínez de Hoz había adelantado desde los Estados Unidos, en la Conferencia Industrial Internacional de San Francisco, la hibridez y el pragmatismo con que encararía su gestión:

"En los tiempos modernos nadie puede pensar seriamente en una situación de absoluto *laissez faire* y *laissez passer* por el importante papel adquirido por el Estado [sin embargo] la iniciativa privada es la verdadera fuerza impulsora de la economía, y el papel del Estado no debe exceder el de asegurar la libre competencia, fijando pautas e incentivos para estimular o desalentar determinadas actividades en procura de un desarrollo armónico [...] El programa económico puesto en marcha en la actual etapa busca adaptarse a las condiciones del mundo moderno y ajustar la economía a la realidad. Es un programa pragmático y flexible en oposición a las rígidas fórmulas dogmáticas; adopta las medidas necesarias con firmeza y determinación, sin concesiones a la demagogia" (*Clarín*, 12/9/1977).

La solemne reticencia del "superministro" a la "demagogia" no obturó la posibilidad de emplearla cuantas veces lo indicó su apego a la *realpolitik*. En una primera etapa, Martínez de Hoz no titubeó a la

hora de entregarles a los sectores "duros" de las Fuerzas Armadas la dirección del Ministerio de Planeamiento, cuya creación entraba en contradicción flagrante con los principios más básicos del liberalismo que predicaba ante la extasiada opinión pública liberal; tampoco titubeó a la hora de dar por tierra con la anacrónica experiencia de Díaz Bessone cuando dejó de resultar funcional a sus objetivos. En una segunda etapa, la ambigua estrategia con la que el equipo económico encaró su relación con los sectores estatistas de las Fuerzas Armadas se reflejó con claridad en los vaivenes de su discurso público, que transitaba desde una voluntad inicial de enérgica transformación del Estado hasta la implementación final de una tibia "privatización periférica". Estas ambigüedades habían sido bien percibidas por el avezado Alsogaray, quien había señalado que el ministro realizaba "curiosas concesiones a la mentalidad, a la prédica y al lenguaje desarrollista, a pesar de que el desarrollismo no pierde oportunidad de hostigarlo" (*La Nación*, 16/8/1978).

La estrategia con la que Martínez de Hoz transitó su angosto desfiladero era bifronte: ante las presiones de los sectores que demandaban la urgente reducción del gasto público y la privatización de empresas estatales pedía tiempo, y señalaba la dificultosa tarea de vencer tanto la "inercia física de una estructura sobredimensionada y de una rigidez administrativa enorme", como la "inercia mental de todos aquellos que tienen algo que ver con el problema y que [...] deben ser persuadidos gradualmente"; mientras que ante los poderosos funcionarios de las empresas públicas defendía la presencia del Estado en ámbitos donde "no hay mejor negocio que la administración del Estado mismo".⁷⁶ También Alemann, su más aguerrido ladero, quien en un inicio se había autodenominado como el más ferviente "custodio del gasto público" y partidario de "privatizar todo lo que sea privatiza-

⁷⁶ Según Schvarzer (1981), durante el período, y contrariamente a los objetivos enunciados por el equipo económico, la actividad económica estatal no sólo creció sino que además el Estado fue ocupando un lugar de mayor predominio en la economía nacional. Canitrot (1980) coincide en este sentido al afirmar que "la única política efectivamente antiestatista que llevó a cabo el liberalismo económico fue la de acordar al sector financiero el rol central que el Estado tenía hasta 1977 en las transferencias de ingresos entre sectores". Sobre el importante rol del Estado durante este período, véanse los textos de Alfredo Pucciarelli y Ana Castellani en este volumen.

ble", concluiría defendiendo al régimen por ser el "más grande realizador de grandes obras públicas de la historia argentina" (23/7/1979, cit. en Troncoso, 1984, vol. ni: 109). Hacia 1981, el ministro revelaría 'cada caso de privatización y cada caso de reorganización ha sido batalla campal que ha debido ganar trincheras por trincheras' (2/3/1981, cit. en Schvarzer, 1981: 52).

La resultante de este complejo juego de presiones implicó que el equipo económico no cumpliera con varios de los objetivos explícitos en el discurso inicial del 2 de abril, ampliamente aplaudido por la opinión pública liberal: entre ellos, la conjura de la inflación, la reducción del gasto⁷⁷ y la eliminación del déficit fiscal, el encuadramiento de las obras públicas en los límites de una financiación no inflacionaria, la racionalización de la administración central, un profundo proceso de privatización de empresas públicas,⁷⁸ etcétera, fundamen-

⁷⁷ Según Rapoport, "la tendencia del gasto público fue creciente tanto en términos relativos al producto como en términos absolutos. Sin embargo, se produjo una importante modificación en su composición, ya que el peso de partidas como el gasto en salud o educación se redujo sustancialmente, mientras crecían partidas como los armamentos. Especialmente significativo fue el recorte en personal, cuya participación en la estructura del gasto se contrajo en once puntos en 1976; aunque luego se recuperó en parte, el nuevo ajuste implementado en 1982 volvió a hacerlo descender de modo ostensible. Tal evolución se relacionaba más con una caída de los salarios de los empleados que con una racionalización" (Rapoport *et al.*, 2000: 816).

⁷⁸ En efecto, Schvarzer (1981) señala que la política de privatizaciones de Martínez de Hoz se limitó a someter a un proceso de "privatización periférica" a las empresas públicas "clásicas", de larga existencia en el país y de influencia decisiva en algunos sectores productivos —tales como YPF, YCF, SEGBA, Aerolíneas, Subterráneos, Agua y Energía, Gas del Estado, Ferrocarriles, Administración General de Puertos, ELMA, EN-Tel, ENCOTEL, Fabricaciones Militares—, a transferir nuevamente al sector privado las empresas que habían sido originariamente privadas y luego "rescatadas" por el Estado —tales como SIAM, Editorial Codex, La Cantábrica, etcétera—, y a una enérgica —aunque de impacto desdeñable— privatización de establecimientos provinciales y municipales de escasa importancia económica. Por otra parte, el proceso privatizador durante el período no sólo adolecería de una flagrante tortuosidad y lentitud (Schvarzer, 1981) sino que varias de las operaciones serían sospechadas de corrupción, originando más de un inconveniente para algunos miembros del equipo económico. Por caso, puede señalarse la privatización de La Cantábrica, cuyos síndicos denunciaron a Martínez de Hoz y a Egidio lanella —presidente del Banco Nacional de Desarrollo— como responsables de las irregularidades en la privatización y en el posterior vaciamiento de la empresa, que habría tenido el objetivo de librar a ACINDAR, antaño presidida

talmente por la necesidad de adaptarse a las resistencias de los sectores estatistas de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la entrega de estas prendas de negociación le permitió avanzar en un objetivo superior, ampliamente cumplido: el de transformar definitiva e irreversiblemente la economía argentina.⁷⁹

Viola y los fantasmas de la apertura política

Si una imagen había quedado profundamente grabada en la retina de los militares del Proceso, ésta había sido la del repudio público al que habían sido sometidas las Fuerzas Armadas luego del duelo entre Lanusse y Perón. Otra imagen asociada recurrentemente con ésta, era la del presidente Cámpora llevando al seno mismo del gobierno una de las más temidas versiones del "enemigo". Una tercera visión completaba la tríada: la de la cárcel de Devoto abriendo sus puertas para liberar a los militantes políticos presos durante la Revolución Argentina. La posibilidad, forma y plazo de una virtual transferencia futura del poder a los civiles fue, durante todo el período bajo análisis, un verdadero fantasma que recorrió los despachos y

por el ministro, de una de sus mayores competidoras. Asimismo, y tal como señala Senvarzer (1981), a la política de privatizaciones se le superpuso otra, paralela, de estatizaciones: el 24 de mayo de 1978, el Estado se hacía cargo de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, cuyo activo superaba todo lo recaudado por el Estado en materia de privatizaciones entre 1976 y 1981. Al igual que en el caso de la privatización de La Cantábrica, esta estatización generaría un posterior pedido de investigación sobre el accionar de Martínez de Hoz, Alemann y Soldad (h.) —director del Banco Central—, en la operación (cit. en Troncóse, 1984, vol. III: 93).

⁷⁹ En efecto, al calor de la política económica de Martínez de Hoz se operó un proceso de profunda reestructuración en la economía argentina, fundamentalmente por el cambio en el eje de valorización del capital, de las actividades productivas a las financieras, marco en el cual se operó el surgimiento y consolidación de una nueva cúpula de poder económico, conformada por grupos económicos y empresas transnacionales diversificadas y/o integradas (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1986). De esta forma, la política económica logró sentar las bases fundamentales de la desarticulación del modelo de industrialización sustitutiva —y, en consecuencia, de los principales actores sociales que habían protagonizado las pujas por la distribución del ingreso durante éste—, que se completaría finalmente en la década de 1990, durante las sucesivas presidencias de Carlos Menem.

cuarteles; y lo fue, porque si había un tema en el cual los elencos militares disentían profundamente, éste era el de la "salida política".

El régimen se rehusaba a repetir "errores del pasado" y a volver a entregar los resortes del poder a los "responsables del caos". Los argumentos oficiales señalaban que las enseñanzas dejadas por administraciones militares anteriores⁸⁰ debían servir para terminar, de una vez, con la sucesión entre "gobiernos militares fuertes y gobiernos civiles débiles" y poder llegar —en un futuro extremadamente lejano— a la "instauración de una verdadera democracia, representativa, republicana y federal" con la tutela estrecha y permanente de las Fuerzas Armadas. Para ello, se requería de un paso previo: la "consustanciación" de la ciudadanía en los valores del Proceso y la "coincidencia en los puntos fundamentales", lo que suponía arribar a una verdadera "Unión Nacional", una comunidad de perfecta armonía entre las "Fuerzas Armadas y la ciudadanía, donde el conflicto y el disenso fueran cosa del pasado (Canelo, 2001).

Desde el inicio mismo del Proceso, un virtual acercamiento a la civilidad se veía como radicalmente incompatible con la naturaleza represiva del régimen y, sobre todo, con la política económica, que requería altos grados de impermeabilidad a las demandas de la sociedad. Esta unánime voluntad de aislamiento, sin embargo, presentaba matices importantes, que complejizan la distinción ampliamente utilizada entre "duros" y "moderados" para dar cuenta de los alineamientos políticos *intrafuerzas* en el Ejército.⁸¹ En un extremo del es-

⁸⁰ - Yannuzzi (1996) señala que, mientras que la Revolución Libertadora había *proscrito* peronismo en un intento de desperonizar la sociedad, y Onganía había *prohibido* la actividad política, la decisión del Proceso de *suspender* las actividades políticas implicaba, aunque limitadamente, que la actividad política no podía ser totalmente erradicada de la sociedad. Más allá de esta probable aceptación básica, lo cierto es que tanto el *Estatuto de los Partidos Políticos*, que debía regular la actividad partidaria, como la *Ley de Asociaciones Profesionales*, que debía normalizar el funcionamiento de las organizaciones sindicales, fueron dos iniciativas del Proceso cuya sanción se demostraba extremadamente problemática para el régimen.

⁸¹ Resulta un lugar común en la literatura consagrada al análisis de las líneas internas en las Fuerzas Armadas durante el período destacar la relevancia del eje analítico *duros* contra *moderados*, *halcones* contra *palomas*, *corporativistas* contra *politicistas*, etcétera, para interpretar los alineamientos militares en relación con la denominada "salida política" (véanse, por ejemplo: Uñarte, 1992; Vázquez, 1985; Yannuzzi, 1996;

pectro encontramos a los "duros" o *señores de la guerra* —Díaz Bessone, Menéndez, Suárez Masón, Riveros, etcétera— que rechazaban cualquier posibilidad de acercamiento a las organizaciones civiles, que consideraban responsables de la profunda crisis anterior al golpe, y cuyo objetivo primero y excluyente era la victoria sobre la "subversión", punto de partida de la refundación total e irreversible de la Argentina.⁸² A continuación, y en una posición intermedia o "moderada", encontramos a los integrantes de lo que hemos llamado "núcleo estable" del Proceso, los principales apoyos militares de la política económica de Martínez de Hoz, tales como Videla, Harguindeguy y Galtieri, quienes aceptan la posibilidad de una convergencia cívico-militar en el largo plazo, pero como un paso posterior a una renovación total de las élites políticas, que permitiría la conformación de una nueva fuerza que expresara los postulados del Proceso: el Movimiento de Opinión Nacional.⁸³ Por último, y completando el arco, los

etcétera). Así, se distinguen los militares más proclives al acercamiento con los civiles —políticos o sindicalistas— y la convergencia cívico-militar en un tiempo relativamente acotado, de aquellos que clausuran definitivamente cualquier posibilidad de confluencia y promueven una profunda y prolongada renovación de las élites políticas que permita, a un tiempo, la profundización de la "lucha antisubversiva" y la refundación económica y social de la Argentina. Dentro del primer grupo, suelen clasificarse figuras como la de Videla o Viola —los "generales moderados" de los informes de la Embajada de Estados Unidos—, supuesta garantía de una línea "presentable" y moderadora de los embates de los "mesiánicos" de la "lucha antisubversiva". En el segundo grupo suelen ser incluidas figuras tan distantes como la de Harguindeguy o Galtieri, junto a los comandantes de cuerpo. Sostenemos que esta línea analítica resulta insuficiente a la hora de dar cuenta de la complejidad de las posiciones presentadas por los militares del Proceso ante las incertidumbres de la salida política, y que resulta conveniente reconocer una posición intermedia en lugar de las anteriormente descriptas.

⁸² Los linchamientos centrales de esta concepción pueden percibirse en algunos conceptos de Díaz Bessone: "[...] no hay ni habrá solución política, y mucho menos electoralismo alguno que pueda otra vez convertirse en un fin en sí mismo, dando pábelo a la demagogia, a la mentira, a la ineficiencia [...] menos aún, a la complicidad de hecho que se esconde detrás de la seudo respetabilidad democrática formal" (*La Nación*, 3/7/1977).

⁸³ La necesidad de renovación de las organizaciones civiles que sostiene esta línea puede verse en palabras de Videla: "[...] sería contradictorio encarar las futuras conversaciones con las organizaciones en cuanto tales, porque seguramente ejercerían presiones para obstaculizar el empuje renovador. Ello determina la conveniencia de que el diálogo a emprender se materialice a través de individualidades y no de agrupacio-

integrantes de la que hemos llamado "línea politicista" —Viola, Villarreal, Yofre, Liendo, Mallea Gil y Bignone— advertían que el régimen no duraría para siempre, que sus recursos de legitimación se irían agotando inevitablemente, y que los partidos políticos y las organizaciones sindicales existentes podían resultar interlocutores válidos para lograr una transición tutelada y evitar lo que percibían como el peligro de un aislamiento extremo.⁸⁴ La cercanía de Viola a Videla y su circunstancial apoyo al "núcleo estable" del Proceso no le impidieron desarrollar desde el inicio del régimen un estilo político propio que lo distanciara de la misma, sin vulnerar, al menos públicamente, la cohesión del régimen y sin atacar directamente a la política económica que se le presentaba como contraria a las posibilidades de apertura. Su estrategia durante el período Videla había sido, como vimos, la de ejercer importantes presiones sobre los planes de Economía, pero siempre encauzadas en canales institucionales, fundamentalmente desde el Ministerio de Trabajo y la Secretaría General de la Presidencia.⁸⁵

Tras el fracaso del ostentoso *Proyecto Nacional* y del sabotaje al que fueron sometidas otras numerosas propuestas de planes políticos, el principal logro político del régimen había sido la promulgación de las *Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Na-*

nes" (*La Nación*, 7/8/1977). Aunque en un futuro lejano se prevea su existencia, "se «ID a producir modificaciones sustanciales en los agolpamientos políticos, y es muy probable que ya no se pueda o no se tenga que hablar de peronismo y antiperonismo. Otras serán las agrupaciones, razón por la cual, a pesar de que el peronismo pueda ser numeroso, ya no va a pesar como partido" (*La Nación*, 6/5/1977).

⁸⁴ La posición de este grupo puede apreciarse en las siguientes palabras de Viola: "Los sindicatos son un hecho incuestionable y realidad de nuestro tiempo histórico" que "concebidos sin sentido clasista o ideológico negativo son necesarios para representar a los sectores laborales", mientras que "los partidos políticos son una realidad de la historia y la democracia argentina [...] No está en discusión su existencia, sino la forma en que concretarán su rol" (*La Nación*, 24/11/1978).

⁸⁵ El principal obstáculo que le había presentado la línea violista a Martínez de Hoz durante la etapa previa había sido la política sindical del general Liendo, cuyo estilo para con las organizaciones laborales había sido mucho más contemplativo que lo que requería la agenda del "superministro" (Novaro y Palermo, 2003; Quiroga, 1990); asimismo, recordemos que la presencia de "politicistas" como Yofre o Villarreal en la Secretaría General de la Presidencia había limitado notablemente la autonomía del ala económica.

cional, en diciembre de 1979. Sin embargo, el lanzamiento del diálogo entre el ministro del Interior y distintos representantes del "quehacer nacional" se había visto opacado por el desmoronamiento del plan de Martínez de Hoz; asimismo, el énfasis puesto en la implementación de la política económica y la adecuación prácticamente imparable de la agenda a los requerimientos del "superministro" habían relegado a un segundo plano los imperativos políticos del régimen, cuyos principales recursos de legitimación se habían eclipsado con los estertores de la "lucha antisubversiva" y, ahora, con el estallido de la crisis económica. Así, hacia fines de 1980, gran parte de los elencos gubernamentales se orientaban según su posicionamiento alrededor de dos ejes centrales: la política económica de Martínez de Hoz y la salida política. Para quienes querían profundizar la política económica, resultaba imprescindible demorarlas expectativas sobre la salida política, y para quienes percibían que el inicio del diálogo con los civiles resultaba imperativo para un régimen debilitado, era necesaria la modificación de la política económica (Schvarzer, 1984). En esta encrucijada Viola era nombrado el sucesor de Videla,⁸⁶ quien le cedía, además del mando, la pesada carga de sostener la continuidad de un Proceso que se encontraba, a todas vistas, agotado:

"Tengo plena fe en el acierto con que gobernará mi sucesor, y pienso, que la voluntad de la Junta Militar ha permitido que en mi caso se cumpliera algo que raras veces la política permite: ser reemplazado en el ejercicio del poder por la misma persona que uno hubiera elegido para hacerlo. Con él vendrán hombres nuevos que sumarán su entusiasmo y experiencia a la labor de gobierno, respetando la dedicación y la perseverancia de los que la abandonan. Hablarán, quizá, con términos distintos. Pero querrán los mismos resultados" (*Clarín*, 27/3/1981).

⁸⁶ La designación de Viola habría sido ampliamente saboteada por el saliente Martínez de Hoz, quien en una reunión en el Fondo Monetario Internacional, en Nueva York, habría iniciado el rumor de que Viola no sería nombrado presidente, con el claro objetivo de restarle autoridad ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos (*Somos*, n° 351, 10/6/1983); también la Armada se habría opuesto inicialmente a la candidatura de Viola, para aceptar luego los votos del Ejército y la Fuerza Aérea, al igual que los "duros" dentro del Ejército.

Pero Viola y Videla poseían concepciones diferentes,⁸⁷ sobre todo lo concerniente al lugar que para cada uno de ellos debía alcanzar el ejercicio de la política dentro del esquema de poder del Proceso. A pesar de que desde su nombramiento como futuro presidente en octubre de 1980 hasta su asunción en marzo de 1981, Viola había sostenido públicamente su voluntad de mantenerse férreamente alineado tras la "filosofía de los Documentos Básicos del Proceso" —en medio de las crecientes dificultades económicas y políticas que signaron su asunción—, en la opinión pública se fue instalando progresivamente la percepción de que, en realidad, una vez que asumiera, quebraría la continuidad. Esta percepción operaría, ya desde el inicio como un elemento debilitador de la gestión de Viola.

Lo que pretendía el nuevo presidente no era apartarse de la "filosofía" del Proceso sino, más modestamente, revitalizar sus quebrados principios de legitimación apelando a un último recurso —el mismo que, por otra parte, había defendido desde el inicio como uno de los fundamentales—: una estrategia de acercamiento a las organizaciones de la sociedad civil y el reconocimiento oficial de la estructura partidaria como instancia válida de mediación política. El giro de Viola se sustentaba así en dos planos: en la necesidad de darle nuevos aires de legitimidad al Proceso y superar la profunda crisis en el plan económico, y en su propia convicción acerca de la necesidad de apertura hacia las organizaciones de la sociedad civil. Ya en su discurso de asunción, Viola señalaba:

"He aquí un ejemplo más de las limitaciones que alcanzan las herramientas conceptuales existentes para dar cuenta de las orientaciones de los militares del Proceso: si bien aquéllas sostienen la fuerte influencia de las trayectorias profesionales comunes» en las concepciones ideológicas de los protagonistas, el caso particular de Videla y Viola las debilita. A pesar de pertenecer ambos al arma de infantería, de ser compañeros de promoción, de haber estado destinados juntos tanto en el Colegio Militar como en la Escuela Superior de Guerra, y de haber coincidido fuertemente en sus destinos profesionales, las diferencias entre Viola y Videla fueron ciertamente relevantes. Según lo expresa el mismo Videla: "Yo era el Ejército y Viola... la política [...] Estuvimos juntos en las campañas de azules y colorados. Eramos colorados. En la época de Anaya, yo era el de operaciones y él, el político [...] Yo era Jefe del Estado Mayor General del Ejército y Viola el secretario general, cuyas funciones son políticas. Él hacía los discursos de Anaya: yo, las órdenes de operaciones" (Seoane y Muleiro, 2001: 26).

"Cada etapa trae la necesidad de hacer frente a nuevos y distintos problemas. Los cambios que se han venido produciendo, tanto en la situación interna del país como en el contexto internacional exigirán, en algunos casos, la fijación de nuevos cursos de acción. [...] En la etapa que se inicia, una de nuestras responsabilidades primordiales consiste en normalizar la actividad de las instituciones y entidades intermedias del quehacer nacional: políticas, profesionales, empresarias, sindicales y otras" (*Clarín*, 31/3/1981).

Y esto quedó evidenciado en la conformación de su gabinete: de ocho ministerios se pasaba a trece, con plena mayoría de funcionarios civiles —las Fuerzas mantuvieron dos ministerios cada una—, y el "superministerio" de Economía fue dividido en cinco carteras. Pero lo más notorio de esta nueva disposición era que gran parte de los nuevos funcionarios se revelaban como verdaderos "representantes sectoriales" (Novaro y Palermo, 2003) entre los cuales se encontraban, por otra parte, varios acérrimos enemigos de Martínez de Hoz.⁸⁸ Si bien el reclutamiento civil privilegiaba el ascenso de figuras políticas afines al régimen —provenientes de la Fuerza Federalista Popular (FUFEPO), el Movimiento Línea Popular (MLP), el Partido Demócrata Progresista (PDP) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID)—, Viola también encaraba una tarea de acercamiento con el radicalismo y el peronismo,⁸⁹ prometiendo, entre otras cosas, una pronta sanción del tan esperado *Estatuto de los Partidos Políticos*:

⁸⁸ Los nombramientos más notables en este sentido fueron los del general Diego Uricarriet—ex presidente de Fabricaciones Militares— en la cartera de Obras y Servicios Públicos, el de Jorge Aguado —CARBAP— en Agricultura, el de Eduardo Oxenford —UIA— en Industria y Minería, y el del vicealmirante Lacoste —que durante el Mundial se había enfrentado públicamente con Juan Alemann— en Acción Social. Otros designados fueron, además de figuras clave como Lorenzo Sigaut en el Ministerio de Economía y el general Horacio Liendo en el del Interior, Carlos García Martínez en Comercio e Intereses Marítimos, el brigadier Julio Porcile en Trabajo, Osear Camilión en Relaciones Exteriores, Amadeo Frúgoli en Justicia, el contralmirante (RE) Norberto Couto en Defensa, el brigadier (RE) Amílcar Arguelles en Salud Pública y Carlos Burendarena en Educación.

⁸⁹ En febrero de 1981, Viola había pronunciado estas inquietantes declaraciones: "el peronismo es un movimiento argentino y de mucho arraigo popular al que sectores marxistas le hicieron una propuesta concreta a partir de 1973, tratando de injer-

"Los partidos políticos, organizaciones imprescindibles para el pleno funcionamiento de la democracia, son los instrumentos válidos para canalizar las inquietudes ciudadanas [...] En este período habrán de sancionarse los instrumentos legales que los habiliten a fin de que se integren activamente a la tarea común de consolidar una democracia sólida, moderna y estable. [...] Reconocemos el esfuerzo realizado por las organizaciones representativas de los trabajadores, las que en los últimos cinco años han contribuido al mantenimiento de la paz social [...] A ellas y a sus representados, les decimos que estamos convencidos de la necesidad de promover su participación en el logro de un orden social justo. [...] Reconocemos la participación en el Proceso de las organizaciones del empresariado y esperamos a que se intensifique en el futuro [...]" (*Clarín*, 31/3/1981).

El nuevo programa político enunciado por Viola, basado en una apertura a las organizaciones partidarias y sindicales, sin que éstas abandonaran su concepción "populista" ni oficiaran cambios en sus estructuras organizativas, fue percibido inmediatamente por los sectores proclives a la profundización del modelo económico de Martínez de Hoz como un intento, desde una fracción militar minoritaria, de dar por tierra con las bases del proyecto de reforma económica y con el modelo de democracia afín que los elencos militares habían intentado construir durante los últimos cinco años. Los anuncios en materia económica tampoco resultaron alentadores para los defensores de la "línea estable" del Proceso; en ese plano, Viola proponía:

"Reanimar la actividad económica; restablecer la confianza en el mercado cambiando, tendiendo a su sinceramiento y reafirmando los principios de una economía correlacionada en lo comercial y financiero con el mercado internacional; atacar las causas de la inflación con métodos genuinos para su erradicación; reducir las tasas de interés reales

tarse en sus filas. Fue el propio Perón quien los repudió en su histórico discurso el 1° de mayo de 1974, poco antes de su muerte. No dudo que en el proceso de restablecimiento democrático el peronismo podrá —y esto sólo depende de la voluntad y la conducción de sus hombres—, estructurarse y participar activamente en la vida política nacional" (*Clarín*, 1/3/1981).

positivas a niveles compatibles con márgenes normales de rentabilidad empresaria y extender los plazos de financiamiento; defender la producción nacional de la competencia exterior subsidiada mediante prácticas de dumping; reducir sustancialmente el gasto público; [...] aumentar progresivamente el ingreso real y mantener el nivel de empleo; [...] considerar las bases de un programa tendiente a aliviar la situación de las empresas privadas con el sistema financiero [...]" (*Clarín*, 31/3/1981).

Si las primeras señales de Viola despertaron sólo un tibio interés en las organizaciones que se proponía interpelar para constituir las como bases de la revitalización del Proceso,⁹⁰ sí provocaron una importante reacción en los sectores que defendían la política económica de Martínez de Hoz, en las fracciones "duras" del Ejército, que recelaban de la apertura del régimen, y, en particular, dentro de la Junta Militar, donde crecía la figura de Galtieri. Estos frentes contrarios a la apertura de Viola se irían abriendo progresivamente, como veremos a continuación.

El primero de los obstáculos a la gestión de Viola fue, una vez más, el diseño institucional tripartito y la supremacía de la Junta por sobre la figura presidencial, lo cual le restaba una base de apoyo propia. La Junta conformada por Galtieri, Anaya y Lamí Dozo —sucesor de Graffigna— no sólo se aseguraría de rodear a Viola con algunos

⁹⁰ Para los principales dirigentes políticos, los celos hacia Viola se nutrían de dos vertientes: por un lado percibían que el régimen ya se encontraba lo suficientemente desgastado como para que un acercamiento aun mayor les proveyera de demasiadas ventajas y, por otro, Viola les resultaba una garantía demasiado endeble frente a la creciente autoridad de Galtieri dentro de la Junta. En julio de 1981, diversas corrientes políticas confluirán en la conformación de la *Multipartidaria*, que inmediatamente se posicionará con un documento público que reclamaba el "inmediato retorno al estado de derecho y a la plena vigencia de la Constitución", lo que coincidirá con un documento de la Iglesia —*Iglesia y comunidad nacional*— donde la curia se desvinculaba de lo que había sido un activo apoyo al régimen (Novaro y Palermo, 2003; para una reconstrucción de lo actuado por los partidos políticos durante el Proceso, véanse además Quiroga, 1990, y Yannuzzi, 1996). En el caso de las organizaciones empresarias, el involucramiento de representantes de CARBAP y UIA en el seno del gabinete no sólo no bastó para integrarlas como base social del régimen sino que potenció el distanciamiento de Viola de los sectores financieros —tal es el caso de ADEBA—, y en los momentos de crisis quedó ampliamente demostrado que las lealtades de los funcionarios eran más proclives a los intereses de sus representados que a los del propio gobierno que integraban (tal es el caso de la temprana renuncia de Oxenford en agosto de 1981).

asesores de la línea videlista —entre ellos, los generales (RE) Albano Harguindeguy y Hugo Miatello— sino que también se cuidaría, a sólo veinte días de la asunción del nuevo Presidente, de maniatarlo con las *Pautas de Acción de Gobierno para 1981-1984* que debían instruirlo acerca de cómo "moverse políticamente en el próximo período de su gestión",⁹¹ según palabras del propio Galtieri, quien además agregó, para no dejar dudas, que "acá hay un cambio de hombres [...] no hay cambio de filosofía económica, ni política [...] de ser así, estoy seguro de que el señor presidente hubiera renunciado, o la Junta le habría» solicitado la renuncia" (*La Nación*, 21/4/1981). El 10 de mayo, adviniendo estas desavenencias, el diario *La Nación* tituló su *Semana Política* con el interrogante: "Galtieri, ¿se parece a Lanusse?", y homologó así, también, a Viola con el ex presidente de facto Levingston, quien durante la Revolución Argentina había debido aceptar que el verdadero poder se encontraba en el Comando en Jefe del Ejército. Se intensificaba así el clima de rumores que se había iniciado durante los últimos tramos de la presidencia de Videla y que acompañaría a Viola hasta el final, lo obligaría a responder innumerables veces acerca de su identidad política "casi absoluta" con la Junta (*La Nación*, 15/5/1981) y perfilaría un creciente debilitamiento de su autoridad. Viola se declaró luego víctima de una "campana de rumores" producto de "intereses sectoriales" que, a través de la "generación de imágenes erróneas acerca de fisuras en la cohesión interna de las fuerzas Armadas pretenden mostrar la existencia de divergencias en el seno de la Junta Militar y entre ésta y el Poder Ejecutivo Nacional" (*La Nación*, 4/6/1981).⁹²

⁹¹ " Según Novaro y Palermo (2003), dichas *Bases* dejaban claro que para la Junta nada había cambiado respecto de los principios del período anterior: postergaban para 1982 la aprobación del Estatuto de los Partidos Políticos, y reiteraban su postura — muy clara en el caso de Galtieri— acerca de que el diálogo sólo podía establecerse con "dirigentes idóneos" que respondieran a "los postulados del PRN".

⁹² En esta defensa de la cohesión interna la presencia de los miembros de la Junta fue igualmente importante, y también la del general de brigada Alfredo Saint Jean —hermano del ex gobernador de Buenos Aires—, ahora secretario general del Estado Mayor General del Ejército (había sucedido a Bignone en el mismo mes de diciembre de 1980, y antes a Liendo en la segunda jefatura del Estado Mayor General). Posteriormente Saint Jean se desempeñaría como ministro del Interior de Galtieri.

En segundo lugar, los sensibles indicadores económicos tampoco colaborarían con Viola y demostrarían que lo sembrado por Martínez de Hoz sería ampliamente cosechado por Sigaut. El objetivo fundamental del sucesor del "superministro" sería superar la profunda crisis en la que el plan de su antecesor había sumido a la economía argentina, concentrándose fundamentalmente en el sector financiero⁹³ y avanzando aún más en la corrección del tipo de cambio. Luego de la devaluación de 10% que había sido "concertada" con el equipo de Martínez de Hoz en febrero de 1981, el 2 de abril el ministro dispuso otra de 30,14%, eliminando la "tablita" cambiaría y estableciendo un tipo de cambio fijo. A esta altura de los acontecimientos, los agentes económicos no necesitaban más señales: luego de que en mayo, el ministro de Comercio García Martínez deslizará imprudentes afirmaciones que llevaron a las tapas de los principales diarios del día 28 la aterradora sentencia: "advértese sobre el riesgo de un colapso económico", se produjo una inmediata fuga de reservas del Banco Central. En el mes de junio, y luego de negar terminantemente una nueva devaluación —acuñando la tristemente célebre frase "Quien apueste al dólar, pierde" (*Clarín*, 19/6/1981)—, Sigaut dispuso una tercera devaluación de 30%, y se estableció una pauta futura de devaluación de 6% mensual, que en septiembre sería modificada por la fijación de un doble tipo de cambio. Asimismo, y una vez más, la intervención estatal, al igual que en el período de Martínez de Hoz, se mostraba como particularmente beneficiosa a la hora de subsanar las "deficiencias del libre mercado": en el mes de junio se estableció un sistema de "seguros de cambio" que cubría el repago de créditos obtenidos en el exterior por el sector privado, sistema que sería ampliado posteriormente por fuertes *lobbies* empresarios, y que agudizaría aún más el ya preocupante cuadro de endeudamiento externo. Las nuevas medidas provocarían la renuncia del presidente y vicepresidente del Banco Central —Julio Gómez y Martín Lagos res-

⁹³ La política económica de Sigaut comprendía múltiples mecanismos cortoplacistas de salvataje del sector bancario —adelantos, redescuentos, apoyo financiero especial—, medidas antirrecesivas —apoyo financiero para reactivar economías regionales, créditos para el sector productivo y las exportaciones—, una fuerte presión sobre el sector monetario por medio de altas tasas de interés, etcétera (Feldman y Sommer, 1986; Rapoport *et al.*, 2000).

pectivamente— y múltiples repercusiones en el espectro empresario y económico.

Las críticas de los economistas no tardaron en arreciar: mientras Juan Alemann sostenía que habría sido más "ajustado haber dejado en libertad el mercado cambiario mediante la flotación" y que la confianza había "sido violada tres veces desde febrero a la fecha", Alsogaray—jugando su propio juego— sostenía que las actuales autoridades eran "un poco prisioneras de la herencia recibida", y Aldo Ferrer manifestaba que la estrategia monetaria había "fracasado definitivamente" (*La Nación*, 3/6/1981). Roberto Alemann y Alejandro Estrada, por su parte, acusaban a Sigaut de "abandonar la lucha contra la inflación" que era, sobre todo, un "imperativo político" (*La Nación*, 16 y 19/6/1981). Carente de las habilidades políticas de su antecesor, Sigaut aparecía cada vez más como evidentemente incapaz para controlar los demonios de la crisis económica, lo cual profundizaba aún más la vulnerabilidad de Viola. El presidente respondía, extremadamente debilitado, que podrían tener razón quienes "aveces con inocultable propósito desestabilizante" decían que el Proceso estaba en crisis, pero que se trataba de "la crisis del cambio" y no de una "crisis de fundamentos, sino de instrumentos; es de procedimientos, no de esencia", y que estos "temores y desconfianzas [...] no son sino el resultado de la reacción y de los rumores propagados por quienes sienten sus intereses afectados, sea por lo resuelto en materia económica, sea por el trayecto político del gobierno, o por ambas cosas a la vez" (*Clarín*, 20/6/1981).

Los frentes de reacción eran bien percibidos por Viola, pero aún restaba la apertura del último de ellos: el de los oficiales retirados del ala "dura". Para éstos, el acercamiento de Viola al peronismo resultaba una irritante provocación y una llana violación de los principios básicos del Proceso: el peronismo continuaba siendo el "responsable del caos" que las Fuerzas Armadas habían venido a conjurar, por lo que el régimen debía condenarlo, cuanto menos, al silencio y la proscripción eternas. Ya el 11 de junio, Menéndez, aunque distanciándose también de Martínez de Hoz, había anticipado este malestar al sostener: "el Proceso no sólo no ha seguido sus objetivos, sino que ha derivado en un camino completamente distinto, alejado de las pautas y documentos iniciales" (*La Nación*, 11/6/1981). Y el 4 de julio, en la comida anual del Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas,

los retirados expresaron en términos poco sutiles su extrema disconformidad con la marcha del gobierno:

"Todo pareciera indicar que marchamos con rumbo equivocado y con riesgo de retornar a épocas que creíamos definitivamente superadas. [...] existen alternativas negativas en el orden interno y en el internacional con presiones de orden político y económico, con cada vez menor capacidad de maniobra, menores recursos y mayores dificultades. Por todo esto, hoy nadie duda que nuestra responsabilidad y prestigio están en juego [...] [las Fuerzas Armadas deben comprometerse a] proscribir la ideología política que en su forma y en su fondo engendró tantos males llegando a atentar, de manera casi insanable, contra la salud moral de la República. [...] es necesario establecer la validez de los interlocutores sobre la base de sus antecedentes morales, intelectuales y políticos [...]" (*La Nación*, 4/7/1981).

Los oficiales retirados le exigían a Viola "actualizar o corregir" el plan de acción "en el menor tiempo y en la mejor forma", y "oír la voz de la experiencia ajena, sin olvidar que la propia cuesta cara y llega tarde". A punto de reiniciar Liendo las rondas del diálogo político —suspendidas desde el final de la gestión de Harguindeguy— y a sólo tres meses de haber asumido, Viola contaba ya en su haber el estallido de la economía, tres devaluaciones, las renuncias de las cúpulas del Banco Nación y del Banco Central, profundas tensiones entre los cinco ministerios en los que había dividido el de Economía —producto, entre otras cosas, de la conversión de dichos cargos públicos en punta de lanza de variados intereses sectoriales—, un frente militar tenso y exigente, la estrecha tutela de una Junta alerta y una opinión pública adversa —cada vez más influida por las crecientes denuncias de los organismos de derechos humanos pero, sobre todo, por la crisis económica generalizada⁹⁴— de la que no había podido obtener ni siquiera el apoyo de los dirigentes políticos.

⁹⁴ "Hacia fines de 1981, el dólar había incrementado su paridad en 80% y la inflación —de 200% anual— impactaba en el mercado interno en un círculo vicioso recesivo. Entre fines de 1980 y fines de 1981, el PBI industrial había caído 22% y el PBI glo-

El diálogo político, que era entendido por Liendo como "la necesidad de las Fuerzas Armadas de limitarse en el tiempo y asegurar su desemboque", y nudo fundamental de la estrategia de Viola, iba a fracasar antes de nacer, tal vez porque su tiempo y su oportunidad se habían agotado mucho tiempo antes. El 16 de septiembre de 1981, Harguindeguy, bloqueando los avances de Liendo, aseguró que "en 1984 no habrá elecciones presidenciales, el presidente de la nación será designado por la Junta y se mantendrá el actual esquema de poder" (*La Nación*, 16/9/1981). Liendo respondería sosteniendo: "el ministro del Interior soy yo" (*La Nación*, 19/9/1981), pero sería tarde. Ya para octubre de 1981, Viola liquidará su propia estrategia ratificando la vigencia de la ley de suspensión de las actividades políticas, y anunciando que "no estaba dispuesto a adelantar ningún cronograma que disponga una convocatoria electoral apresurada" ya que sería la Junta Militar la que "determinará el procedimiento para elegir presidente en 1984" (*La Nación*, 7/10/1981), redireccionando su estrategia hacia el mantenimiento de un juego político mínimo al interior del régimen que lo legitimara, también mínimamente (Yannuzzi, 1996).

La apertura de Viola había muerto. Lo que éste pudo durar en el cargo fue lo que necesitó Galtieri para reencontrarse en la Junta con un viejo amigo, el almirante Jorge Isaac Anaya, y para que el brigadier Lamí Dozo sucediera a Graffigna. El 10 de noviembre de 1981 Viola se internaría en el Hospital Militar por un "cuadro de hipertensión" y luego de aciagos días "de expectación", el 21 de noviembre Liendo se haría cargo del Poder Ejecutivo. El comunicado de la Junta Militar señaló la decisión de Viola de "delegar en el señor ministro del Interior el Poder Ejecutivo Nacional, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 6° del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional" (*La Nación*, 21/11/1981). Tras un breve interinato del almirante Lacoste, el 12 de diciembre de 1981 la Junta nombró presidente a Galtieri, quien asumió el día 22. "Yo no renuncié a la Presidencia de la Nación

bal, 9%. La desocupación crecía y caían los salarios reales. Se trataba de la mayor recesión desde los años treinta. La balanza comercial era superavitaria debido al retroceso de las importaciones y a un cosecha récord, y el saldo positivo se destinaba a una deuda que crecía desbocada" (Novare y Palermo, 2003: 387).

por razones de salud. Está perfectamente claro que yo fui removido", declararía Viola días después (*Clarín*, 5/1/1982).

Finalmente, las tensiones que fragmentaban al Proceso provocaron un verdadero autogolpe institucional, que en nada contribuyó a consolidar bases de sustentación que superaran las meramente represivas. La posibilidad de revitalizar la endeble legitimidad del régimen que había ensayado Viola a través de un intento de articulación de una apertura política no había podido sortear la fortaleza de los apoyos de la reforma económica de Martínez de Hoz y los temores de los "duros" a los fantasmas de la convergencia política. Aunque más que un verdadero quiebre con los principios económicos de Martínez de Hoz, Viola había ensayado una tímida corrección debido al profundo agotamiento que presentaban hacia fines de 1980, lo que verdaderamente había volcado el tablero en su contra fue el sesgo político aperturista con el que intentó acompañar este "retoque" económico. Su estrepitosa caída demostró que la necesidad del régimen de transformarse y adaptarse a nuevas coyunturas sólo podía resolverse mediante la destrucción de su propia estabilidad.

La crisis económica, el desgobierno y la que era percibida como una desmedida tendencia "politicista" lograron articular una nueva confluencia entre la radicalización represiva de los "duros",⁹⁵ ahora encabezados por el "majestuoso" Galtieri —quien, entre otras cosas, reunificaría en su propia figura los cargos de presidente, comandante en jefe y miembro de la Junta—, y los "muchachos" de Martínez de Hoz, entre ellos el flamante ministro de Economía Roberto Alemann, quienes intentarían una virtual restauración de la situación original del Proceso a partir de 1982.⁹⁶ Agotadas la "lucha antisubversiva",

⁹⁵ Si bien los "duros" del período de Videla habían pasado a retiro sucesivamente, hacia 1980 se perfilaba una nueva generación con similares concepciones, entre los que se encontraban los generales Cristino Nicolaidis, comandante del Cuerpo de Ejército III y Juan Carlos Trimarco, comandante del Cuerpo de Ejército II.

⁹⁶ Tal como señalan Novaro y Palermo (2003), esta confluencia entre los "duros" y los partidarios de la profundización de la línea económica de Martínez de Hoz es inseparable de los cambios operados en el contexto internacional: en este plano, a la "revolución conservadora" que se iniciaba en Estados Unidos y el Reino Unido de mano del ascenso de Reagan y Thatcher, se sumaba el auge de la "guerra contrarrevolucionaria" en América Central.

la política económica y la salida política, al régimen pronto le resultaría evidente que si quería permanecer alejado de las urnas, sólo podría salvarlo la guerra con un enemigo externo. Paradójicamente, fue esto lo que lo condenó. Sería finalmente un general de la línea "politicista", Bignone, quien se encargaría de encauzar lastimeramente la tan temida salida política luego del desastre de Malvinas. Los fantasmas de la apertura, de pronto, volvían a golpear la puerta.

Reflexiones finales

La histórica vocación *suprapolítica* de las Fuerzas Armadas argentinas las llevó a perseguir incansablemente una —inalcanzable, por encontrarse tan integradas a lo que Alain Rouquié llamó "sociedad política"— sólida cohesión institucional, que les permitiera ejercer un rol de arbitraje por sobre los conflictos que desgarraban a la sociedad civil. Por todos los medios, las Fuerzas Armadas emprendieron, ya desde 1930, un esforzado sendero intentando distanciarse de la política y sus acechanzas, al tiempo que la política se empeñaba en involucrarlas. El Proceso de Reorganización Nacional marca, sin lugar a dudas, el punto más alto en este camino, al menos en dos aspectos: en el tratamiento *antipolítico* que los represores les reservaron a sus opositores ideológicos y en el aislamiento —complementario al anterior— que le impusieron a su proyecto refundacional, procurando por todos los medios distanciarse de una sociedad que era percibida como al borde del abismo.

A pesar de que los militares se repitieron a sí mismos, con insistencia, la necesidad de no olvidar las experiencias del pasado, y tal como ya lo había anticipado la experiencia de la Revolución Argentina, el nuevo intento militar de anular la política y aislarse de sus rigores, llevó a que ésta invadiera ampliamente, durante el Proceso, despachos y cuarteles. Desde allí, la política se atrincheró para conspirar contra la realización de varios de los objetivos del Proceso.

Se ha afirmado, con certeza, que las transformaciones políticas, sociales y económicas que se produjeron durante la última dictadura militar confluyeron para desarticular, al menos en sus aspectos más relevantes, el modelo económico y estatal que le había otorgado di-

rección al ciclo histórico iniciado a partir de la segunda posguerra. El Proceso de Reorganización Nacional logró así, sin lugar a dudas, uno de sus objetivos mayores: el de su *irreversibilidad*.

Sin embargo, varios de los objetivos impulsados desde las élites cívico-militares desde mediados de la década del setenta alcanzaron un carácter inconcluso. Prescindiendo de la contundencia de la arrasadora política represiva, llevada adelante con encendida cohesión interna y férreo salvajismo corporativo, lo inconcluso del Proceso se encarnó no sólo en una miríada de proyectos políticos de variadas orientaciones ideológicas que quedaron sepultados luego del veloz derrumbe del régimen autoritario más sangriento de la historia política argentina sino, y sobre todo, en el abandono progresivo de varios de los propósitos de una política económica que, inicialmente, se imponía metas mucho más ambiciosas de las que finalmente lograría alcanzar.

Como vimos, la política económica de Martínez de Hoz fue implementada entre estrechos márgenes. Por un lado, se encontraba limitada por la propia división en el interior del equipo económico, dentro del cual convivían al menos dos fracciones de un liberalismo vernáculo en reformulación; por otro, por la presencia en el interior de las Fuerzas Armadas de vastos sectores que, por diferentes motivos, rehuían ciertos aspectos de sus objetivos refundacionales.

A pesar de que durante todo el período el plan económico operó como la verdadera agenda del régimen, sepultando uno a uno los más variados imperativos que surgían de un entorno cambiante y conflictivo, también operó, paradójicamente, como el principal "tema de oposición", que fue empleado por propios y ajenos como punta de lanza en la persecución de sus propios objetivos políticos, y se fue convirtiendo en el principal canal de expresión de las fuerzas centrífugas que convulsionaban internamente al régimen. Dentro del frente militar, las resistencias más significativas fueron ejercidas desde las posiciones más encumbradas: desde la comandancia de la Armada por el almirante Massera, desde las comandancias de los distintos cuerpos de Ejército por los *señores de la guerra*, desde los directorios de las poderosas empresas del Estado por los *burócratas*, y desde la comandancia en jefe del Ejército —y luego, desde el mismísimo sillón presidencial— por el general Viola.

En el primer caso, la particular forma de distribución del poder institucional establecida por el Proceso le permitió a Massera acceder a cuotas inéditas de poder que le posibilitaron obstaculizar reiteradamente, y por diversos medios, el poder del Ejército. La coincidencia entre el proyecto político del almirante y las ambiciones institucionales de la Armada le permitirán al primero ejercer un verdadero sabotaje a la cohesión interfuerzas procurando por todos los medios contribuir al fracaso del proyecto institucional del que había sido parte fundamental, en un intento paralelo por consolidar su poder político personal. Para ambos, la crítica sistemática de la política económica resultó un recurso de primer orden en el combate contra la histórica primacía de los generales.

En el segundo caso, la defensa del aparato estatal, que procuraba reformar el equipo económico, fue ejercida por un conjunto heterogéneo de generales que habían construido su trayectoria profesional bajo el amparo del crecimiento del complejo militar-industrial y las empresas del Estado. Por un lado, los *señores de la guerra* practicaron su propia experiencia estatista en la creación de un Ministerio de Planeamiento, ya que, en una primera etapa, los imperativos de la política económica marcaron la conveniencia de entregarles un espacio de poder a cambio de ingentes avances en la masacre represiva que encabezaban. Por otro lado, los *burócratas* al frente de las principales empresas del Estado encararon una tarea de aguerrida defensa de sus propios territorios frente a los avances del ala económica. Ambos grupos se plantaron frente a los intentos antiestatistas del equipo económico y lograron modificar significativamente sus ambiciones iniciales.

Por último, para quien encabezaba la fracción "politicista" del Ejército, la política económica de Martínez de Hoz resultaba contraria a las necesidades de apertura del régimen. Así, desde la mismísima comandancia del Ejército y desde distintas posiciones dentro de la estructura de mandos, la línea "politicista" procuró, aun sin ejercer una crítica pública consistente, colocar numerosos obstáculos ante los avances de la política económica, negándole al ministro de Economía un apoyo homogéneo dentro de los altos mandos del Ejército. Posteriormente, el tardío ensayo de Viola de revitalizar la endeble legitimidad del régimen mediante un intento de articulación de una

apertura política con ciertas transformaciones correctivas del agotado plan económico, no pudo sortear la fortaleza de los apoyos a la reforma económica de Martínez de Hoz y los temores de los "duros" a los fantasmas de la convergencia política.

Ante estas resistencias, Martínez de Hoz enarboló alternativa y sucesivamente un conjunto de recursos invalorable: el apoyo que le brindaban sus socios principales —Videla, Harguindeguy y Galtieri—, sus propios contactos internacionales, una fuerte ambigüedad en su discurso y en los criterios básicos de las medidas económicas implementadas y una enorme capacidad política para someterse a un complejo juego de intercambio de prendas de negociación que le permitió resignar la obtención de objetivos secundarios para lograr su objetivo más amplio: una profunda e irreversible transformación estructural de la economía y la sociedad argentinas. Pero su principal recurso en la conjura de estas resistencias fue la propia fragmentación del frente militar: las profundas divergencias que atravesaban a las Fuerzas Armadas contribuyeron a que estas resistencias se presentaran aisladas y desarticuladas —lo cual impidió la conformación de un frente común desde el cual pudiera articularse una propuesta alternativa a la del ministro y sus socios—, y a que su carácter fuera netamente defensivo.

Sin embargo, y aunque el contenido de estas resistencias no pudo articularse como una verdadera amenaza contra los objetivos del "superministro", la forma en la cual se expresaron potenciadas, fundamentalmente, por una novedosa distribución institucional del poder, fue altamente corrosiva para el sistema en marcha, y conspiró ostensiblemente contra la estabilidad y pretendida inmutabilidad del régimen militar, contra el logro de varios de los objetivos perseguidos y, postteriormente, contra la integridad institucional de las Fuerzas Armadas.

Referencias bibliográficas

- Acuña, C. y Smulovitz, C. (1995): "Militares en la transición argentina: del gobierno a la subordinación constitucional", VVAA: *Juicio, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- Azpiazu, D., Basualdo, E. y Khavisse, M. (1986): *El nuevo poder económico en la Argentina de los ochenta*, Buenos Aires, Legasa. [Hay edición corregida por Siglo XXI Editores Argentina, 2004.]
- Canelo, P. (2001): "La legitimación del Proceso de Reorganización Nacional y la construcción de la amenaza en el discurso militar. Argentina, 1976-1981", *Sociohistórica*, n° 9/10, Cuadernos del CISH, Centro de Investigaciones Sociohistóricas, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, La Plata, primer y segundo semestre.
- (2002): *"Behemoth Against Leviathan: Enemigo, política y dictadura en la obra de Thomas Hobbes y Carl Schmitt"*, *Politeia*. Revista del Instituto de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, n° 28, Caracas, primer semestre.
- (2003): *Cohesión y conflicto durante la última dictadura militar. Las Fuerzas Armadas ante la "lucha antisubversiva", la política económica y la salida política*, tesis de maestría en Ciencia Política, Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad de General San Martín. (Mimeo).
- Canitrot, A. (1980): "La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el programa económico del gobierno argentino desde 1976", *Desarrollo Económico*, vol. 19, n° 76, Buenos Aires, enero-marzo.
- (1981): *Orden social y monetarismo*, Buenos Aires, Estudios CEDES, n° 4.
- Castellani, A. (2004): "Gestión económica liberal-corporativa y transformaciones al interior de los grandes agentes económicos de la Argentina durante la última dictadura militar", en este volumen.

- Castiglione, M. (1992): *La militarización del Estado en la Argentina (1976-1981)*, Buenos Aires, CEAL, Biblioteca Política Argentina, n° 350.
- Cheresky, I. (1985): "Hacia la Argentina postautoritaria", Cheresky, I. y Chonchol, J. (comps.), *Crisis y transformación de los regímenes autoritarios*, Buenos Aires, Eudeba.
- Falcón, R. (1996): "La resistencia obrera a la dictadura militar", Quiroga, H. y Tcach, C. (comps.), *A veinte años del golpe. Con memoria democrática*, Rosario, Homo Sapiens.
- Feldman, E. y Sommer, J. (1986): *Crisis financiera y endeudamiento externo en la Argentina*, Buenos Aires, Centro de Economía Transnacional/CEAL.
- Fraga, R. (1988): *Ejército: del escarnio al poder (1973-1976)*, Buenos Aires, Sudamericana/Planeta.
- Halperín Donghi, T. (1996): "Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista", Halperín Donghi, T., *Ensayos de Historiografía*, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, Colección La Cultura Argentina.
- Heredia, M. (2000): "La identificación del enemigo. La ideología liberal conservadora frente a los conflictos sociales y políticos de los años setenta", *Sociohistórica*, Cuadernos del CISH, n° 8, La Plata, segundo semestre.
- (2004): "El Proceso como bisagra. Emergencia y consolidación del liberalismo tecnocrático: FIEL, FM y CEMA", en este volumen.
- López, E. (1986): *Seguridad nacional y sedición militar*, Buenos Aires, Legasa.
- Martuccelli, D. y Svampa, M. (1997): *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*, Buenos Aires, Losada.
- Mittelbach, F. y Mittelbach, J. (2000): *Sobre áreas y tumbas. Informe sobre desaparecidos*, Buenos Aires, Sudamericana.
- Novaro, M. y Palermo, V. (2003): *La dictadura militar 1976/1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática*, Buenos Aires, Paidós.
- O'Donnell, G. (1982): *El Estado burocrático autoritario, 1966-1973. Triunfos, derrotas y crisis*, Buenos Aires, Editorial de Belgrano.
- (1997): "Las fuerzas armadas y el Estado autoritario del Cono Sur de América Latina", O'Donnell, Guillermo, *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*, Buenos Aires, Paidós.

- Oszlak, O. (1984): "Privatización autoritaria y recreación de la escena pública", en Oszlak, O. (comp.), *"Proceso", crisis y transición democrática/1*, Buenos Aires, CEAL, Biblioteca Política Argentina, n° 45.
- Potash, Robert (1994): *El Ejército y la política en la Argentina*, Buenos Aires, Sudamericana, 4 volúmenes.
- Pucciarelli, A. (2004): "La Patria Contratista: el nuevo discurso liberal de la dictadura encubre una vieja práctica corporativa", en este volumen.
- Quiroga, H. (1990): *El tiempo del Proceso. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares. 1976-1983*, Rosario, Fundación Ross.
- Rapoport, M. et al. (2000): *Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000)*, Buenos Aires, Ediciones Macchi.
- Rouquié, A. (1981): *Poder militar y sociedad política en Argentina*, Buenos Aires, Emecé Editores, 2 volúmenes.
- Schneider, A. (2000): "'Ladran Sancho...' Dictadura y clase obrera en la zona norte del Gran Buenos Aires", Pozzi, P., Camarero, H. y Schneider, A. (comps.), *De la Revolución Libertadora al menemismo. Historia social y política argentina*, Buenos Aires, Imago Mundi.
- Schvarzer, J. (1981): *Expansión económica del Estado subsidiario*, Buenos Aires, Ensayos y Tesis, CISEA, n° 3.
- (1984): *Martínez de Hoz. La lógica política de la política económica*, Buenos Aires, CISEA.
- Seoane, M. y Muleiro, V. (2001): *El dictador. La historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla*, Buenos Aires, Sudamericana.
- Sidicaro, R. (1996): "El régimen autoritario de 1976: refundación frustrada y contrarrevolución exitosa", Quiroga, H. y Tcach, C. (comps.), *A veinte años del golpe. Con memoria democrática*, Rosario, Homo Sapiens.
- Sigal, S. y Santi, I. (1985): "Del discurso en un régimen autoritario. Un estudio comparativo", Cheresky, I. y Chonchol, J. (comps.), *Crisis y transformación de los regímenes autoritarios*, Buenos Aires, Eudeba.
- Sigal, S. y Verón, E. (1988): *Perón o Muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista*, Buenos Aires, Hyspamérica.
- Troncoso, O. (1984): *El Proceso de Reorganización Nacional. Cronología y documentación*, Buenos Aires, CEAL, Biblioteca Política Argentina, n° 67, 5 volúmenes.

- Turolo, C. (1996): *De Isabel a Videla. Los pliegues del poder*, Buenos Aires, Sudamericana.
- Uriarte, C. (1992): *Almirante Cero. Biografía no autorizada de Emilio Eduardo Massera*, Buenos Aires, Planeta. Vázquez, E. (1985): *La última. Origen, apogeo y caída de la dictadura militar*, Buenos Aires, Eudeba.
- Vezzetti, H. (2002): *Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina.
- Yannuzzi, M. (1996): *Política y dictadura. Los partidos políticos y el Proceso de Reorganización Nacional. 1976-1982*, Rosario, Fundación ROM.

Fuentes

- Proyecto Nacional*, Ministerio de Planeamiento, 25/5/1977.
- Crítica al Proyecto Nacional*, Secretarías de los Comandos en Jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, 1977.
- Plan de acción política de la propuesta de unión nacional*, Secretaría General de la Presidencia, 1977.
- Diarios *La Nación*, *Clarín*, *La Opinión*, *La Prensa* y *Convicción*.
- Revistas *Carta Política* y *Somos*.